



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

15^a REUNION – 9^a SESION ORDINARIA
1° DE JUNIO DE 2005

**Presidencia del vicepresidente de la Nación, don Daniel Osvaldo Scioli
y del señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor Marcelo A. H. Guinle**

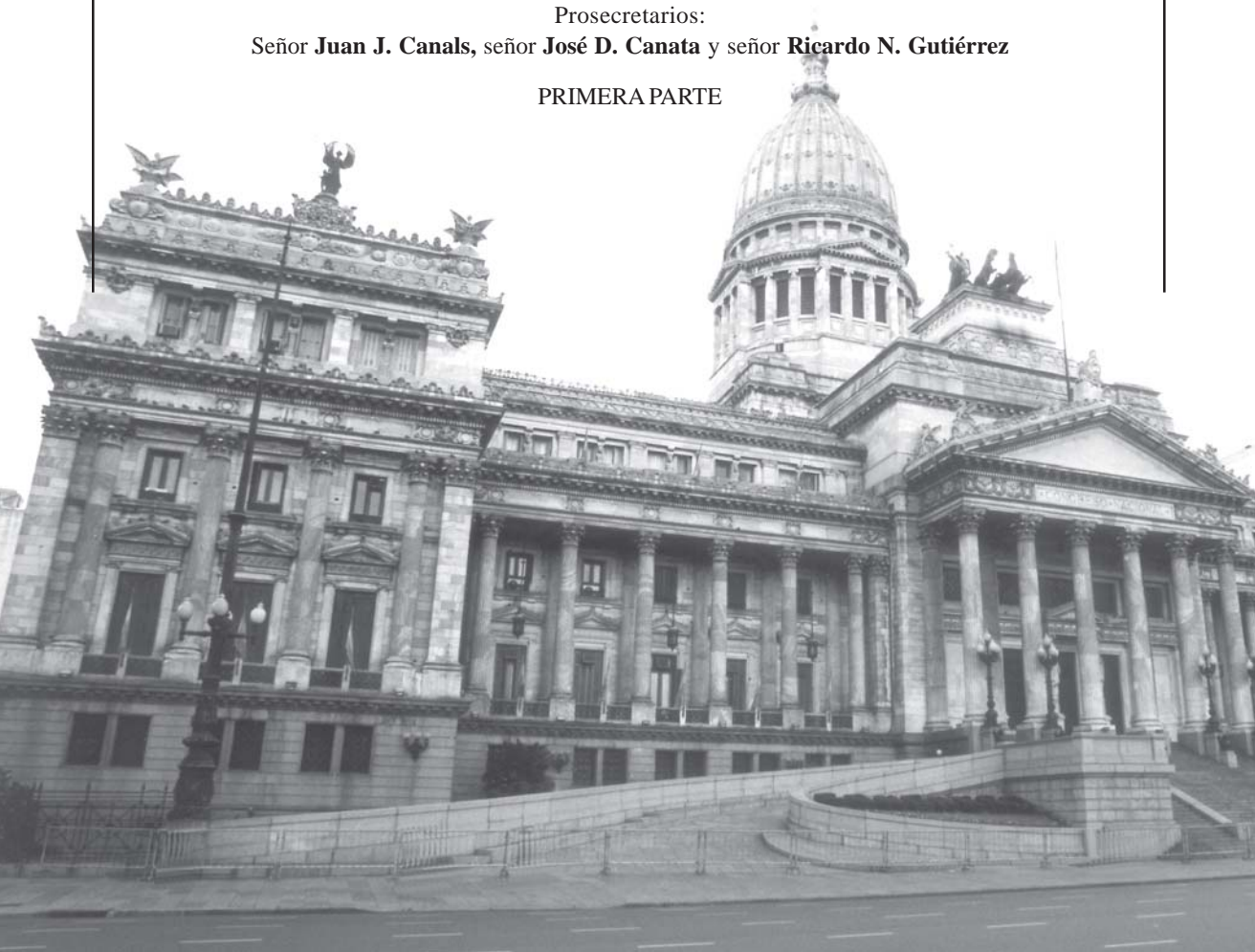
Secretarios:

Señor **Juan H. Estrada** y señor **Carlos A. Machiaroli**

Prosecretarios:

Señor **Juan J. Canals**, señor **José D. Canata** y señor **Ricardo N. Gutiérrez**

PRIMERA PARTE



PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
 ARANCIO, Lylia M.
 AVELÍN, Nancy B.
 BUSSI, Ricardo A.
 CAFIERO, Antonio F.
 CAPARRÓS, Mabel L.
 CAPITANICH, Jorge M.
 CAPOS, Liliana
 CASTILLO, Oscar A.
 COLOMBO de ACEVEDO, María T.
 CONTI, Diana
 CURLETTI, Mirian B.
 ESCUDERO, Sonia M.
 FALCÓ, Luis
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina E.
 GALLEGU, Silvia E.
 GALLIA, Sergio A.
 GIRI, Haide Delia
 GIUSTI, Silvia E.
 GIUSTINIANI, Rubén H.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 GUINLE, Marcelo A. H.
 IBARRA, Vilma L.
 ISIDORI, Amanda M.
 JAQUE, Celso A.
 JENEFES, Guillermo R.
 LATORRE, Roxana I.
 LEGUIZAMÓN, María L.
 LESCANO, Marcela F.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 LOSADA, Mario A.
 MARINO, Juan C.
 MARTINAZZO, Luis E.
 MASSONI, Norberto
 MASTANDREA, Alicia E.
 MAYANS, Miguel Á.
 MAZA, Ada M.
 MENEM, Eduardo

MERA, Mario R.
 MIRANDA, Julio A.
 MORALES, Gerardo R.
 MÜLLER, Mabel H.
 NEGRE de ALONSO, Liliana T.
 PAZ, Elva A.
 PERCEVAL, María C.
 PICHETTO, Miguel Á.
 PINCHETTI, Delia N.
 PRADES, Carlos A.
 PUERTA, Federico R.
 REUTEMANN, Carlos A.
 RÍOS, Roberto F.
 ROSSI, Carlos A.
 SAADI, Ramón E.
 SALVATORI, Pedro
 SÁNCHEZ, María D.
 SANZ, Ernesto R.
 SAPAG, Luz M.
 TAFFAREL, Ricardo C.
 URQUÍA, Roberto D.
 ZAVALÍA, José L.

EN COMISION:

BAR, Graciela Y.
 CASTRO, María E.
 DANIELE, Mario D.

AUSENTES, CON AVISO:

MARÍN, Rubén H.
 MARTÍN, Floriana N.
 MARTÍNEZ PASS de CRESTO, Laura
 OVIEDO, Mercedes M.
 TERRAGNO, Rodolfo H.
 YOMA, Jorge R.

SUSPENDIDO:

OCHOA, Raúl E.

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 6.)
2. Lectura y aprobación del plan de labor. (Pág. 7.)
3. Asuntos entrados. (Pág. 16.)
4. Digesto Jurídico. (Pág. 16.)
5. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se repudia el crimen terrorista perpetrado en la ciudad de Beirut, República del Líbano, el pasado 14 de febrero de 2005 (S.-32/05). Se aprueba. (Pág. 16.)
6. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que

se expresa beneplácito por el acuerdo entre los gobiernos de Israel y Palestina comprometiéndose a materializar un cese del fuego bilateral (S.-29/05). Se aprueba. (Pág. 17.)

7. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se expresa beneplácito y satisfacción ante la modificación de la Ley de Extranjería en España (S.-17/05). Se aprueba. (Pág. 18.)
8. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y Gómez Diez por el que se solicita la aplicación del artículo 18, capítulo IV, de la Carta Democrática Interamericana a fin de contribuir al normal desenvolvimiento democrático en

- la República de Bolivia (S.-193/05). Se aprueba (Pág. 20.)
9. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag por el que se solicitan informes sobre el intento de subastar piezas paleontológicas argentinas en la ciudad de Nueva York (S.-219/05). Se aprueba. (Pág. 21.)
10. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica (S.-220/05). Se aprueba. (Pág. 22.)
11. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en los proyectos de declaración de las señoras senadoras Sapag (I) y Bar (II) por los que se adhiere a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (S.-221 y 288/05). Se aprueba. (Pág. 23.)
12. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea por el que se solicita limitar la información que brinda el Sistema María en los datos de las exportaciones de las partidas 34, 39, 84, 90 y 95 (del nomenclador común que rige el comercio del Mercosur) (S.-226/05). Se aprueba. (Pág. 26.)
13. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Capitanich por el que se solicita la creación de un consulado argentino en Iquique, República de Chile (S.-237/05). Se aprueba. (Pág. 27.)
14. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de resolución de la señora senadora Arancio de Beller por el que se adhiere a la conmemoración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo de cada año (S.-238/05). Se aprueba. (Pág. 27.)
15. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que se solicita se incorpore a la agenda bilateral con la República de Chile la problemática de la existencia de minas antipersonales (S.-275/05). Se aprueba. (Pág. 29.)
16. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declara de interés parlamentario el VIII Congreso Internacional de la Asociación Interna-
- cional de Movimientos Familiares de Formación Rural (S.-289/05). Se aprueba. (Pág. 30.)
17. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Curletti y otras señoras senadoras por el que se rinde homenaje a la señora ex senadora Malharro de Torres (S.-2.329/04). Se aprueba. (Pág. 33.)
18. Consideración del dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador Gallia por el que se manifiesta beneplácito por la apertura de una sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura en la localidad de San Patricio del Chañar, provincia del Neuquén (S.-527/05). Se aprueba. (Pág. 35.)
19. Consideración del dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Bussi por el que se declara beneplácito por la inauguración del Instituto Nacional de Semilla (INASE) en Tucumán (S.-469/05). Se aprueba. (Pág. 37.)
20. Consideración del dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti y otros señores senadores por el que se expresa beneplácito por la realización del proyecto de integración regional para el intercambio de información, productos y servicios y capacitación informal por parte de entidades sin fines de lucro (S.-724/05). Se aprueba. (Pág. 39.)
21. Consideración del dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por la realización del Programa de Fortalecimiento del Sector Ladrillero (S.-722/05). Se aprueba. (Pág. 40.)
22. Consideración del dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se adhiere a la 35ª Fiesta Nacional de la Masa Vienes, llevada a cabo en Villa General Belgrano, Córdoba (S.-234/05). Se aprueba. (Pág. 41.)
23. Consideración del dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de ley de la señora senadora Curletti por el que se adhiere al Año Internacional del Microcrédito (S.-4.455/04). Se aprueba. (Pág. 42.)

24. Consideración del dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se solicita se asigne la partida necesaria para la ejecución de las obras de ampliación de la ruta nacional 8 en el tramo comprendido entre la localidad de Fátima y el empalme de la ruta provincial 6 (S.-455/05). Se aprueba. (Pág. 44.)
25. Consideración del dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el que se solicita la implementación de campañas para fomentar el cumplimiento del artículo 47 de la ley 24.449, de tránsito, sobre obligación de encender las luces bajas para transitar en rutas nacionales (S.-442/05). Se aprueba. (Pág. 45.)
26. Consideración del dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita la apertura de una oficina destinada a funcionar como sede representativa de la Federación Internacional de Caminos (S.-342/05). Se aprueba. (Pág. 46.)
27. Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se expresa beneplácito por el lugar de nuestro país en el informe sobre el Índice de Sustentabilidad Ambiental 2005 presentado en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza (S.-63/05). Se aprueba. (Pág. 48.)
28. Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti y otros señores senadores por el que se adhiere al Decenio Internacional para la Acción: "El agua fuente de vida 2005" (S.-723/05). Se aprueba. (Pág. 50.)
29. Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que se declara de interés legislativo el Congreso y Exposición Mundial sobre Gestión Sustentable de Residuos Sólidos (S.-756/05). Se aprueba. (Pág. 51.)
30. Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se adhiere a la conmemoración del Día de la Tierra (S.-773/05). Se aprueba. (Pág. 52.)
31. Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica (S.-776/05). Se aprueba. (Pág. 53.)
32. Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Martinazzo por el que se solicitan informes sobre la postergación de la reglamentación de la ley 25.612, régimen de gestión integral de residuos industriales y actividades de servicios (S.-810/05). Se aprueba. (Pág. 54.)
33. Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se declara de interés parlamentario el Seminario de Intercambio Informativo de Agenda 21, en Italia y la Argentina (S.-436/05). Se aprueba. (Pág. 55.)
34. Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti y otros señores senadores por el que se solicita se instruya a los organismos correspondientes a fin de subsanar los perjuicios provocados por la contaminación ambiental producida por la empresa RAIMAT S.A., en Bernal, provincia de Buenos Aires (S.-726/05). Se aprueba. (Pág. 56.)
35. Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se solicitan informes sobre diversas cuestiones vinculadas a la zona del Gran Chaco Americano (S.-835/05). Se aprueba. (Pág. 57.)
36. Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori por el que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, a celebrarse el 13 de octubre (S.-878/05). Se aprueba. (Pág. 58.)
37. Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el que se solicitan informes acerca de los estudios efectuados en relación a la instalación de plantas de fabricación de celulosa sobre el río Uruguay (S.-864/05). Se aprueba. (Página 60.)
38. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora

- Giusti por el que se expresa beneplácito y adhesión al 78º aniversario de la creación de la localidad de Colan Conhué, Chubut (S.-156/05). Se aprueba. (Pág. 61.)
39. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Avelín y otros señores senadores por el que se solicita la exención del pago del IVA a todos los productos de la canasta básica de alimentos (S.-842/05). Se aprueba. (Pág. 62.)
40. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores senadores Falcó y Pichetto por el que se otorga un subsidio al Museo de Geología y Paleontología "Doctor Rosendo Pascual" (S.-843/05). Se aprueba. (Pág. 64.)
41. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita un subsidio para el Club Empleados Municipales de Senillosa, Neuquén (S.-875/05). Se aprueba. (Pág. 66.)
42. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita un subsidio para la Cámara de Productores y Afines de Senillosa, provincia del Neuquén (S.-876/05). Se aprueba. (Pág. 67.)
43. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Morales y otros señores senadores por el que se solicita se transfieran a la provincia de Jujuy los fondos necesarios para concretar la obra de acceso sur a la ciudad de San Salvador de Jujuy (S.-900/05). Se aprueba. (Pág. 68.)
44. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora senadora Arancio de Beller y del señor senador Morales por el que se otorga un subsidio al Obispado de Jujuy (S.-1.085/05). Se aprueba. (Pág. 69.)
45. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Martinazzo por el que se solicita incorporar en el presupuesto una partida para el estudio de la obra de pavimentación de la ruta nacional 412, tramo Rodeo Pachaco, provincia de San Juan (S.-1.135/05). Se aprueba. (Pág. 71.)
46. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Maza por el que se dispone la reimpresión del libro *La Rioja, encrucijada de aridez y esperanza* (S.-194/05). Se aprueba. (Pág. 72.)
47. Consideración del dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se manifiesta beneplácito por la membresía honoraria de la Sociedad Europea de Radiología otorgada al doctor Alberto García Mónaco (S.-574/05). Se aprueba. (Pág. 74.)
48. Consideración del dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en distintos proyectos de comunicación de varios señores senadores por los que se solicita se adopten las medidas de protección a los usuarios de los servicios de telefonía móvil (S.-130, 243 y 114/05). Se aprueba. (Pág. 75.)
49. Consideración del dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor senador Urquía y otros señores senadores por el que se declara de interés legislativo la realización de la exposición pyme EPSAM 2005 a llevarse a cabo del 1º al 4 de septiembre en la provincia de Buenos Aires (S.-1.104/05). Se aprueba. (Pág. 77.)
50. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Oviedo por el que se solicita se dispongan medidas para la concreción de la comisión binacional para la repatriación de los restos mortales del gobernador misionero Andrés Guacurarí (S.-4.534/04). Se aprueba. (Pág. 78.)
51. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes sobre la inclusión de la Argentina en la empresa de televisión sudamericana Telesur (S.-4.556/04). Se aprueba. (Pág. 79.)
52. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y Gallia por el que se solicita la habilitación de los pasos fronterizos Buta Mallín y Lumabía en la provincia del Neuquén (S.-343/05). Se aprueba. (Pág. 80.)
53. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se ejecuten las recomendaciones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (S.-351/05). Se aprueba. (Pág. 81.)

54. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Losada por el que se declara de interés legislativo el proyecto Flor del Desierto, que impulsa la repatriación de los restos del comandante Andrés Guacurarí Artigas (S.-359/05). Se aprueba. (Pág. 83.)
55. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag y del señor senador Salvatori por el que se expresa beneplácito por el retiro gradual de tropas sirias del territorio libanés en el marco de la resolución 1.559/04 del Consejo o de Seguridad de Naciones Unidas (S.-433/05). Se aprueba. (Página 84.)
56. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de resolución de la señora senadora Escudero por el que se mantiene un seguimiento de las acciones sobre el cumplimiento de lo acordado en la reunión denominada Cumbre del Milenio (S.-452/05). Se aprueba. (Pág. 85.)
57. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se manifiesta complacencia por el aporte del Parlamento Latinoamericano a la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones respecto de la integración y configuración de comunidades subregionales (S.-453/05). Se aprueba. (Pág. 87.)
58. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de resolución de las señoras senadoras Escudero y Perceval por el que se adhiere a lo resuelto por la XX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, que denomina al año 2005 como Año Internacional de la Mujer Latinoamericana y Caribeña (S.-467/05). Se aprueba. (Pág. 88.)
59. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Mastandrea y Curretti (I) y del señor senador Capitanich (II) por el que se solicita se realicen las gestiones pertinentes a efectos de prevenir la venta de *stockpile* de tanino por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América (S.-477 y 619/05). Se aprueba. (Pág. 90.)
60. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes acerca de las razones por las que la Argentina se abstuvo de votar la Declaración Universal sobre la Clonación Humana (S.-502/05). Se aprueba. (Pág. 92.)
61. Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de Gabinete de Ministros sobre estados financieros del Proyecto de Reforma de la Educación Superior (O.V.D.-236/04; O.V.-474/02 y O.V.-203/04). Se aprueba. (Pág. 93.)
62. Alteración del plan de labor. (Pág. 97.)
63. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión, por el que se crea el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (C.D.-65/04). Se aprueba. (Pág. 97.)
64. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica la ley 11.683 (t.o. 1998 y s/m.), de procedimiento tributario (S.-9/05). (Pág. 136.)
65. Asuntos entrados. (Pág. 166.)
66. Apéndice.
- I. Votaciones. (Pág. 341.)
- II. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 369.)
- III. Inserciones. (Pág. 384.)
-
- En Buenos Aires, a las 16 y 44 del miércoles 1° de junio de 2005:
- Sr. Presidente.** – La sesión está abierta.
- 1**
- IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL**
- Sr. Presidente.** – Invito a la señora senadora por la ciudad de Buenos Aires María Laura Leguizamón a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.
- Puestos de pie los presentes, la señora senadora Leguizamón procede a izar la bandera en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas de los señores senadores el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.

–El texto es el siguiente:

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 1° DE JUNIO
DE 2005

Consideración en conjunto de los órdenes del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría enunciarán.

–Consideración del orden del día con proyectos de ley: 387.

–Consideración sobre tablas de los dictámenes sobre renegociación contractual con relación a las empresas terminales portuarias y otras cuestiones conexas (S.-1.473/05, S.-1.474/05 y S.-1.475/05).

–Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 117, 161 y 256.

Tratamientos sobre tablas a solicitar:

–Proyecto de declaración de la senadora Gallego, declarando de interés parlamentario la Jornada Nacional de Chagas, a realizarse en junio de 2005, en la Ciudad de Buenos Aires (S.-1.328/05).

–Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo a la celebración del 113° aniversario de la localidad de Las Palmas, provincia del Chaco (S.-1.337/05).

–Proyecto de declaración de la senadora Curletti, manifestando beneplácito por la publicación del séptimo informe anual sobre antisemitismo en la Argentina, realizado por el centro de estudios sociales de la DAIA (S.-1.408/05).

–Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo al 95° aniversario de la ciudad de Villa Angela celebrado el 24 de mayo de 2005 (S.-1.462/05).

–Proyecto de declaración de la senadora Curletti, expresando beneplácito por la conmemoración del 69° aniversario de la Fundación de la localidad de Colonia Elisa, provincia del Chaco (S.-1.488/05).

–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día del Bombero Voluntario a celebrarse el 2 de junio del corriente año (S.-1.273/05).

–Texto unificado en los proyectos de declaración de los senadores Rossi, Jenefes y Curletti e Isidori, adhiriendo a la conmemoración del Día del Periodista (S.-1.313/05, S.-1.512/05 y 1.520/05).

Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – En consideración el plan de labor.

Sra. Conti. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Conti.

Sra. Conti. – Solicito una modificación al plan de labor.

Dejé reservado en mesa el proyecto S.-1.551/05; no tiene dictamen de comisión dado que se trata de un hecho reciente sobre la brutal represión policial inferida en la provincia del Neuquén hacia los trabajadores docentes que hacían reclamos salariales. Así que pido que se agregue al plan de labor y oportunamente se trate sobre tablas.

Sr. Presidente. – Queda reservado.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que se retire del plan de labor el tratamiento del dictamen de la Comisión Bicameral sobre el tema de las terminales portuarias. Y doy las razones por las cuales el bloque quiere que se deje sin efecto el tratamiento de este proyecto en la sesión de hoy.

Desde el punto de vista de la decisión política del bloque, nosotros necesitamos cumplimentar un trámite ante el procurador del Tesoro, pues hay necesidad de resolver dos o tres interrogantes que tenemos con relación a la cuestión. No vamos a rehuir su tratamiento; el bloque lo va a tratar el miércoles; además, estamos dentro del plazo.

Por otra parte, la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de tratarlo en forma paralela. O sea que aquí no existe el requerimiento de que tenga que ser tratado primero en el Senado para pasar después a Diputados. La Cámara de Diputados puede actuar por sí misma, tratándose del dictamen de una comisión bicameral. Así que el miércoles –y dentro del plazo– estamos dispuestos a tratar este tema, a debatirlo, a dar las razones y los argumentos por los cuales consideramos que debemos votar el dictamen en mayoría, pero vamos a necesitar de nuestra parte tener las respuestas necesarias del procurador del Tesoro.

Con estos fundamentos, pido el retiro de este tema del plan de labor.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza, senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señor presidente: es absolutamente legítimo, desde el punto de vista político y también reglamentario, lo que acaba de plantear el presidente de la bancada oficialista. No vamos a hacer objeciones a esto.

Lo que quiero expresar simplemente es que, indefectiblemente, tenemos que tratar este tema el próximo miércoles, no porque sea una decisión de alguien tratarlo, sino porque la ley establece claramente que, si no lo tratamos el miércoles, el viernes 10 de junio se cumplirán los sesenta días, con lo cual los acuerdos que son sometidos a consideración del Congreso quedan fictamente aprobados.

Hasta aquí, tanto la Comisión Bicameral como los plenarios de ambas Cámaras, han cumplido a rajatabla con las prescripciones de la ley, lo que enaltece la labor del Congreso. Esperamos, en nuestra bancada, que esta conducta siga llevándose adelante y que el miércoles tratemos este tema.

Pero hay otra reflexión que quiero hacer. Se dice, en el argumento del senador preopinante que lo que se necesita es un dictamen o una opinión del procurador general del Tesoro.

Menciono que el dictamen del procurador general del Tesoro –y esto ha sido motivo de discusiones fuertes en el seno de la comisión, y de algunas opiniones– debería haber pertenecido a la etapa procesal del Poder Ejecutivo, antes de enviar los contratos para su análisis en el Congreso. O, en el caso de que se interprete así, luego de ingresado el contrato al Congreso, se le puede pedir su opinión al procurador. Esto ocurrió también en el caso de terminales portuarias, a requerimiento expreso del señor senador López Arias; antes del 19 de mayo, día que la comisión había fijado para elaborar el dictamen, se le pidió expresamente al procurador general del Tesoro, por vía de la Presidencia de la comisión, que emitiera su dictamen. Ese dictamen llegó el mismo día en que teníamos que elaborar nuestra opinión. O sea que ya hay una opinión del procurador general del Tesoro. Que se considere insuficiente, si se cree que ese dictamen no tiene consistencia jurídica –como denunciábamos oportunamente en la comisión–, es otra cosa.

Quiero dejar constancia, en primer lugar, de que el Poder Ejecutivo omitió la presentación del dictamen de acuerdo con lo que la propia ley exige, esto es antes de enviar el contrato al Congreso; y, en segundo lugar, que ya estando dicho contrato en el Congreso, por requerimiento de un senador del bloque oficialista, se le pidió dictamen al procurador, pero ese dictamen, obviamente, no satisfizo a nadie.

También quiero denunciar, acá, que es un dictamen de una endeblez jurídica espantosa, que seriamente pone en tela de juicio la labor de la Procuración del Tesoro, en estos momentos, en materia tan importante como la renegociación de los contratos.

Se trata de un contrato cuya piedra fundamental de discusión ha provocado diferencias notorias en el bloque Justicialista. Y, desde luego, no hay que ser muy perspicaz para entender que son esas diferencias las que provocan, hoy, el retiro de este expediente y no un dictamen del procurador. No se tienen los votos para tratar este expediente hoy. El oficialismo no está en condiciones de aprobar este dictamen. Esta es la única y verdadera razón.

Por lo tanto, como se utiliza el argumento del procurador general del Tesoro, debo decir que no se pidió en el momento oportuno y, cuando se lo hizo, ese dictamen carecía de la elemental solidez jurídica como para tomar una decisión al respecto. Por eso es que espero que el próximo miércoles –pensemos lo que pensemos y hayamos firmado los dictámenes como hiciéramos– estemos tratando esta cuestión y no dejemos pasar los sesenta días fictos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. López Arias. – Señor presidente: no quiero reproducir en este recinto una vieja discusión mantenida en el seno de la Comisión Bicameral sobre el momento en que debe requerirse el dictamen del procurador. La interpretación de nuestro bloque –que yo sostengo– es que la norma es en ese sentido bastante laxa y que lo importante es contar con el dictamen del procurador al momento de dictarse la resolución definitiva.

Ahora bien, este es un caso muy especial por lo cual la opinión jurídica de quien maneja la estrategia del país en materia de juicios contra la Nación resulta fundamental. De allí que veni-

mos sosteniendo desde el primer momento que, antes de emitir despacho de comisión resulta imprescindible contar con la opinión del procurador como jefe –reitero– de la estrategia jurídica del país, sobre todo, frente a algunos reclamos externos.

En su momento llegó un dictamen del procurador que, debo señalar, no trata el punto que constituye la preocupación de todos; no se dictamina sobre ese tema que es central en la discusión de todas las comisiones.

Convendrá el senador Sanz que en ese mismo momento lo he planteado así. Fue el criterio de la comisión que su presidenta de la comisión reitere el pedido al procurador para que concrete su dictamen y poder llegar a esta sesión con los elementos esenciales para el tratamiento del tema.

El dictamen no llegó y de allí que esto no es una excusa ni un argumento; entiendo que existe el compromiso de nuestra parte para tratar el próximo miércoles la cuestión, pero habíamos convenido con los bloques opositores que ese era un elemento esencial para poder dictaminar con la tranquilidad de conciencia con que queremos hacerlo.

Reitero entonces que esta insistencia no constituye una denuncia formal ni pretende demorar el tratamiento del tema sino que de lo que se trata es de cumplir con los requisitos esenciales en un caso muy particular en donde el dictamen del procurador es esencial para poder tener un criterio fundado.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Falcó. – Señor presidente: solicito la inclusión en el plan de labor de un proyecto de resolución por el que se rinde homenaje al equipo de la Fundación Favalaro al cumplirse treinta años de su creación, contenido en el expediente S.-1.447/05.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se toma nota.

Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Morales. – Señor presidente: solicito una ampliación de giro con relación al expediente 1.499, que contiene la reproducción del dictamen que produjéramos oportunamente varias comisiones con respecto al proyecto sobre tarifa social. Dado que el trámite ha caducado en

la Cámara de Diputados, hemos reproducido aquel despacho con la firma de la mayoría de los miembros de las comisiones. En ese sentido, el giro fijado por la Secretaría Parlamentaria ha sido a las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda. Solicito entonces la ampliación del giro a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales como cabecera de este trámite, tal como ocurriera en la anterior ocasión. Esto en virtud de las facultades de la comisión fijadas por el artículo 66 del Reglamento.

Sr. Presidente. – Así se hará, señor senador. Tiene la palabra la señora senadora por Salta.

Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito la inclusión en el plan de labor de dos proyectos que están reservados en Secretaría. Se trata de un proyecto de declaración referido a un tema que tiene planteado la provincia de Salta con la Aduana, y de un pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional a raíz de unos gaviones que construyó Bolivia sobre el río Bermejo y que afectan a propiedades en la provincia de Salta.

Sr. Presidente. – Ambos proyectos obran en Secretaría, señora senadora.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Ríos. – Solicito un cambio en el giro del expediente S.-14/05. Fue girado a las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda. Si existe voluntad por parte del cuerpo, y dado que se trata de una operación de transferencia de viviendas en Ituzaingó sin que exista compromiso presupuestario, solicito que este proyecto sea girado solamente a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Sr. Presidente. – ¿Hay afectación de partidas?

Sr. Ríos. – No hay afectación de partidas presupuestarias ni compromiso presupuestario.

Sr. Presidente. – ¿Qué opina el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda?

Sr. Capitanich. – Si no hay ningún tipo de utilización de partidas presupuestarias, el asunto no es motivo de análisis ni de competencia de la comisión que presido.

Sr. Presidente. – Entonces, queda acordado el giro del expediente solamente a la Comisión de Asuntos Municipales.

Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quisiera plantear dos cuestiones.

En primer lugar, solicito la incorporación en esta sesión del expediente S.-1.402/05, por el que se rinde homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo con motivo de que el 26 de mayo próximo pasado se cumpliera el segundo aniversario de su fallecimiento.

Pido que este homenaje se incorpore directamente por Secretaría.

Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, no hay ningún problema.

Sr. Giustiniani. – En segundo lugar, quisiera leer la parte resolutive del expediente S.-1.469/05: citar al señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, doctor Rafael Bielsa, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, para que brinde explicaciones e informes sobre la indebida incorporación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, como parte de aplicación territorial de ultramar en el tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

Es de público conocimiento que el canciller Rafael Bielsa debería haber concurrido a una reunión programada con suficiente antelación el martes 24 de mayo pasado a las 16 horas. Muchos senadores del interior vinimos especialmente a la Ciudad de Buenos Aires para concurrir a esa reunión. Pero dicha reunión no se realizó y hubo una aparente historia de enredos al respecto. Creo que ha quedado absolutamente claro la no concurrencia del canciller el martes 31 pasado a la Comisión de Industria y Comercio para evaluar la cuestión de los acuerdos con la República Popular de China. Se trata de dos faltas serias, consecutivas, del canciller a las comisiones del Senado.

Considero que existen varias cuestiones para analizar con el canciller. Fue largamente debatida en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del día de hoy esta ausencia del canciller. Existían criterios mayoritarios en la comisión de considerar agotado el tiempo de la comisión y de la necesidad de la comparecencia del canciller en este recinto, por lo que planteo que en el día de hoy se incorpore y se trate sobre tablas el expediente S.-1.469/05.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: nuestro bloque no va a votar la habilitación del tratamiento sobre tablas del expediente en cuestión. De ninguna manera vamos a avalar un pedido de interpelación al canciller. Entendemos que además no hay ninguna razón de envergadura para una medida institucional de esa naturaleza.

Por otra parte, desde el punto de vista de la conducción del gobierno nacional y del destino del país, un tema tan delicado y sensible como el de Malvinas no ha tenido un tratamiento en este ámbito con la seriedad y la responsabilidad con que el tema debería haber sido abordado, con lo cual no están dadas las garantías en función de pasos importantes, de estrategia internacional de la Argentina, que de ninguna manera pueden ser ventilados alegremente para que se entere el mundo; o cuestiones que además significan posicionamientos en el marco de la política interna del país que realmente denotan también una visión limitada desde el punto de vista institucional. Hacer de las cuestiones estratégicas y de la política internacional un debate menor, pequeño e interno no es lo mejor; esto obliga al oficialismo a analizar esta cuestión con la responsabilidad que merece un tema de esta naturaleza, a fin de velar por los intereses del país.

Por ello, consideramos que por ahora no están dadas las condiciones, en función de acontecimientos que se están desarrollando, para que el canciller asista a la Comisión de Relaciones Exteriores ni tampoco, por supuesto, para una interpelación en este recinto, como ha planteado el señor senador Giustiniani.

Así que por estas razones, no vamos a prestar nuestro voto para habilitar el tratamiento sobre tablas de este tema.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. – En primer lugar, quiero decir que me parece que nos estamos adelantando al debate, porque lo que se está pidiendo aquí es incorporar este tema dentro de los pedidos de tratamiento sobre tablas. Varios señores senadores han planteado distintas solicitudes y ahora se pide que se incluya esta cuestión dentro de los pedidos de tratamiento sobre tablas, que fue lo planteado por el señor senador por Santa Fe.

No obstante, como ya se abordó el tema, para que no quede ninguna duda quiero decir que

nuestro bloque va a respaldar la iniciativa de convocatoria al señor canciller. Justamente, por una cuestión fundamentalmente de seriedad queremos que el canciller venga aquí; no me parece bueno para ninguno de nosotros que se subestime su presencia aquí y que se diga que este ámbito no es serio ni responsable para recibir su visita. Si los que estamos en este recinto creemos que no somos serios ni responsables, me pregunto qué rol tenemos quienes estamos aquí sentados. Yo sigo convencido de que el sistema republicano y de división de poderes y la tarea de los representantes de las provincias son serios y responsables. Tener un concepto de subestimación por nuestra tarea es algo muy grave; eso lo pueden decir otros, pero no quienes estamos sentados aquí, que deberíamos ser los últimos en hacer ese tipo de valoraciones.

Así que nosotros creemos y queremos que el señor canciller se reivindique, de alguna manera, de sus gravísimas omisiones por no haber estado presente en dos oportunidades en el Senado de la Nación, denotando una gran desconsideración por la totalidad de los miembros de este cuerpo que concurrieron a ambas reuniones y que no contaron con la posibilidad de escuchar sus informes.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. – Señor presidente: es para apoyar la solicitud de que se incluya sobre tablas el pedido de que el señor canciller asista a esta Cámara.

Es un hecho realmente grave que el canciller no haya concurrido aquí, a pesar de haber estado previamente convenido. Recordemos que, precisamente, se había convenido que él asistiría a la comisión a raíz de este pedido de interpelación que había formulado el señor senador Giustiniani; además, si no recuerdo mal, también la señora senadora Avelín había presentado un pedido de interpelación.

Temo que se le está dando a la interpelación un carácter que en realidad no tiene. Interpelar no es atacar al ministro ni significa ningún desmerecimiento o descrédito. La interpelación está prevista en la Constitución Nacional: el artículo 71 establece que cada Cámara puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para pedir explicaciones. Entonces, no ha-

cerlo es resignar una facultad que tenemos, y aquí hay cosas para preguntarle al canciller. Además del tema Malvinas, que ya se estuvo analizando acá, hay otras cuestiones muy importantes en materia de política exterior que el señor ministro debería responder ante los señores senadores. Por ejemplo, ¿qué pasó con los convenios con China, tema que ayer debió haber explicado en la reunión de la Comisión de Industria y Comercio, a la que tampoco asistió? Precisamente, en el diario “La Nación” de hoy se publicó un artículo suscrito por Mariano Obarrio respecto de este tema del convenio con China, en donde se formulan graves cargos por la irresponsabilidad con que se manejó este asunto, cuando se efectuó aquel “mega anuncio”. Hoy se pueden observar los problemas surgidos como consecuencia de esos anuncios, con los cuales ocurrió como con el parto de los montes.

También me gustaría preguntar al ministro de Relaciones Exteriores por qué se sigue una política de desprecio hacia los otros países, dado que cuando los embajadores de éstos vienen a presentar sus cartas credenciales aquí, el presidente no los recibe, rompiendo una tradición no sólo de nuestro país, sino de todos los países del mundo, cuyos jefes de Estado en cambio reciben a nuestros embajadores. Esto me parece una falta total de reciprocidad. Y lo que se siembra en este tema, se cosecha después en materia de relaciones que no serán buenas para nuestro país. Es decir, los resultados de estas actitudes los vamos a ver en el futuro, en muchos aspectos de la vida del país.

Asimismo, me gustaría preguntar al ministro Bielsa qué ocurrió con la frustrada visita del presidente de Sudáfrica al país, quien iba a venir con 40 empresarios y, de pronto, vio cancelada su visita. Supongo que debe haber razones para la cancelación de una visita programada, porque es raro que visite Brasil y Chile y que su paso por la Argentina haya sido cancelado.

Creo que el señor canciller debe tener sus razones al respecto, al igual que con el tema de las cartas credenciales.

Cuando le pregunté al canciller sobre la cuestión de las cartas credenciales, me dijo que ello tenía que ver con “el estilo del hombre”; o sea, el estilo es el hombre y el presidente no los recibe. Me parece que tendría que haber una explicación un poco más seria.

Además, ésta no es la primera vez que ocurren estos hechos en materia de política internacional.

Por ejemplo, ¿por qué se invita al presidente de Vietnam y luego nuestro presidente lo deja plantado en la cena, a la cual no concurre? ¿Por qué dejó plantado en el aeropuerto de Moscú al presidente Putin, quien lo estaba esperando? Creo que con respecto a todos estos hechos, debe haber una explicación racional.

Ahora bien, no me convence el argumento de que aquí no se pueden discutir cuestiones estratégicas con relación al tema de las islas Malvinas, puesto que el propio canciller ha concurrido a un debate televisivo a discutir sobre esa cuestión. Reconozco que no le fue bien en ese debate, pues no pudo responder muchas preguntas, pero si él se presta a concurrir a la televisión a discutir con otros dirigentes políticos sobre ese asunto, ¿por qué los senadores somos menos para poder preguntarle o, por lo menos, para debatir con él al respecto? ¿El canciller le asigna más importancia a un debate televisivo que a un debate en la Cámara de Senadores? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, si además se trata de una facultad constitucional que nosotros no podemos resignar?

Por otra parte, si existiera alguna cuestión reservada o muy estratégica que no debiera trascender, el canciller podría venir a una reunión reservada o secreta, tal como hizo una vez el canciller Caputo, precisamente por el tema de las islas Malvinas, cuando tenía que informar sobre los convenios pesqueros de aquel entonces.

O sea, me parece que el ministro no puede seguir eludiendo la circunstancia de dar la cara en el Senado para responder a todas estas inquietudes que tenemos en materia de política internacional.

Si el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores brindara a los señores senadores una explicación acerca de cómo fueron los acontecimientos en función de los cuales el ministro no concurrió a este cuerpo, creo que va a quedar claro que se debió prácticamente a una decisión de él de no venir.

Entonces, frente a esta situación, no existe otra vía más razonable, lógica e institucional que la concurrencia del señor canciller a este recinto para brindar un informe, tal como ocurre con el jefe de Gabinete de Ministros, quien viene y

habla de todos los temas. ¿Por qué no puede hacer lo mismo el ministro de Relaciones Exteriores? ¿No se siente capaz de responder a las preguntas que le formulemos? ¿Teme que vaya a pasar un mal rato? No va a suceder eso, porque en este cuerpo, los debates se hacen en forma razonable. Somos representantes de las provincias y tenemos mandatos de nuestros pueblos; somos senadores de la Nación y no se nos puede tratar de esta forma.

El canciller se presta a un debate en televisión y no concurre al Senado de la Nación. Obviamente, nuestro canal no tiene el *rating* del otro programa. Igualmente, creo que no se trata de un problema de *rating* sino de responsabilidad institucional.

Por lo tanto, por los motivos que acabo de formular, apoyo la solicitud del señor senador Giustiniani.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. – Señor presidente: desde el Bloque Cruzada Renovadora de San Juan, acompañaremos el pedido de interpelación al ministro Bielsa formulado por el senador Giustiniani.

Además, aclaro que soy autora –como ya se ha mencionado– de un pedido de interpelación que fue presentado el 4 de mayo.

Se había acordado que el ministro iba a concurrir a la Comisión de Relaciones Exteriores a darnos todas las explicaciones. Y de buena fe todos aceptamos esperar hasta el día de reunión de la comisión para recibir los informes pertinentes de parte del Poder Ejecutivo nacional.

Ha pasado casi un mes y hasta el momento, no llegó ni una sola información oficial. Y menos aún llegó el ministro.

No sólo considero que se trata de una falta de respeto absoluta a este Congreso de la Nación, sino también a los argentinos y a los veteranos de Malvinas, quienes siguen de cerca este tema. A pesar de los diversos homenajes que se hacen en el Congreso y en el gobierno, resulta ser que los que son el testimonio vivo de la lucha por la recuperación de nuestras islas Malvinas –más allá de quién haya tomado la decisión, que no es el punto en discusión– y pusieron su sangre, su vida y su salud hoy están azorados al ver que nuestras islas Malvinas están incluidas en la Constitución de

la Unión Europea. Y de parte del gobierno —que tanto ha proclamado la “malvinización” en todos sus discursos en este Congreso— no tenemos un solo informe oficial.

Reiteraré lo que dije el 4 mayo en este recinto: no tenemos que hablar los legisladores acerca de este tema. El único que tendría que estar hablando sobre las Malvinas —y ya en este recinto— como representante del Poder Ejecutivo nacional es el canciller Bielsa. Es el único que tendría que estar dando las explicaciones pertinentes.

Además, se comienza a advertir que todo es secreto. Descubrimos que hay leyes secretas que ni los legisladores conocemos: se destapa el escándalo de los sobresueldos y aparecen leyes secretas que ni siquiera nosotros sabemos de su existencia. Incluso, nos enteramos por el ministro Bielsa que hay cláusulas secretas en los convenios firmados por este gobierno con China. Ayer el señor ministro Bielsa tenía que venir a explicar esas cláusulas en la Comisión de Industria y tampoco concurreó.

¿Puede haber cláusulas secretas en cuestiones de Estado? Perón decía que en cuestiones de Estado, nada debe ser secreto y que si era necesario, se debían debatir en la plaza pública. Recuerdo esa frase de Perón, porque la expresó ante este Congreso de la Nación. Y hoy tenemos un gobierno justicialista.

Entonces, hay leyes secretas y cláusulas secretas en el convenio con China. ¿Saben a qué me hace acordar esto? A que también hubo secretos en el acuerdo que se firmó con Chile y se terminaron entregando mil kilómetros cuadrados de nuestros hielos continentales patagónicos. Así, la reserva de agua potable más importante, que era de los argentinos, pasó a Chile por un convenio. Pero debo decir que no solamente había cláusulas secretas, sino que, incluso, en su momento se llevaron a cabo sesiones secretas en la Cámara de Diputados, de las cuales no participamos como diputados nacionales.

Traigo esto a colación porque hasta hoy sigue siendo un enigma qué pasó con el tema de Malvinas. Se nos dijo acá que por una estrategia nacional, por una cuestión de Estado, no se podía discutir el tema de Malvinas. Nos sorprendimos cuando en ese mismo día se produjo un debate público del propio ministro con un líder de otro partido político.

De paso, debo decir que también se faltó a la verdad y se faltó el respeto a este Congreso cuando se dijo que este Parlamento en nada se había preocupado; que recién ahora nos acordábamos del tema de Malvinas. Les recuerdo, señores legisladores, por respeto a esta institución y también a lo que este Senado hizo, que presentamos una propuesta al canciller...

—Murmullos en la sala.

Sr. Presidente. — Silencio, por favor.

Escuchemos a la oradora en uso de la palabra.

Sra. Avelín. — Presentamos una propuesta al canciller el año pasado. Se trató de un proyecto de comunicación que firmaron los presidentes de todas las bancadas, aprobado por unanimidad el 1º de julio 2004, expediente 1.973. En esa iniciativa, sí hablábamos de la cuestión de fondo: del reclamo soberano sobre las islas Malvinas por parte del gobierno de la Argentina. Le acercamos una política de Estado —así lo entendimos cuando elaboramos ese proyecto— sin partidismos políticos, en la convicción de que las Malvinas son patrimonio de los argentinos de hoy y del mañana. Reitero que esta propuesta fue firmada por todos los presidentes de bloque. Allí manifestamos que veríamos con agrado que la política exterior a llevar adelante por el gobierno argentino fuera la de retomar la lucha por la soberanía a través de la Asamblea General de la ONU, además del Comité de Descolonización, por ser éste un organismo de inferior jerarquía. Esto lo firmamos y aprobamos todos. Después, escuchamos al ministro decir que este Congreso nunca se ocupó del tema de la soberanía de las Malvinas, descalificando la tarea de este Parlamento, cuando la única descalificada hasta ahora es la propia tarea de la Cancillería.

Entonces, creo que no caben más secretos en este país. Acá se tienen que conocer las circunstancias ya ni siquiera en el ámbito de la comisión, porque quienes no la integran o no han presentado un pedido de informes o de interpelación tienen la obligación y el derecho de conocer qué ha pasado con esta inclusión indebida de las islas Malvinas en la Constitución Europea. Tienen derecho a conocer qué hizo este gobierno o, más bien, qué no hizo y por qué no hizo lo que debía el canciller Bielsa.

Señor presidente: las Malvinas se deben defender de verdad: no en los discursos, sino en las acciones, en los precedentes jurídicos, en las declaraciones que cada uno haga.

Este Congreso ha cumplido. Ha presentado proyectos no sólo respecto del tema de los veteranos, sino también en lo que hace a la lucha por la recuperación de la soberanía. Hemos dado testimonio con estos ejemplos que acabo de citar. No hemos visto el mismo ejemplo por parte del Poder Ejecutivo a través del ministro y eso es lo que va a tener que venir a explicar.

No se puede esperar más. El ministro, voluntariamente, ya tendría que estar viniendo aquí a una audiencia —llámenla como sea—, para explicar y transparentar la defensa de Malvinas.

Por lo expuesto, señor presidente, vamos a acompañar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el senador Giustiniani.

Sr. Pichetto. — Pasemos a la votación.

Sr. Presidente. — En consideración la moción de orden formulada por el señor senador por Santa Fe. Se requieren dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas.

Sr. Menem. — No...

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Losada.

Sr. Losada. — Esto es posterior. Esto corresponde al tratamiento sobre tablas. Cuando llegue el momento, se vota o no. Hubo un debate anticipado.

Sr. Pichetto. — Que se vote ahora. ¿Cuál es el problema?

Sr. Presidente. — Se va a leer el artículo 141, que se refiere a las mociones de orden.

Sr. Losada. — No hay moción de orden.

Sr. Pichetto. — ¿Vamos a repetir el debate?

Sr. Secretario (Estrada). — El artículo 141 dice que la consideración de las mociones de orden es previa a todo otro asunto, aun cuando este último esté en debate, y se tratan en el orden de preferencia establecido en el artículo anterior. Y dice que las comprendidas en los siete primeros incisos se ponen a votación sin discusión.

Sr. Losada. — Nos está leyendo el Reglamento, que lo conocemos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. — Yo no pedí moción de orden, señor presidente.

Sr. Pichetto. — La pedí yo, señor presidente.

Sr. Presidente. — Corresponde pedir la habilitación sobre tablas.

Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Pido que se vote, presidente.

Sr. Presidente. — Han pedido una moción de orden para que se habilite o no el tratamiento sobre tablas de la cuestión planteada por el señor senador Giustiniani.

Se requieren dos tercios.

Sr. Losada. — Señor presidente: eso se trata cuando llega el momento de los tratamientos sobre tablas.

Sr. Presidente. — Pero hay pedida una moción de orden.

Sr. Losada. — La moción de orden es, entonces, que se modifique totalmente el plan de labor. Porque si los tratamientos sobre tablas no están en este momento, ¿cuál es la causa para que votemos en este momento? No tenemos ningún inconveniente, pero hay un funcionamiento, hay un plan de labor y hay un sistema. Lo que pide el senador Giustiniani es que se incorpore, para solicitar tratamiento sobre tablas en su momento, cuando se tratan los asuntos sobre tablas; como pidieron los otros señores senadores. ¿Por qué se va a tratar un proyecto y no los otros?

Sr. Pichetto. — Que se cierre el debate, señor presidente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.

Sr. Guinle. — Por una razón de acotar el procedimiento, se ha debatido el tratamiento sobre tablas que ha pedido el senador Giustiniani; el resto de los pedidos de tratamiento sobre tablas fue consentido. Seguramente, al tratar el plan de labor, van a ser votadas sin objeciones las modificaciones del plan de labor.

En este caso, se adelantó el debate. Entonces, lo que corresponde es definir esta cuestión, a partir de la moción de orden para votar, votar y pasar luego a votar el plan de labor parlamentaria, con las modificaciones propuestas por cada uno de los senadores que han sido consentidas en el transcurso de haberse planteado en el debate.

Así que creo, senador Losada, que es un problema de orden: poner orden; lo debatimos; esta es una cuestión ya debatida en la que usted no tiene –por lo que escuché– ningún tipo de objeciones. Pasemos a votar –una cuestión menos– y sigamos con el plan de labor.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Presidente: ya hicimos una moción concreta para votar. El debate está agotado. Ponga el asunto a votación y resolvemos este tema. Si tienen los dos tercios, lo citan al canciller; si no lo tienen, a otra cosa.

Sr. Presidente. – Está planteada la moción de orden y cerrado el debate.

Tiene la palabra la senadora por San Juan.

Sra. Avelín. – Señor presidente: voy a hacer esta moción, fundada en lo siguiente: considero que este es un tema que hace a la soberanía nacional....

Sra. Fernández de Kirchner. – Eso ya lo dijo.

Sra. Avelín. – Por lo tanto, más allá de que se trate de una cuestión reglamentaria o de procedimiento, creo que tiene que quedar constancia para los tiempos y que cada uno se haga cargo.

Voy a pedir votación nominal, señor presidente.

Sr. Pichetto. – Votación electrónica, señor presidente.

Sr. Presidente. – Está cerrado el debate. Faltan identificarse siete senadores, así votamos ahora. Se requieren dos tercios.

Sr. López Arias. – Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador López Arias.

Sr. López Arias. – Señor presidente: como vamos a votar la no admisión del tratamiento sobre tablas de este tema, quiero hacer conocer a mis colegas de este cuerpo que en la Comisión de Relaciones Exteriores discutimos largamente esta cuestión.

En este sentido, creo que realmente la gran mayoría de los miembros de la comisión sostuvimos que no era conveniente el tratamiento de este tema en el recinto, en el marco politizado de una interpelación. Lo importante y útil para informarse y poder trabajar era citar al señor canciller a la comisión en el momento correspondiente.

Esa fue la opinión y éste va a ser el fundamento de mi voto personal: contrario al tratamiento sobre tablas del tema.

Sr. Menem. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Menem.

Sr. Menem. – Es para una aclaración más pequeña que la del senador López Arias. Para ajustarnos a la verdad, en el seno de la comisión había posiciones discrepantes.

Sr. López Arias. – Pero claro, no dije lo contrario.

Sr. Menem. – No, ha dicho “la mayoría” y no es así. Porque tanto el senador Giustiniani, como el senador Salvatori, como el senador Massoni, y como quien habla, opinamos que era necesaria la interpelación. O sea, no es que en la comisión se resolvió otra cosa.

Sr. López Arias. – No dije que se resolvió.

Sr. Presidente. – Estamos listos para votar. Cerrado el debate.

En consideración la moción de orden. El que vota en forma afirmativa es a favor de habilitar sobre tablas el pedido de interpelación; el que vota en forma negativa es en contra. Es decir que para habilitar el tema serían necesario los dos tercios.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 27 votos por la afirmativa, 27 votos por la negativa y ninguna abstención. La votación resulta negativa.

–El resultado de la votación surge del acta N° 1.

Sr. Agúndez. – Dejo constancia de mi voto afirmativo.

Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa.

Sr. Losada. – Con el voto del señor senador Agúndez, son 28 y 27.

Sr. Guinle. – ¿Quiere que hagamos un reglamento especial? El presidente ya ha dado el resultado.

Sr. Losada. – La aritmética es la aritmética; son 28 y 27.

–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Corresponde votar el plan de labor con las modificaciones propuestas.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.

3. Tuvieron a la vista órdenes de compra emitidas por el programa que no guardan correlatividad numérica con respecto a su fecha de emisión.

B. Observaciones del ejercicio

1. Estados financieros auditados. Ejercicio 2002. Proyecto FOMECA.

No ha tenido a la vista los informes correspondientes a:

– Universidad Nacional de Formosa. Cabe destacar que esta universidad tiene pendiente de rendición al 31-12-02, \$ 21.883. Esta cifra se mantiene a la fecha de terminación de tareas de campo (diciembre/2003), ya que en el año 2003 no ha efectuado rendiciones.

– Universidad Nacional de Tres de Febrero.

No se han presentado los estados financieros auditados. Se señala que no se registran saldos pendientes de rendición.

La UEP suministró la circular 39 –Área Desembolsos de la Red Universitaria– mediante la cual se procedió a reclamar la presentación de los estados financieros.

2. Sistema contable.

Se ha podido observar que el sistema contable permite imputar un solo tipo de cambio por día de operación. En lo que respecta al componente FOMECA, la fecha de registración de las rendiciones depende del tipo de cambio por el cual se registró el anticipo (extracción de cuenta especial) a los efectos que concuerde la fecha de éste con el registro de inversión y no se generen diferencias de cambios entre el anticipo y la rendición. Esto provoca que se realicen registraciones de rendiciones en días en que no hubo movimientos contables (inclusive sábados y domingos) así como también rendiciones recibidas en el 2002 pero registradas en el 2003, por el motivo anteriormente mencionado, ocasionando una distorsión en la información que brinda la contabilidad respecto al período al que corresponde la rendición. Al respecto la UEP no aplicó procedimientos alternativos (extracontables) a fin de subsanar esta limitación del sistema contable.

3. Proyectos FOMECA (antigüedad de créditos).

Se analizaron las cuentas de créditos, Anticipos y A rendir, observándose lo siguiente:

– La existencia de algunas de estas cuentas con saldo de inicio y que al 31/12 no tuvieron ningún movimiento, así como tampoco se procedió al recupero de dicho anticipo, por un total de \$ 856.073,78.

Algunas de las cuentas con saldo al inicio, si bien tuvieron movimientos (rendiciones y/o bajas), al cabo del año no fueron rendidas y/o recuperados los anticipos en su totalidad por \$ 799.034,89.

Dado el tiempo transcurrido (más de un año) se puede concluir que dichos anticipos no rendidos se tuvieron que haber cancelado por \$ 1.655.108,67

(856.073,78 + 799.034,89). Sobre el particular se puede agregar que durante el ejercicio 2002 se entregaron fondos adicionales a las universidades por \$ 7.956.170,43 (\$ 3.181.129,73, anticipos y \$ 4.775.040,70, reembolsos).

Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. – Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo. – Floriana N. Martín.

Sr. Presidente. – En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

62

ALTERACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 11.683...

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito un cambio en el orden de tratamiento, para considerar en primer término el proyecto que se refiere a niños y adolescentes. Es el Orden del Día N° 117.

El tema del procedimiento tributario lo tratáramos a continuación.

Sr. Presidente. – En consideración la moción del senador Pichetto en el sentido de modificar el orden de tratamiento de los temas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la moción.

63

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación Ge-

neral, de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión, por el que se crea el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. (Orden del Día N° 117.)

—El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-65/04) y tenidos a la vista los proyectos de ley (S.-114/04) del senador Jorge A. Agúndez (S.-1.010/04); de la senadora Liliana Negre de Alonso (S.-1.177/04); de las señoras senadoras Ibarra, Perceval y otros (S.-1.253/04); de la senadora María L. Leguizamón y otros (S.-1.530/04); del senador Norberto Massoni (S.-2.523/04); del senador Gerardo Morales (S.-2.709/04); de la senadora Mirian Curletti, todos ellos sobre Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes; y, por las razones que oportunamente dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1° — *Objeto.* Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.

La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.

Art. 2° — *Aplicación obligatoria.* La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las

personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifesten, en todos los ámbitos.

Las disposiciones de esta ley se aplicarán a las niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, de salud, de nacimiento o cualquier otra condición de la niña, niño o adolescente o de sus padres o de sus representantes legales.

Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.

Art. 3° — *Interés superior.* A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

Debiéndose respetar:

- a) Su condición de sujeto de derecho;
- b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta;
- c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;
- d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;
- e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común;
- f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse.

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

Art. 4° — *Políticas públicas.* Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas:

- a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;

- b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia;
- c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;
- d) Promoción de redes intersectoriales locales;
- e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Art. 5º – *Responsabilidad gubernamental*. Los órganos gubernamentales del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas sociales públicas con carácter federal.

En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los órganos gubernamentales del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.

Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes

Las políticas sociales de los órganos gubernamentales del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La prioridad absoluta implica:

1. Protección y auxilio en cualquier circunstancia.
2. Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas.
3. Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas sociales públicas.
4. Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice.
5. Preferencia de atención en los servicios esenciales.

Art. 6º – *Participación comunitaria*. La comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, los niños y adolescentes.

Art. 7º – *Responsabilidad familiar*. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.

Los órganos gubernamentales del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones.

TITULO II

Principios, derechos y garantías

Art. 8º – *Derecho a la vida*. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida.

Art. 9º – *Derecho a la dignidad y a la integridad personal*. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral.

La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley.

Los órganos gubernamentales del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y adolescentes.

Art. 10. – *Derecho a la vida privada e intimidad familiar*. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar.

Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.

Art. 11. – *Derecho a la identidad*. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil.

Los órganos gubernamentales del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los padres u otros fa-

miliares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar.

Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aún cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia; salvo que dicho vínculo amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley.

En toda situación de institucionalización de los padres, los órganos gubernamentales del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquéllos, siempre que no contrarie el interés superior del niño.

Sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley.

Art. 12. – *Garantía estatal de identificación. Inscripción en el registro de estado y capacidad de las personas.* Los órganos gubernamentales del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en la ley 24.540.

Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, los órganos gubernamentales del Estado deberán arbitrar los medios necesarios para la obtención de la identificación obligatoria consignada en el párrafo anterior, circunstancia que deberá ser tenida especialmente en cuenta por la reglamentación de esta ley.

Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro del Estado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos adolescentes y madres, que no hayan sido inscritos oportunamente.

Art. 13. – *Derecho a documentación.* Las niñas, niños y adolescentes y madres indocumentadas, tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley.

Art. 14. – *Derecho a la salud.* Los órganos gubernamentales del Estado deben garantizar:

- a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidos por la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad;
- b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración;

c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia;

d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social.

Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Los médicos están obligados a brindarles la asistencia profesional necesaria, la que no podrá ser negada o evadida por ninguna razón.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de condiciones a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.

Art. 15. – *Derecho a la educación.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.

Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia. En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los órganos gubernamentales del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente de este documento.

Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo entregar la certificación o diploma correspondiente.

Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su condición específica.

Los órganos gubernamentales del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, como así el goce de una vida plena y digna.

Art. 16. – *Gratuidad de la educación.* La educación pública será gratuita en todos los servicios estatales, niveles y regímenes especiales, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

Art. 17. – *Prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad.* Prohíbase a las instituciones educativas públicas y privadas imponer por causa de embarazo, maternidad

o paternidad, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños y adolescentes.

Los órganos gubernamentales del Estado deben desarrollar un sistema conducente a permitir la continuidad y la finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes.

La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su integración a ella.

Art. 18. – *Medidas de protección de la maternidad y paternidad.* Las medidas que conforman la protección integral se extenderán a la madre y al padre durante el embarazo y al período de lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo u embarazo y la crianza de su hijo.

Art. 19. – *Derecho a la libertad.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad.

Este derecho comprende:

- a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos;
- b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela;
- c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos.

Las personas sujetos de esta ley tienen derecho a su libertad personal, sin más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente.

La privación de libertad personal, entendida como ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformidad con la normativa vigente.

Art. 20. – *Derecho al deporte y juego recreativo.* Los órganos gubernamentales del Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquellos con capacidades especiales.

Art. 21. – *Derecho al medio ambiente.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un me-

dio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje.

Art. 22. – *Derecho al honor.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su honor, reputación y propia imagen.

Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen el honor o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.

Art. 23. – *Derecho de libre asociación.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad a la legislación vigente. Este derecho comprende, especialmente, el derecho a:

- a) Formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos;
- b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños, adolescentes o ambos, de conformidad con la ley.

Art. 24. – *Derecho a opinar y a ser oído.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:

- a) Expresar libremente su opinión en los asuntos en que tengan interés;
- b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, laboral, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo.

Art. 25. – *Derecho al trabajo.* Los órganos gubernamentales del Estado deben reconocer el derecho de las personas adolescentes a trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes.

Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes.

Los órganos gubernamentales del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar toda forma de trabajo legalmente

autorizada cuando impidan o afecten su proceso evolutivo.

En el desempeño de sus tareas o trabajos autorizados por las leyes no deben realizar los que sean peligrosos, que entorpezcan su educación, los que sean nocivos para su salud o desarrollo físico, mental, espiritual o social.

Art. 26. – *Derecho a la seguridad social.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.

Los órganos gubernamentales del Estado deberán establecer un seguro social de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que considere los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento.

Art. 27. – *Garantías mínimas de procedimiento. Garantías en los procedimientos judiciales o administrativos.* Los órganos gubernamentales del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte; además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten; los siguientes derechos y garantías:

- a) Ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente;
- b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte;
- c) A ser asistido por un letrado especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;
- d) A participar activamente en todo el procedimiento;
- e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.

Art. 28. – *Principio de igualdad y no discriminación.* Las disposiciones de esta ley se aplicarán por igual a todos las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus representantes legales.

Art. 29. – *Principio de efectividad.* Los órganos gubernamentales del Estado deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumpli-

miento de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

Art. 30. – *Deber de comunicar.* Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.

Art. 31. – *Deber del funcionario de recepcionar denuncias.* El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los deberes del funcionario público.

TITULO III

Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Art. 32. – *Conformación.* El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.

La política de protección integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe contar con los siguientes medios:

- a) Políticas, planes y programas de protección de derechos;
- b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos;
- c) Recursos económicos;

- d) Procedimientos;
- e) Medidas de protección de derechos;
- f) Medidas de protección excepcional de derechos.

Art. 33. – *Medidas de protección integral de derechos.* Son aquellas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias.

La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, los padres, la familia, representantes legales, o responsables, o de la propia conducta de la niña, niño o adolescente.

La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos efectivos, ni su institucionalización.

Art. 34. – *Finalidad.* Las medidas de protección de derechos tienen como finalidad la preservación o restitución a las niñas, niños o adolescentes, del disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

Art. 35. – *Aplicación.* Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a las niñas, niños y adolescentes.

Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.

Art. 36. – *Prohibición.* En ningún caso las medidas a que se refiere el artículo 33 de esta ley podrán consistir en privación de la libertad conforme lo establecido en el artículo 19.

Art. 37. – *Medidas de protección.* Comprobada la amenaza o violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:

- a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo familiar;
- b) Solicitud de becas de estudio o para jardines maternos o de infantes, e inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar;
- c) Asistencia integral a la embarazada;
- d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar;
- e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a los

padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente a través de un programa;

- f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus padres, responsables legales o representantes;

- g) Asistencia económica.

La presente enunciación no es taxativa.

Art. 38. – *Extinción.* Las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento por acto de la autoridad competente que las haya dispuesto y cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen.

Art. 39. – *Medidas excepcionales.* Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio.

Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras persistan las causas que les dieron origen.

Art. 40. – *Procedencias de las medidas excepcionales.* Sólo serán procedentes cuando previamente se hayan cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en el artículo 33.

Declarada procedente esta excepción, será la autoridad local de aplicación quien decida y establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar jurídicamente fundado, debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo de 24 horas la medida adoptada al juez competente en materia de familia de cada jurisdicción.

El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de las sanciones previstas en el capítulo IV del Código Penal de la Nación.

La autoridad competente de cada jurisdicción, en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes dentro del plazo de 72 horas de notificado, con citación y audiencia de los representantes legales, deberá resolver la legalidad de la medida, resuelta ésta, la autoridad judicial competente deberá derivar el caso a la autoridad local competente de aplicación para que ésta implemente las medidas pertinentes.

Art. 41. – *Aplicación.* Las medidas establecidas en el artículo 39, se aplicarán conforme a los siguientes criterios:

- a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las medidas con-

sisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas a ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes;

- b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al considerar las soluciones se prestará especial atención a la continuidad en la educación de las niñas, niños y adolescentes; y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser supervisadas por el organismo administrativo local competente y judicial interviniente;
- c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo familiar de origen, con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes;
- d) Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos de hermanos deben preservar la convivencia de los mismos;
- e) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir en privación de la libertad;
- f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo.

TITULO IV

Organos administrativos de protección de derechos

Art 42. – *Sistema de protección integral. Niveles.* El sistema de protección integral se conforma por los siguientes niveles:

- a) *Federal:* es el órgano de articulación, concertación, diseño y planificación de políticas públicas en todo el ámbito del territorio de la República Argentina;
- b) *Nacional:* es el organismo técnico especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional;
- c) *Provincial:* es el órgano de planificación y ejecución de las políticas de la niñez, cuya forma y jerarquía determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

respetando las respectivas autonomías así como las instituciones preexistentes.

Las provincias podrán celebrar convenios dentro del marco jurídico vigente para municipios y comunas en las jurisdicciones provinciales, como asimismo implementar un organismo de seguimiento de programas de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en coordinación articulada con las organizaciones no gubernamentales de niñez, adolescencia y familia.

CAPÍTULO I

Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia

Art. 43. – Créase el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el que estará integrado por un representante de cada uno de los ministerios con competencia, en la materia, por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y los representantes de los órganos de protección de derechos de niñez, adolescencia y familia existentes o a crearse en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia dictará su propio reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado en la primera reunión.

Art. 44. – *Funciones.* El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá funciones deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas y de políticas de concertación, cuyo alcance y contenido se fijará en el acta constitutiva.

Tendrá las siguientes funciones:

- a) Concertar políticas de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;
- b) Elaborar en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia un plan nacional de acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo con los principios jurídicos establecidos en la presente ley;
- c) Proponer e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la concreción de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño;
- d) Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad civil de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su especialidad e idoneidad en la materia, favoreciendo su conformación en redes comunitarias;
- e) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y protección de derechos;
- f) Gestionar en forma conjunta y coordinada con la Secretaría Nacional de Niñez, Adoles-

cencia y Familia la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;

- g) Efectivizar juntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los estados provinciales para la financiación de dichas políticas;
- h) Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación y ejecución de las políticas previstas en el plan nacional de acción;
- i) Establecer en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

CAPÍTULO II

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

Art. 45. – *Secretaría nacional.* Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo técnico especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia, la que funcionará con representación interministerial y de las organizaciones de la sociedad civil.

Art. 46. – *Funciones.* Son funciones de la secretaría:

- a) Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y establecer en forma conjunta la modalidad de coordinación entre ambos organismos con el fin de establecer y articular políticas de acción;
- b) Elaborar en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un plan nacional de acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en esta ley;
- c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de asesoramiento y contralor en materia de medios de comunicación;
- d) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su competencia;
- e) Participar en forma conjunta con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a la materia de su competencia;
- f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos

del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se efectúen;

- g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y familia;
- h) Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos de los sujetos de esta ley;
- i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la prevención de su institucionalización;
- j) Promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños adolescentes y sus familias;
- k) Coordinar acciones consensuadas con los poderes del Estado, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación activa de las niñas, niños y adolescentes;
- l) Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos provinciales y municipales y agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o en el desarrollo de los procesos de transformación institucional;
- m) Gestionar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;
- n) Efectivizar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los estados provinciales para la financiación de dichas políticas;
- o) Organizar un sistema de información único y descentralizado que incluya indicadores para el monitoreo, evaluación y control de las políticas y programas de niñez, adolescencia y familia;
- p) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos;
- q) Impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;
- r) Asignar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los recursos públicos para la formulación y ejecución

de las políticas previstas en el plan nacional de acción.

- s) Establecer en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

CAPÍTULO III

Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Art. 47. – *Creación.* Créase la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.

Art. 48. – *Control.* La defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del sistema de protección integral se realizará en dos niveles:

- a) *Nacional:* a través del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
- b) *Provincial:* respetando la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las instituciones preexistentes. Las Legislaturas podrán designar defensores en cada una de las jurisdicciones, cuya financiación y funciones serán determinadas por los respectivos cuerpos legislativos.

Art. 49. – *Designación.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Las decisiones de esta comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

El defensor deberá ser designado dentro de los 90 (noventa) días de sancionada esta ley y asumirá sus funciones ante el Honorable Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.

Art. 50. – *Requisitos para su elección.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) Ser argentino;
- b) Haber cumplido 30 años de edad;

- c) Acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y familia.

Art. 51. – *Duración en el cargo.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes durará en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.

Art. 52. – *Incompatibilidad.* El cargo de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional a excepción de la docencia, estándole vedada, asimismo, la actividad política partidaria.

Dentro de los diez (10) días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el defensor debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, bajo apercibimiento de remoción del cargo.

Son de aplicación al defensor, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excusación previstas en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 53. – *De la remuneración.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes percibirá la remuneración que establezca el Congreso de la Nación, por resolución de los presidentes de ambas Cámaras.

Art. 54. – *Presupuesto.* El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida presupuestaria para solventar los gastos del funcionamiento administrativo del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Art. 55. – *Funciones.* Son sus funciones:

- a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a las niñas, niños y adolescentes;
- b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal;
- c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso. Para ello puede tomar las declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los servicios públicos y privados de atención de las niñas, niños y adolescentes, determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación;
- d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por infracciones cometidas contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes; sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando correspondiera;

- e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente, sea desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos de todas las niñas, los niños o los adolescentes;
- f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de los servicios médicos asistenciales y educativos, sean públicos o privados;
- g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias, a través de una organización adecuada;
- h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de su problemática;
- i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación;
- j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o cualquier denuncia que se efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes, ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.

Art. 56. – *Informe anual.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta anualmente al Congreso de la Nación, de la labor realizada en un informe que presentará antes del 31 de mayo de cada año.

Dentro de los sesenta (60) días de iniciadas las sesiones ordinarias de cada año, el defensor deberá rendir dicho informe en forma verbal ante la comisión bicameral a que se refiere el artículo 49.

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe especial. Los informes anuales y especiales serán publicados en el Boletín Oficial, en los Diarios de Sesiones y en Internet.

El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en forma personal, deberá concurrir trimestralmente en forma alternativa a las comisiones permanentes especializadas en la materia de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional a brindar los informes que se le requieran, o en cualquier momento cuando la comisión así lo requiera.

Art. 57. – *Contenido del informe.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta en su informe anual de las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones. En el informe no deberán constar los da-

tos personales que permitan la pública identificación de los denunciantes, como así tampoco de las niñas, niños y adolescentes involucrados.

El informe contendrá un anexo en el que se hará constar la rendición de cuentas del presupuesto del organismo en el período que corresponda.

Art. 58. – *Gratuidad.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes determinará en forma exclusiva los casos a que dará curso; las presentaciones serán gratuitas, quedando prohibida la participación de gestores e intermediarios.

Art. 59. – *Cese. Causales.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes cesa en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

- a) Por renuncia;
- b) Por vencimiento del plazo de su mandato;
- c) Por incapacidad sobreviniente o muerte;
- d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;
- e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

Art. 60. – *Cese y formas.* En los supuestos previstos por los incisos a), c) y d) del artículo o anterior, el cese será dispuesto por los presidentes de ambas Cámaras. En el caso del inciso c), la incapacidad sobreviente deberá acreditarse de modo fehaciente. En los supuestos previstos por el inciso e) del mismo artículo, el cese se decidirá por el voto de los dos tercios de los miembros presentes de la comisión, previo debate y audiencia del interesado.

En caso de muerte del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se procederá a reemplazarlo en forma provisoria según el procedimiento establecido en el artículo siguiente, promoviendo en el más breve plazo la designación del titular en la forma establecida en el artículo 56.

Art. 61. – *Adjuntos.* A propuesta del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y conforme el procedimiento establecido en el artículo 56 podrán designarse dos adjuntos que auxiliarán a aquel en el ejercicio de sus funciones, pudiendo además, reemplazarlo en caso de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal, en el orden en que fuesen designados.

Art. 62. – *Obligación de colaborar.* Todas las entidades, organismos y personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, y las personas físicas están obligadas a prestar colaboración a los requerimientos del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con carácter preferente y expedito.

Art. 63. – *Obstaculización.* Todo aquel que desobedezca u obstaculice el ejercicio de las funciones previstas en los artículos precedentes incurrirá

en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.

El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes.

Puede requerir la intervención de la justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiera sido negada por cualquier organismo, ente, persona o sus agentes.

Art. 64. – *Deberes.* Comprobada la veracidad de la denuncia o reclamo, el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá:

- a) Promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas competentes, con el fin de garantizar el goce y el ejercicio de los mismos;
- b) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes quienes tienen la obligación de comunicar al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el resultado de las investigaciones realizadas;
- c) Formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos o privados respecto de cuestiones objeto de su requerimiento;
- d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones y acciones realizadas. A tal efecto deberá establecerse un espacio en los medios masivos de comunicación.

CAPÍTULO IV

De las organizaciones no gubernamentales

Art. 65. – *Objeto.* A los fines de la presente ley se consideran organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia a aquellas que, con personería jurídica y que en cumplimiento de su misión institucional desarrollen programas o servicios de promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Art. 66. – *Obligaciones.* Las organizaciones no gubernamentales mencionadas en esta ley deben cumplir con los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados internacionales sobre los de derechos humanos en los que la República Argentina sea parte, y observar los siguientes principios y obligaciones:

- a) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente de respeto, dignidad y no discriminación;
- b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de las niñas, niños y adoles-

centes y velar por su permanencia en el seno familiar;

- c) No desmembrar grupos de hermanos;
- d) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión judicial;
- e) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernan como sujetos de derechos;
- f) Mantener constantemente informado a la niña, niño o adolescente sobre su situación legal, en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte sus intereses, y notificarle, en forma personal y a través de su representante legal, toda novedad que se produzca en forma comprensible cada vez que la niña, el niño o el adolescente lo requiera;
- g) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en pequeños grupos;
- h) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de aplicación respecto de las condiciones edilicias, salubridad, higiene, seguridad y confort;
- i) Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad de aplicación, de los gastos realizados clasificados según su naturaleza; de las actividades desarrolladas descritas en detalle; de las actividades programadas para el siguiente ejercicio descritas en detalle, su presupuesto, los gastos administrativos y los recursos con que serán cubierto. Se dar cuenta también de las actividades programadas para el ejercicio vencido que no hubieran sido cumplidas, y las causas que motivaron este incumplimiento.

Art. 67. – *Incumplimiento.* En caso de incumplimiento de las obligaciones a que se hallan sujetas las organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia mencionadas por esta ley, la autoridad local de aplicación promoverá ante los organismos competentes, la implementación de las medidas que correspondan.

Art. 68. – *Registro de las organizaciones.* Créase en el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil con personería jurídica que desarrollen programas o servicios de asistencia, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán implementar un sistema de registro de las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica con el objeto de controlar y velar en cada jurisdicción por el fiel cumplimiento de los principios que establece esta ley, con comunicación a

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con miras a la creación del registro nacional de estas organizaciones.

TITULO V

Financiamiento

Art. 69. – La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia deberán en forma conjunta y coordinada garantizar la distribución justa y equitativa de las partidas presupuestarias y de todos los recursos nacionales o internacionales destinados a la efectivización de los objetivos de esta ley.

Art. 70. – *Transferencias.* El gobierno nacional acordará con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la transferencia del personal, de los servicios de atención directa y sus recursos, a las respectivas jurisdicciones en las que actualmente estén prestando servicios y se estén ejecutando.

Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.

Art. 71. – *Transitoriedad.* En un plazo máximo de 180 días corridos prorrogables por igual plazo y por única vez, el Poder Ejecutivo nacional arbitrará las medidas necesarias incluidas las afectaciones presupuestarias y edilicias, que garanticen la contención y protección de las niñas, niños y adolescentes, comprendidos dentro del marco de la ley 10.903 que se deroga.

Art. 72. – *Fondos.* El Presupuesto General de la Nación preverá las partidas necesarias para el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez Adolescencia y Familia la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y todas las que correspondan para el cumplimiento de la presente ley, atendiendo lo previsto en el artículo 70.

La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional.

Para el ejercicio presupuestario del corriente año, el jefe de Gabinete reasignará las partidas correspondientes.

TITULO VI

Disposiciones complementarias

Art. 73. – Sustitúyese el artículo 310 del Código Civil, por el siguiente:

Artículo 310: Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el ejercicio de la patria potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela de las personas menores de edad.

Art. 74. – Modifíquese el artículo 234 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 234: Podrá decretarse la guarda:

1. De incapaces mayores de 18 años de edad abandonados o sin representantes legales o cuando éstos estuvieren impedidos de ejercer sus funciones.
2. De los incapaces mayores de 18 años de edad que están en pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta su curatela.

Art. 75. – Modifíquese el artículo 236 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 236: En los casos previstos en el artículo 234, la petición podrá ser deducida por cualquier persona, y formulada verbalmente ante el asesor de menores e incapaces, en cuyo caso se labrará acta con las menciones pertinentes, la que será remitida al juzgado que corresponda.

Art. 76. – Derógase la ley 10.903; los decretos nacionales: 1.606/90 y sus modificatorias 1.631/96 y 295/01.

Art. 77. – Esta ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la sanción de la presente.

Art. 78. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, marzo 17 de 2005.

Liliana T. Negre de Alonso. – Antonio F. Cafiero. – Jorge A. Agúndez. – Sonia M. Escudero. – Norberto Massoni. – Mónica L. Arancio de Beller. – José L. Zavalía. – Ernesto R. Sanz. – Eduardo Menem. – Diana B. Conti. – Mabel L. Caparrós. – Elva A. Paz. – Graciela Y. Bar. – María E. Castro. – Mirian B. Culletti. – Carlos A. Rossi. – Nicolás A. Fernández. – Marcelo E. López Arias. – Silvia E. Giusti. – Ramón E. Saadi. – Guillermo R. Jenefes. – Vilma L. Ibarra. – Sergio A. Gallia. – Alicia E. Mastandrea. – Gerardo R. Morales. – María T. del Valle Colombo de Acevedo. – Celso A. Jaque. – María C. Perceval. – Carlos A. Prades.

En disidencia parcial:

Jorge M. Capitanich. – Marcela F. Lescano.

ANTECEDENTE

**Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación**

(29 de septiembre de 2004)

PROYECTO DE LEY

**LEY DE PROTECCION INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES**

TITULO I

CAPÍTULO I

De la protección general

Artículo 1º – Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño, entendido como la plena satisfacción de sus derechos. La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.

Art. 2º – Es de aplicación obligatoria la Convención sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Los niños, niñas o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos.

Art. 3º – Los órganos gubernamentales del Estado garantizan un sistema administrativo y de justicia especializada y procedimientos especiales cuando sean amenazados o vulnerados los derechos de niños, niñas y adolescentes, a efectos de protegerlos.

Art. 4º – La falta de recursos materiales de la familia, de los representantes legales o responsables de los niños, niñas y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación respecto de aquellos, ni su institucionalización.

Art. 5º – Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas:

- a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes;

- b) Ejecución descentralizada con paulatina municipalización de la atención directa;

- c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;

- d) Promoción de redes intersectoriales locales.

Art. 6º – Las políticas sociales del Estado garantizan con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta implica:

1. Protección y auxilio en cualquier circunstancia.
2. Prevalencia en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas.
3. Preferencia en la formulación y ejecución de las políticas sociales públicas.
4. Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice.
5. Preferencia de atención en los servicios esenciales.

Art. 7º – Los órganos gubernamentales del Estado nacional tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas sociales públicas con carácter federal.

Art. 8º – Los organismos de gobierno garantizan la protección y sostén de la familia en todos los órdenes, a través de la formulación de políticas públicas adecuándolas a las distintas etapas del desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes.

Art. 9º – Corresponde a los padres y a la familia ampliada proporcionar a los niños, niñas y adolescentes que la componen el nivel de vida adecuado para su desarrollo integral y oportuno. Es deber de los órganos gubernamentales del Estado la creación de programas para cooperar con los padres y la familia ampliada en el cumplimiento de esa obligación.

Art. 10. – Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen.

Art. 11. – Constituye una obligación de los organismos de gobierno en todos sus órdenes asegurar el pleno ejercicio de todos y cada uno de los elementos que conforman la identidad de los niños, niñas y adolescentes, sean éstos referidos a su nombre, vínculos familiares, nacionalidad, raza, etnia u otros aspectos socioculturales.

La identificación del recién nacido y su madre, realizada según la legislación vigente, en todo ámbito institucional o domiciliario, así como la inscripción de su nacimiento y la entrega del primer documento nacional de identidad, se efectúan sin cargo.

Los órganos gubernamentales del Estado deben actuar con celeridad y con todos los medios científicos, técnicos, administrativos y jurídicos a su alcance, con el objeto de reparar y restablecer plenamente el ejercicio del derecho a la identidad, cuando una persona menor de edad hubiera sido privada de uno o más de sus elementos.

Art. 12. – Las medidas que conforman la protección integral se extenderán a la madre durante el embarazo y el período de lactancia. Cuando se encuentre por debajo de la línea de pobreza, se le garantizarán condiciones dignas para el adecuado desarrollo de su embarazo y crianza de su hijo.

Art. 13. – Los órganos gubernamentales del Estado deben garantizar a la familia que se encuentre por debajo de la línea de la pobreza, prestaciones especiales para que accedan a condiciones dignas para el adecuado desarrollo y crianza de los hijos, hasta los cinco años de edad.

Art. 14. – La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su integración a ella.

Art. 15. – En toda situación de institucionalización de los padres, los organismos de gobierno garantizan a los niños, niñas y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquellos, siempre que no contraríe el interés superior del niño.

Art. 16. – Los órganos gubernamentales del Estado, la sociedad, en particular sus organizaciones sindicales, y la familia coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil, y limitar toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impida o afecte su proceso evolutivo, o constituya una actividad riesgosa para su persona, u obstaculice su derecho a la educación, la salud, la recreación y al esparcimiento.

Art. 17. – Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente público que detectare la vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.

Art. 18. – El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por el mismo niño, niña o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal denuncia, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de grave incumplimiento de sus deberes.

CAPÍTULO II

De la protección especial

Art. 19. – Los órganos del Estado en todos sus niveles con la prelación establecida por las normas, tienen el deber indelegable e imprescriptible de proteger y asistir con medidas de protección especial de derechos a niños, niñas y adolescentes, cuando se produzca amenaza o violación de derechos en perjuicio de uno o varios de ellos, individualmente considerados.

Las medidas tienen por objeto preservar los derechos, restituirlos o reparar las consecuencias de su amenaza o violación.

Art. 20. – Para garantizar los derechos consagrados en esta ley, deberán impulsarse prioritariamente acciones administrativas o judiciales cuando correspondan. El Ministerio Público de la defensa está legitimado para la promoción de acciones judiciales relativas a la exigibilidad de los derechos económicos y sociales de la infancia. El niño, niña y adolescente siempre tiene derecho a contar con asistencia letrada particular.

Art. 21. – Los órganos gubernamentales del Estado, en todos sus niveles brindan asistencia prioritaria a los niños, niñas y adolescentes destinatarios de medidas de protección especial, ya sea a requerimiento de ellos mismos, de sus padres o representantes, de los órganos administrativos, Ministerio Público, o los órganos jurisdiccionales. A tal fin instrumenta los dispositivos y recursos necesarios.

Las acciones de asistencia podrán ser brindadas a través de los organismos públicos competentes y de las organizaciones no gubernamentales legalmente reconocidas y supervisadas.

Art. 22. – Toda medida de protección especial debe establecerse en el marco de lo dispuesto en el capítulo I de la presente ley a fin de lograr el desarrollo integral y sustentable de niños, niñas y adolescentes, en consonancia con los derechos humanos. Se adoptarán respetando en el interés superior del niño los siguientes principios:

- a) La conservación de sus vínculos familiares, sea manteniéndolo en el grupo de convivencia o asegurando el contacto con sus padres, familia ampliada o responsables;
- b) La recepción de información clara y precisa sobre los motivos de la medida adoptada, su duración y objetivos, tanto por parte del niño, la niña y el adolescente, como por sus padres o responsables;
- c) La medida debe ser fundada en estudios interdisciplinarios, respetar las identidades culturales, guardar proporción con la naturaleza de los hechos que la motivaron;
- d) El establecimiento de la duración y modalidad de ejecución de la medida;

- e) Toda medida es revisable por autoridad judicial, y en su caso recurrible.

Art. 23. – El Estado garantiza el derecho del niño, niña y adolescente a ser oído y considerado cualquiera sea la forma en que se manifieste, a opinar y a participar en todo asunto o trámite administrativo o judicial que concierna a su persona o a sus intereses, sea directamente, o a través de sus representantes legales cuando le resulte imposible actuar por sí, contando con asistencia letrada.

Su opinión deberá tenerse especialmente en cuenta a los efectos de la decisión, pudiendo recurrir por las vías pertinentes, todas las medidas que afecten sus derechos.

Art. 24. – Cuando proceda la adopción de medidas de protección especial, para preservar, restituir o reparar las consecuencias de la vulneración de derechos o garantías de uno o varios niños, niñas y adolescentes, el órgano competente deberá aplicar prioritariamente las siguientes medidas:

- a) Fortalecer los vínculos familiares para que el niño, niña o adolescente pueda permanecer en el seno de su familia u otorgar la guarda preferentemente a un miembro de la familia ampliada o adulto significativo para el niño, bajo supervisión, asesoramiento y seguimiento familiar, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones de los padres en el desempeño de la función parental;
- b) Disponer la asistencia económica para el fortalecimiento familiar;
- c) Ordenar la inclusión en programas comunitarios de asistencia integral a la familia;
- d) Determinar la matriculación y asistencia regular obligatoria a establecimientos de enseñanza, otorgamiento de becas de estudio o para jardines maternales;
- e) Disponer la promoción y capacitación básica en oficios y profesiones estimulando vocaciones;
- f) Ordenar la promoción de acciones para lograr la recuperación física, psíquica y la reintegración social;
- g) Ordenar el cumplimiento de las normativas que garantizan los derechos inherentes a condiciones específicas derivados de necesidades especiales por impedimento físico o mental, por esta ley y por normas concordantes;
- h) Localizar a los miembros de la familia, particularmente en los casos de niños, niñas y adolescentes que se encuentren fuera de su país de origen, en condiciones de migración;
- i) Ordenar acciones destinadas a combatir cualquier forma de discriminación especialmente la producida por pertenecer a mino-

rías raciales, étnicas, religiosas o lingüísticas;

- j) Determinar la inclusión en programas especiales de orientación y tratamiento de adicciones;
- k) Ordenar la inclusión del niño, niña o adolescente o de miembros de su familia en alguna o algunas de las medidas de promoción y efectivización de derechos.

Art. 25. – Cuando por circunstancias especialmente graves, los niños, niñas y adolescentes deban ser separados de su medio familiar, los órganos del Estado deben asegurarles la permanencia con su familia ampliada o con adulto significativo para el niño. La medida debe ser excepcional, fundada, limitada en el tiempo, basada en criterios técnico-científicos interdisciplinarios y respetar las identidades culturales.

Si por aquellas circunstancias, la separación del niño, niña o adolescente de sus padres y familia ampliada fuera permanente, se le garantizará un ámbito familiar con persona idónea para su crianza.

Art. 26. – Las acciones administrativas o judiciales adoptadas tienen como objetivo asegurar al niño, niña y adolescente el pleno goce de sus derechos, la promoción de su formación integral y la reparación de su derecho violado.

Las mismas deben ser evaluadas periódicamente y revocadas o sustituidas cuando así lo indique el interés superior del niño, niña y adolescente, entendido como la plena satisfacción de sus derechos.

Art. 27. – Sin perjuicio de los procedimientos administrativos establecidos en el presente capítulo, las acciones judiciales de protección especial tratan:

- a) Considerando parte a la persona menor de edad, padres o representantes legales;
- b) Dando intervención al Ministerio Público y al letrado particular;
- c) Estableciendo que la resolución será recurrible.

El recurso de apelación será concedido en relación y con efecto devolutivo.

TÍTULO II

Organos administrativos de protección de derechos

Art. 28. – El Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es un conjunto de organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescen-

tes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.

El Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes funciona a través de acciones intersectoriales, desarrolladas por entes del sector público, de carácter central o descentralizado y por entes del sector privado.

La política de protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes debe contar con los siguientes medios:

- a) Políticas y programas de protección de derechos;
- b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos;
- c) Recursos económicos;
- d) Procedimientos;
- e) Medidas de protección de derechos.

Art. 29. – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como órgano rector de las políticas de derechos en la materia. Será presidida por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo nacional, tendrá carácter interministerial, y representación de las organizaciones de la sociedad civil. Son sus funciones.

- a) Convocar y garantizar el funcionamiento del Consejo Federal y establecer la modalidad de coordinación entre ambos organismos;
- b) Elaborar un plan nacional de acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley, y en coordinación con el Consejo Federal;
- c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de asesoramiento y contralor en materia de medios de comunicación;
- d) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su competencia;
- e) Participar en la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a la materia de su competencia;
- f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos

del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se efectúen;

- g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y familia;
- h) Diseñar normas generales de funcionamiento y categorización que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos;
- i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes, y la prevención de la institucionalización;
- j) Promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y sus familias;
- k) Coordinar acciones consensuadas con los poderes del Estado, organismos gubernamentales y no gubernamentales, fomentando la participación activa de niños y jóvenes;
- l) Propiciar acciones de asistencia técnica a organismos provinciales y municipales; y capacitación para profesionales, técnicos y agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o en el desarrollo de los procesos de transformación política institucional;
- m) Intervenir a requerimiento de la justicia federal en todos aquellos casos que no puedan ser resueltos por los organismos locales;
- n) Gestionar la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;
- o) Transferir fondos a los estados provinciales para la financiación de dichos programas, previa evaluación con reserva del monitoreo de los mismos;
- p) Organizar un sistema único y descentralizado de indicadores, monitoreo, evaluación y control de gestión de políticas y programas de derechos de niñez, adolescencia y familia;
- q) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos, en especial a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a la convivencia familiar y comunitaria, a la protección, supervivencia y desarrollo personal, a la identidad, a la libre expresión y de pensamiento, a ser escuchado, a la participación, a no ser discriminado, a la recreación, al juego, al deporte, a la no explotación y a profesar la propia religión; estableciendo la materia en la agenda política como objetivo social prioritario;

- r) Impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias;
- s) Asignar los recursos públicos para la formulación y ejecución de políticas previstas en el plan nacional de acción.

Art. 30. – La Secretaría Nacional ejerce sus funciones a través de sus áreas específicas de acuerdo a la forma institucional que se determine.

Art. 31. – Créase el Consejo Federal de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia, el que estará integrado por los ministros del área social y los responsables del área de infancia y adolescencia de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el presidente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Art. 32. – El Consejo Federal tendrá funciones deliberativas, de concertación política, consultivas y de formulación de propuestas, cuyo alcance será fijado en el acta de su constitución.

Corresponde a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, convocar a la Asamblea Constitutiva del mismo en un plazo que no exceda los ciento ochenta (180) días desde la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 33. – El Consejo Federal tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

- a) Garantizar una distribución justa y equitativa de los recursos nacionales e internacionales entre los organismos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia;
- b) Concertar políticas de protección integral de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias;
- c) Elaborar un plan nacional de acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley y en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia;
- d) Proponer reformas legislativas a nivel nacional para adecuarlas a la Convención sobre los Derechos del Niño;
- e) Impulsar reformas legislativas locales para la adecuación de la normativa vigente a la Convención sobre los Derechos del Niño;
- f) Propiciar ámbitos de coordinación y complementariedad entre los distintos poderes del Estado a nivel provincial y regional;
- g) Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad civil de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su especialidad

e idoneidad en la materia, favoreciendo su conformación en redes comunitarias;

- h) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y protección de derechos, y la emisión de opinión previa al otorgamiento de la personería jurídica por parte de los responsables del área específica en las jurisdicciones locales.

Disposiciones generales

Art. 34. – Sustitúyese el artículo 310 del Código Civil, por el siguiente:

Artículo 310: Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el ejercicio de la patria potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela de las personas menores de edad.

Art. 35. – Deróganse las disposiciones referidas a las personas menores de edad establecidas en la sección 8, capítulo III, título IV del Libro 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 36. – Derógase la ley 10.903 y las normas legales que se opongan a los derechos fundamentales consagrados en la presente ley, manteniendo los artículos 393 y 457 del Código Civil su actual redacción.

Art. 37. – *Disposición transitoria:* La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asumirá las funciones que en la actualidad ejerce el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hasta tanto se transfieran las correspondientes a las jurisdicciones locales, con la supervisión del Consejo Federal.

Art. 38. – Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.

Art. 39. – Las erogaciones que demande la aplicación de esta ley se imputarán a las partidas pertinentes del presupuesto nacional. Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a readecuar y reorganizar las partidas de las jurisdicciones y organismos involucrados por la misma.

Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

EDUARDO O. CAMAÑO.

Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración en general.

Tiene la palabra la señora presidenta de la Comisión de Legislación General, senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: como dijo el secretario, en este dictamen han intervenido cinco comisiones, la de Legislación

General, la de Población y Desarrollo Humano, la de Justicia y Asuntos Penales, la de Seguridad Interior y Narcotráfico, y la de Presupuesto y Hacienda.

Se trata de un proyecto que transforma en operativa –aunque la doctrina determina que la convención es operativa– y hace realidad la ley que otorga operatividad a la Convención del Niño.

Esta convención fue suscrita por la Argentina y ratificada por ley en 1990. Desde esa fecha hasta ahora han existido innumerables proyectos tendientes a ponerla en marcha. Si bien, desde el punto de vista constitucional, se encuentra en vigencia, sabemos que fácticamente esta convención no se aplica.

Hemos recorrido un largo camino en esta cuestión y lo que hoy vamos a tratar va a ser, en primer lugar, el proyecto enviado en revisión por la Cámara de Diputados. Pero también se han tenido a la vista los proyectos de los señores senadores Agúndez, Ibarra y Perceval, Leguizamón, Massoni, Morales, Curletti y de quien les habla, relativos a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes.

¿Por qué digo que se ha recorrido un largo camino para llegar al proyecto que hoy vamos a tratar? Lo digo porque ha costado mucho lograr el consenso en un proyecto en el que, indudablemente, existía una carga ideológica en las distintas posiciones que los senadores habían incorporado para transformar en operativa la Convención del Niño.

Atento al tiempo transcurrido y a no lograr mayoría sobre un solo proyecto, se llegó a un acuerdo para trabajar en conjunto dejando de lado todo lo que significaban cuestionamientos, tales como educación sexual, ley de salud reproductiva con relación a los niños, etcétera. En ese sentido, cada uno de los senadores que había planteado un proyecto de ley, en forma generosa ha renunciado –al menos en esta etapa– a incorporar esos artículos que obstaculizaban un consenso para luego plantearlos por separado y debatirlos en otra oportunidad.

Quiero decir que este proyecto se comenzó a debatir el 27/11/03. La segunda reunión fue el 2/12/03, luego el 17/8/04, 24/8/04, 26/8/04, 1º/9/04, 9/9/04, 14/9/04, 23/9/04, y finalmente el 28/9/04 se formuló un dictamen contenido en el Orden del Día N° 1.197. Según recuerdo, se

trató de un despacho por unanimidad que contaba con cincuenta y cuatro firmas.

A pocos días de haber suscrito ese dictamen, nos encontramos con que la Cámara de Diputados sanciona un proyecto, que es remitido a esta Cámara. En consecuencia, ese consenso que habíamos logrado con un gran esfuerzo, prácticamente se transformó en abstracto porque el proyecto que venía en revisión contenía dos otras cuestiones que se enfrentaban palmaria-mente con el dictamen del Senado.

Comenzó así una nueva etapa de consensos sobre la base del proyecto enviado por la Cámara de Diputados. Empezamos así con nuevas reuniones que incluso llevamos adelante a través de los asesores. Recuerdo que durante una de las marchas del señor Blumberg realizada un viernes, me encontraba reunida con algunos senadores y con los asesores de los senadores integrantes de las cuatro comisiones –éramos aproximadamente ochenta personas– trabajando para consensuar un proyecto que pudiera ser luego sancionado.

Finalmente, el 6 de abril de 2005 se logra emitir un dictamen de comisión, y ahí empieza una tercera etapa de consenso. O sea, la primera fue entre nosotros; la segunda, entre nosotros con respecto al proyecto de la Cámara de Diputados; y la tercera, entre algunos senadores y algunos diputados para que la iniciativa fuera una realidad.

Es así que en el Senado nos dieron dos o tres lineamientos de los que no podíamos apartarnos para el tratamiento de este proyecto. Uno era que la derogación del patronato debía hacerse sí o sí; me refiero a la desinstitutionalización de los menores de los orfanatos. El otro punto era que la autoridad de aplicación debía ser la administrativa local, sin perjuicio de que exista una posibilidad de remisión al ámbito del Poder Judicial, o sea, una traslación de la aplicación de la convención a la autoridad administrativa local dependiente de la autoridad de cada provincia. También era una cuestión no modificable el manejo de fondos, para respetar la autonomía de las provincias en ese sentido. Los otros lineamientos eran la creación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y finalmente la creación de la figura del defensor del niño.

Comenzamos a realizar una serie de reuniones con la diputada Martínez, que es la que más

trabajó en este tema, y otros diputados, en distintos despachos de senadores para avanzar en un consenso. Había disidencias. No teníamos que repetir el articulado de la convención, a propuesta del senador Morales, porque como no se conocen no se aplican...

Creo que hemos llegado a un punto último de consenso, quedando un solo tema sobre el que no hubo consenso, y tengo que decirlo honestamente. La señora diputada Martínez, como representante del grupo de legisladores que estaba trabajando en este proyecto en la Cámara de Diputados, nos manifestó que no compartía la designación del defensor del niño, a nuestro juicio una de las cuatro patas fundamentales que esta Cámara consideró para avanzar en este proyecto.

Consecuentemente, ésta es la única diferencia que nos ha quedado a hoy con relación al proyecto de la Cámara de Diputados. Tengo todos los borradores del material que trabajamos con la señora diputada.

Voy a ser muy breve porque vamos a pedir la inserción de nuestras exposiciones, porque lo más importante es que este proyecto de ley se apruebe, de manera que la Cámara de Diputados pueda sancionarlo definitivamente este año.

El objeto de este proyecto de ley es la protección de las niñas, niños y adolescentes para garantizar el ejercicio de todos los derechos que contempla la Convención de los Derechos del Niño, la cual es obligatoria en los ámbitos administrativos y judicial. Además, y hasta los dieciocho años, contempla la obligación de escuchar a los niños, niñas y adolescentes en todas las decisiones cotidianas que se puedan tomar, de familia, de comunidad y de escuela. Es decir que una decisión que afecte a un niño debe ser escuchada, por supuesto, acordándose la interpretación que se le debe dar.

El proyecto contiene cinco títulos, que simplemente voy a enumerar. El primer título se refiere a las disposiciones generales. El título II habla del derecho a la identidad, al honor, a la libertad de ser oído. Esto último me parece importante y lo vuelvo a resaltar. Posiblemente en nuestra generación no había derecho en el colegio, por ejemplo, a opinar ni a juntarse en centros de estudiantes. Además no había derecho a discrepar con la maestra que tenía la autoridad absoluta. La verdad es que le doy mucha

importancia a esta obligación de escuchar al niño, cualquiera sea el ámbito. Por eso considero que es importante el defensor del niño porque, en definitiva, es él quien lo va a resguardar en forma directa sin necesidad de acudir a la autoridad judicial; o sea, si hay un buen defensor y realiza una buena tarea podrá hacer efectivos los principios de esta convención.

El título III habla del sistema de la protección y de quienes lo conforman: todos los organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan y ejecutan las políticas públicas de gestión estatal o privada en el ámbito nacional, provincial y municipal. Esta norma está absolutamente integrada con un sentido federal. De ahí, la importancia de cuidar el manejo de fondos para que exista una equitativa distribución de los recursos para garantizar que los niños de una provincia que, a lo mejor, no puede aplicar la convención con recursos propios puedan estar dentro del marco de este proyecto de ley.

¿Cuáles son los órganos? Habrá un órgano administrativo local, que será fijado por cada municipalidad –en el caso de que exista– y también órganos administrativos nacionales y federales. La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia tiene las características de una secretaría de Estado; o sea, es designada por el Poder Ejecutivo nacional. Pero, a su vez, la iniciativa contempla la creación del Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia que estará conformado por la autoridad correspondiente a cada provincia; o sea, dependerá de cómo se organice cada provincia. El otro órgano administrativo es el defensor del niño y, finalmente, también tenemos a las organizaciones no gubernamentales. Esa es la estructura que se establece en el presente proyecto de ley.

–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Guinle.

Sra. Negre de Alonso. – Antes, yo les dije que habían existido tres etapas de consenso. Desde que se emitió este dictamen, en abril de este año, hasta ahora se acordó una propuesta –que está en las bancas de los señores senadores– con la Cámara de Diputados y que, vale la pena aclarar, está en poder de los señores senadores desde la semana pasada –originariamente, fue enviada por e-mail–, no obstante lo

cual hoy hemos distribuido una fotocopia de ella. Esa propuesta es la que hoy se va a someter a votación, con una modificación que obedece a un error material. Concretamente, en el artículo 43 del capítulo I, se ha puesto arriba, como título, “Consejo Federal...” y, en realidad, debe figurar “Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia”. Y en el capítulo II ocurre exactamente lo contrario: o sea, se encabezó como “Secretaría Nacional...” cuando, en realidad, debe figurar “Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.

En cumplimiento de lo que hemos acordado en el plan de labor y con el objeto de favorecer la aprobación de este proyecto, voy a solicitar la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones porque, realmente, esto significa un avance muy importante para nosotros. En este sentido, les informo que hemos estado reunidos con representantes del UNICEF, quienes vinieron a solicitar algunos agregados; a ellos les hicimos saber que esta iniciativa era el resultado del consenso obtenido y por qué habíamos arribado a esta redacción. La gente del UNICEF entendió perfectamente lo que le explicamos; tuvimos muchas horas de reunión e, inclusive, ese día estuvimos hasta más allá de las 23, controlando artículo por artículo, luego de lo cual se hizo una nueva revisión. Finalmente, llegamos a este proyecto de ley, que es el que los señores senadores tienen en su poder.

A continuación, voy a resaltar dos cuestiones. En primer lugar, solicito la inserción en el Diario de Sesiones del análisis de todos los aspectos técnicos de esta iniciativa. A su vez, quiero resaltar el gesto de los señores senadores que dejaron de lado las cuestiones que nos dividían y trabajaron a partir de aquellos aspectos donde existían coincidencias. Como ustedes saben, yo no compartía muchas cosas, ni siquiera cuando han llegado como proyectos separados. Pero hubo una actitud de generosidad hacia todos las niñas, niños y adolescentes del país; actitud que deseamos sea imitada por los señores diputados de la Nación.

En segundo lugar, en pos del consenso y el trabajo realizado, quiero resaltar la labor de los asesores de los senadores. Intenté buscar la lista de los que participaron –alrededor de ochenta aproximadamente– para mencionarlos, pero lamentablemente no la encontré. También, jun-

to a los asesores de los senadores, había miembros de organizaciones no gubernamentales que se incorporaron al trabajo y fueron de gran ayuda en la confección del proyecto de ley. Sin embargo, vuelvo a destacar que el mayor trabajo fue realizado por los asesores. Por ejemplo, trabajaron los fines de semana y, si vieran las constancias de las reuniones, advertirían que las hubo por la mañana, luego reuniones de senadores y luego nuevamente reuniones de asesores hasta las 11 o 12 de la noche. Es increíble entonces todo el material que se ha recopilado y lo que se ha trabajado en pos de esta iniciativa.

Señor presidente: en reconocimiento del consenso logrado y de la generosidad de dejar de lado algunas cuestiones puntuales que nos diferenciaban y, más allá de los partidos políticos o de las ideologías, destaco que todo el Senado se puso de acuerdo para elaborar un dictamen final, razón por la cual sería muy bueno avanzar en la votación para que luego la convalide la Cámara de Diputados de la Nación.

Sr. Presidente (Guinle). – Las inserciones que se soliciten se considerarán en conjunto.

Tiene la palabra la señora senadora Arancio de Beller.

Sra. Arancio de Beller. – Señor presidente: en línea con lo que ha manifestado la señora senadora Negre de Alonso quiero rescatar la importancia de que hoy se trate este tema en el marco del consenso con la Cámara de Diputados para que la iniciativa en consideración pueda convertirse en ley.

Estamos en deuda con los niños y adolescentes en lo que hace a garantizar sus derechos para que puedan ser efectivos y que cuenten con las herramientas para acceder a lo que todos aspiran; es decir, a un mejor futuro.

Es un tema de larga data porque todos recordarán que es un asunto cuya sanción por parte de una Cámara del Congreso había perdido estado parlamentario. Luego hubo un sinnúmero de proyectos en ambas Cámaras del Congreso con la idea rectora de la protección de los niños. Además, es algo que se inscribe en el marco de convenciones internacionales y de la propia convención que, como se sabe, tienen rango constitucional y fueron antecedentes de invaluable utilidad.

En este momento, se está por avanzar en la derogación de la Ley de Patronato que fue pen-

sada para una sociedad sensiblemente distinta de la actual. Una ley en franca contradicción con los preceptos constitucionales y para la cual los niños y adolescentes son un objeto de protección.

Se está por avanzar en la generación de normas eficaces para garantizar el disfrute de derechos y garantías por parte de los niños y adolescentes.

Se está a punto de cambiar un esquema que había establecido dos categorías bien diferenciadas.

Por ejemplo, los menores, donde se englobaba al universo de los que son los excluidos sociales, y cuyos problemas se judicializaban y su situación de pobreza se criminalizaba. También se avanza en un esquema donde la facultad discrecional del juez abría el camino para todas las injusticias, terminando por estigmatizar a nuestros niños y jóvenes, quienes no tenían más culpa que no haber gozado de las condiciones mínimas para una vida digna.

De los jóvenes que están institucionalizados en algunas jurisdicciones, un 60 por ciento lo está por causas sociales. La idea de ver a ese niño pobre y sin futuro como un peligro es injusta. Y mucho más lo es la posibilidad que ofrece un Estado de segregarlo, como un mecanismo de defensa de la sociedad. Por eso, hoy celebramos que nos encontremos tratando este tema: se trata de una deuda pendiente.

En medio de la discusión, surgieron muchas cuestiones. Por ejemplo, cuál era el momento oportuno para cambiar el sistema y qué se iba a hacer con los niños que estaban en los institutos. Desde cualquier punto de vista que se analice, seguramente los legisladores, los funcionarios y los actores de la sociedad civil vamos a coincidir en algunas cuestiones.

Una de ellas es que la derogación de la ley 10.903, que tiene más de 100 años, es una necesidad de la sociedad. También vamos a coincidir en que constituye una enorme injusticia que los niños que carecen de recursos materiales y afectivos puedan estar institucionalizados compartiendo sus días con aquellos que han violado la ley. Del mismo modo, seguramente vamos a coincidir en que, a pesar del tiempo que pueda demandar desestructurar todo el sistema del patronato e implementar el sistema de protec-

ción integral, debemos derogar ya esa ley retrógrada y por demás injusta.

Por medio de este proyecto estamos planteando adecuar las normas a la convención, que bajo el sistema de la protección integral unifica el universo de la infancia, sin importar si los niños tienen o no las necesidades básicas satisfechas.

Estamos ante una norma que también está planteando nuevos principios para el Estado, que va a ver a la infancia y a la adolescencia desde otro punto de vista.

Asimismo, por medio de este proyecto planteamos la centralidad de los vínculos familiares. La familia sigue siendo el ámbito de contención natural de este universo de niños y jóvenes, sin importar sus condiciones económicas.

Esta convención ya tiene rango constitucional y ha sido ratificada por más de 190 países, entre ellos por el nuestro, que lo hizo en 1990. Y la doctrina de la protección integral se encuentra hoy plasmada no sólo en la convención, sino en las reglas y en las normas básicas de las Naciones Unidas para enfrentar toda la situación de la justicia y, en particular, de la atinente a los menores.

La convención tiene como premisas básicas unificar el universo de la infancia, garantizar que se hagan efectivos los derechos, eliminar cualquier tipo de internación que no se vincule con la comisión de algún delito y rescatar el rol de la familia.

Estamos dando a nuestros niños, niñas y adolescentes las herramientas para que hagan efectivo el derecho de que se respeten sus derechos.

Es por eso que sin ánimo de abundar en detalles, anticipo que ésta será una muy buena noticia para ese millón y medio de chicos que fuera de este recinto deben trabajar para sobrevivir, porque la mitad de esos niños tiene que mendigar.

Además, tenemos seiscientos mil niños, niñas y adolescentes que no van a la escuela y que se merecen una oportunidad para que puedan gozar de todos sus derechos y garantías.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: adelanto la satisfacción del bloque de la Unión Cívica Ra-

dical por el tratamiento de este tema que viene siendo postergado desde hace un tiempo, tal como ha mencionado la señora senadora Negre de Alonso.

Destaco fundamentalmente la participación de diversos sectores de la comunidad y, en especial, el trabajo de los asesores de los senadores miembros de las comisiones intervinientes en este tema. Sin ese trabajo, seguramente no hubiéramos llegado a esta instancia ni a tener una idea prácticamente consensuada, a pesar de algunas observaciones que plantearé ahora y que se profundizarán en la consideración en particular.

Efectuaré unas breves consideraciones generales a partir de lo que se había convenido, pues se trata de una cuestión muy importante, en la que dejaré planteadas algunos puntos básicos.

Comenzaré con una sucinta reseña histórica para que se entienda cómo llegamos a la situación actual, y saber qué es lo que ha pasado con el concepto del patronato, que fue implementado a partir de 1880.

Hasta ese momento la situación de la niñez era atendida por instituciones privadas y religiosas. Y como consecuencia de que la familia y la escuela resultaron instancias insuficientes para atender dicha problemática, surge con fuerza la figura del Estado a través de la organización de instituciones de corrección de menores y del impulso de leyes específicas sobre la minoridad, pero siempre sobre la base de un concepto que fue la estructura medular de la ley de patronato, en el sentido de considerar a los problemas de la niñez como provenientes de sectores sociales marginales y peligrosos.

Se fortalecen entonces otras instituciones —tales como los tribunales de menores—, y se profundiza la judicialización de los problemas de la infancia.

El concepto que rigió la idea del patronato estaba vinculado con un conjunto de políticas estatales enmarcadas en el paradigma de la doctrina de la situación irregular, la que considera al niño adolescente como objeto de tutela por parte del Estado. En ese concepto se basó el andamiaje institucional del control social estatal, que dio origen a la ley 10.903 o Ley Agote, de patronato, todavía vigente en nuestro país.

Los ejes de esa política de infancia, a principios del siglo XX, tuvieron tres aspectos centra-

les. El primero de ellos fue el modelo de control social de niños y adolescentes; el segundo, la intervención del Estado, que parte del concepto del riesgo moral y material de niños y jóvenes —actúa cuando considera a los niños, niñas y jóvenes como peligro para sí o para los demás—; y el tercer eje de esta política ha tenido que ver con que la intervención estatal se genera a través de la institucionalización y de la judicialización de la pobreza, sustentada en el poder de coerción del Estado. Esto, que ha configurado el paradigma del patronato, todavía lo tenemos en nuestros días como una política activa por parte del Estado nacional y también de muchas provincias. Digo esto sin perjuicio de dejar en claro que hay provincias que ya han planteado modificaciones y que han avanzado mucho más que la Nación en este sentido.

Todo esto, lógicamente, ha generado una poderosa maquinaria de instituciones tutelares sustitutivas de la familia y de la comunidad —de la acción comunitaria— a través de organismos asistenciales, penales y psiquiátricos, y de comunidades terapéuticas, etcétera, que configuraban todo este marco de institucionalización del niño y de su problemática.

El patronato, como política social, también se ha sustentado en esquema clientelares y asistencialistas, desconociendo principios universales que, justamente, son los que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño viene a instalar y a resolver. Viene a plantear los derechos del niño como un derecho humano, con principios universales que tienen que ser ejecutados y formar parte de la política activa de cada uno de los Estados que han suscrito este convenio, que en nuestro país tiene rango constitucional a partir de 1994. En 1990, como ha dicho la presidenta de la comisión, se aprueba la convención y desde 1994 el Congreso Nacional, el Estado nacional, el país, la sociedad argentina, están en deuda con la sanción de una ley que haga efectivos los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Hay esfuerzos que se han venido haciendo, señor presidente. Me parece que va a ser el tema central del debate de hoy que los esfuerzos para hacer vigente la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño han venido siendo filtrados por un concepto que mezcla los derechos de los niños, en términos de derechos

humanos, con el control social de la pobreza. Este es el límite que tenemos que saber reconocer y que no podemos trasvasar, porque de ser así volveríamos al viejo esquema de patronato.

Me parece que hay algunos temas que están expresados en el proyecto de ley que, en la medida en que no sean bien tratados, inclusive en los dictámenes escritos, nos harían correr el riesgo de volver al esquema que queremos dejar.

Después se presentaron algunos efectos sociales. Tal el caso del “efecto Blumberg”, que también nos trajo otros temas de debate que nos apartaron de la cuestión central; me refiero a un sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. A partir del “esquema Blumberg” se trajeron a la discusión, al debate, las políticas de seguridad. En ese sentido, se planteó el tema de la edad de imputabilidad de los menores. Gracias a Dios, no sólo por una actitud de este Congreso Nacional sino también por la participación de distintos actores sociales, hemos logrado postergar ese debate hasta tanto se discuta esto, que es anterior: cuál es el marco conceptual de aplicación efectiva de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de un sistema de protección integral. Esto es previo al debate sobre cualquier tipo de modificación del Código Penal.

Este es un tema del conjunto de la sociedad, señor presidente. Para aquellos a quienes les gusta hablar de la transversalidad, es algo que corta transversalmente todos los partidos políticos e instituciones; que tiene que ver con cuestiones que son filosóficas; que tiene que ver con cambios culturales que no sólo debe debatir sino efectivizar la sociedad argentina; que tiene que ver con la democracia misma, con el respeto a la Constitución y con que hagamos realmente efectivos los derechos humanos.

Si aprobamos esta norma y no trasvasamos ese límite para volver en algunos aspectos centrales al esquema de patronato, seguramente nos quedará la tarea de la ejecución de la ley a partir de acciones que propendan a la desinstitucionalización y la desjudicialización.

Ya se han planteado acá los esquemas centrales. Yo quiero ir a algunas cuestiones que ha planteado en general la presidenta de la comisión.

Me parece que debemos tener mucho cuidado en la estructura que tiene el proyecto de ley,

que plantea el sistema de protección integral como el conjunto de políticas que consideran al niño, niña y adolescente como sujetos activos de derecho, en un sentido abarcativo de ellos y a lo largo de todo su crecimiento, y que define las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado con relación a los derechos universales especiales, por su condición de persona en desarrollo.

La cuestión del capítulo que habla de las políticas estatales especialmente tienen que ver con lo que plantea el artículo 4° del proyecto de ley, que establece los objetivos de las políticas públicas, en cuanto al fortalecimiento del rol de la familia, a la descentralización de los organismos de aplicación de los planes y programas específicos, a la gestión asociada de organismos, a la promoción de redes intersectoriales locales y a propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Pero me parece que la médula del proyecto de ley –aparte de la descripción de todos los derechos que, como acá se ha dicho, si bien se encuentran en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hoy están siendo ratificados y expresados en función de la realidad de nuestro país en el capítulo que corresponde, que no tiene que ver exclusivamente con las políticas sociales, como en algún caso se ha pretendido plantear con algunas modificaciones– tiene relación con políticas públicas universales, que también son transversales a las actividades que tienen todos los ministerios del Poder Ejecutivo nacional, porque se trata de todos los derechos humanos para los niños, niñas y adolescentes.

En ese aspecto, tendremos que poner especial atención en no desvirtuar lo que plantean los artículos 33 y 34, que son clave porque justamente plantean las medidas de protección integral de derechos; producen el distinguo y determinan cuáles son las medidas excepcionales que puede aplicar el Estado, en tanto y en cuanto cumpla con todas las medidas de protección integral que están, justamente, relatadas en dichos artículos.

Me parece que va a haber un debate en el artículo 37 que, precisamente, plantea esta posibilidad de las medidas excepcionales y este

corte. Y también en el tema que se refiere a las garantías mínimas de procedimiento por parte del Estado.

Con relación a la institucionalidad, nosotros, desde la Unión Cívica Radical...

—Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Guinle). — Por favor, respetemos al orador, hagamos silencio.

Sr. Morales. — Ya termino, presidente.

En cuanto al tema de la institucionalidad, recién la presidenta de la comisión planteaba que habría alguna modificación con relación al orden de la Secretaría que tenga que ver con la aplicación específica de las políticas para la infancia, en primer término, y en segundo término el Consejo Federal.

Por eso, me parece que en la discusión en particular también habrá un debate de fondo. Porque el primer estadio de debate y de la definición de las políticas de protección integral en términos de políticas públicas...

Sr. Presidente (Guinle). — Perdóneme, señor senador. Le pide una interrupción la senadora Negre de Alonso. ¿Se la concede?

Sr. Morales. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Solamente quiero decirle al senador que hay un error material en el título. No es que haya una diferencia en la aplicación de las políticas públicas. Simplemente quedó el título. Donde decía “Consejo Federal”, quedó “Secretaría Nacional”. Y donde dice “Secretaría”, quedó el título “Consejo Federal”.

Se trata de un error material, nada más.

Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en uso de la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. — Me parece que eso lo vamos a ver en el debate en particular. Porque, justamente, en la secuencia lógica que tiene el título de la institucionalidad, respecto de cuáles son los organismos de aplicación, el Consejo Federal es el que tiene que definir la política de la infancia en términos de política pública. Y el organismo nacional, la Secretaría de la Nación, va a tener una función específica, porque justamente se va a dar otro debate ya que se ha planteado una modificación a los varios borra-

dores que se han hecho. Por eso con algunos de los senadores habíamos dicho que íbamos a debatir sobre la base del Orden del Día N° 117, sin perjuicio de las modificaciones consensuadas que ya hemos acordado.

Se hicieron otras reuniones, de las cuales no todos participamos, incluso con la Cámara de Diputados. En ellas se han generado otras modificaciones que dan como producto esto que ha sido repartido sobre las bancas. No sé si es la última versión o no, pero sí me parece que lo que está acordado en la comisión es que empecemos el debate a partir del Orden del Día N° 117 y luego vayamos introduciendo los cambios que han sido consensuados, porque no sé cual es el límite.

La cuestión del orden no es un tema menor, es central y tiene que ver con la lógica de la definición de política pública por parte del Estado, porque en el tema del Consejo Federal se plantea la relación interjurisdiccional, es decir, la participación transversal de todos los ministerios. Porque no estamos hablando solamente de algunos derechos que tienen que ver con políticas sociales; estamos hablando de la vigencia de derechos que tienen que ver con la educación, la salud, el desarrollo social, la cultura, la recreación, el juego, la participación ciudadana y la garantía estatal para el pleno acceso a ellas. Así que no se trata de un tema de políticas sociales sino de políticas públicas, que es mucho más abarcativo, más amplio y que nos aleja de aquel paradigma del patronato que nos planteaba, lógicamente, el concepto del modelo de control social de los niños en un esquema tutelar por parte del Estado con su poder de coerción. Por ello pienso que éste va a ser un debate central cuando tratemos en particular el proyecto.

Señor presidente: éstos son algunos de los aspectos que se han debatido.

Con relación a la figura del defensor de niños, lo compartimos. Si bien teníamos una propuesta inicial, pensamos que tenía que ser un adjunto del defensor del pueblo para no generar otras estructuras. Es decir que a la especificidad de la defensoría del pueblo, se agregaría un adjunto, el defensor del niño. Sin perjuicio de ello, como ha dicho la senadora Negre de Alonso, todos hemos ido buscando puntos de acuerdo. No debemos ponernos rígidos en nuestras posi-

ciones originales. Me parece que llegamos a este punto con una actitud madura y positiva de parte de todos los senadores para poder lograr una sanción en el Senado, sin perjuicio del debate en particular que pretendemos dar.

Quería dejar hechas estas aclaraciones que me parecen son importantes.

En cuanto al tema del debate, si bien en la reunión de labor parlamentaria se había planteado la aprobación título por título, me parece que si la aprobación va a ser así, en algunos casos sí vamos a tener que hacer el tratamiento artículo por artículo, porque —como digo— hay observaciones que están en la modificación que tenemos en nuestras bancas, y algunas las compartimos y otras no. No nos vamos a apartar de aquello que hemos consensuado. Pero nos vamos a oponer a todo lo nuevo que venga y que fundamentalmente desvirtúe el concepto que plantea la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Müller.

Sra. Müller. — Señor presidente: teniendo en cuenta lo que acaba de decir el senador Morales en cuanto a que va a haber una discusión en particular y en homenaje, precisamente, a los niños y a aquello que dijo Eva Perón y que sigue estando vigente, es decir que “los únicos privilegiados son los niños”, pido autorización para insertar mi discurso porque supongo que el debate en particular va a llevar mucho tiempo.

Por otro lado, me hago eco de las palabras de la senadora Negre de Alonso respecto del proyecto de ley y, además, felicito a las senadoras y senadores que hicieron posible consensuar por lo menos la mayor parte de esta iniciativa.

Entonces —reitero—, pido autorización para insertar mi discurso.

Sr. Presidente (Guinle). — En su momento vamos a considerar en conjunto todos los pedidos de inserción.

Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. — Señor presidente: seré breve porque en todo lo que hace al aspecto técnico y tal como acordamos para poder dar tratamiento al proyecto de ley en el día de la fecha, también voy a pedir autorización para insertar mi discurso.

Sólo quiero referirme a dos o tres puntos. Primero, quiero plantear por qué era tan impor-

tante no sólo sacar esta ley sino conseguir el consenso al que se llegó. Desde 1890 y pico tenemos un sistema de patronato que, finalmente, se dictó con la ley 10.903. Es un sistema que se basa en la intervención directa y el control del Estado sobre la niñez. Repito, con intervención directa e institucionalización.

La verdad es que hemos cargado mucho las tintas sobre los tribunales de menores y hay una cosa que también debemos plantear. Un tribunal de menores, en general, poco puede hacer más que disponer de los niños.

La posibilidad de salir de ese esquema y de ponernos en consonancia con una convención sobre los Derechos del Niño e iniciar el paradigma de avanzar en el tratamiento de la niñez, en función de políticas públicas básicas y universales, cambia la forma en que miramos esa niñez y, por lo tanto, el futuro de nuestro país.

Creo que esto es lo central, saber que salimos de un esquema de patronatos, tutelar, y que entramos en un proceso en el que pensamos no sólo en la vulneración y la restitución de derechos, sino que empezamos a pensar en políticas públicas universales. El desafío es poder implementarlas. Creo que por esto tiene sentido, en cierta forma, no lograr la ley que yo hubiese querido.

Presenté, junto con la senadora Perceval, un proyecto muy completo, donde hay muchos aspectos que yo hubiese querido que se incorporaran al proyecto de ley en discusión. Pero, con la vocación de encontrar consenso con otros senadores y senadoras, y también con la Cámara de Diputados, hemos ido cediendo y dejando algunos aspectos de lado. Básicamente, creo que también es muy importante la mirada del Ejecutivo. Y no sólo la de este Poder Ejecutivo, sino la del Poder Ejecutivo como poder implementador de determinadas políticas.

Si los senadores y diputados no entendemos que las leyes, por sí mismas, no cambian la realidad sino que es necesario asumir esto, con consensos, como políticas de Estado, y hacer posible la aplicación de las normas que aquí dictamos en los ámbitos nacional, provinciales y municipales, poco sentido tiene dictar una norma maravillosa que determine una cantidad de derechos de los niños que vamos a proteger, a garantizar y a restituir, si son vulnerados, si no podemos avanzar en una aplicación que será

difícil, para la que habrá que disponer de recursos y consensuar políticas.

Estamos federalizando un sistema que estaba muy centralizado. Creo que hay que hacer ese proceso. No se puede lograr todo en una ley, un día, pensando que al día siguiente cambiará la vida de los niños y de los adolescentes. Creo que, con esa madurez, se trabajó este consenso. Y en este sentido, sí quiero decir –porque, al respecto, escucho con algún grado de preocupación lo que decía el senador Morales– que yo también creo que hay cosas que son perfectibles, o que hubiese querido que estuvieran. Pero creo que hemos llegado a un consenso valioso.

En la búsqueda de lograr que este proyecto de ley no sólo salga efectivamente, sino que podamos avanzar en una implementación real, revisamos nuestro propio consenso y avanzamos en un segundo consenso. Y así pudimos incorporar visiones de distintos aspectos, de diferentes bloques, de quienes van a tener que hacerse cargo desde las provincias y desde la Nación de este proceso de aplicación, de pasaje de un paradigma de clara intervención estatal controladora y tutelar sobre la niñez, a un paradigma de respeto por los derechos y de aplicación de políticas públicas básicas y universales. Me parece que esto es lo valioso.

Creo que tenemos tiempo para revisar, avanzar, conocer cómo vamos a llevar a cabo la implementación, reconocer errores y corregirlos. Pero lo que tenemos que rescatar es eso; si no, va a ser una batalla ideológica, que poco sentido tendrá, o una fantástica ley de implementación imposible. Creo que nuestro consenso permitirá la posibilidad real de ir avanzando en la implementación, que no va a ser fácil, pero en la cual todos estamos de acuerdo.

No quiero terminar sin hacer un reconocimiento específico a la señora presidenta de la comisión, que ha trabajado muchísimo para que hoy sea posible esta sanción, y en particular a los asesores que han trabajado con una constancia, con un entrega y con un enamoramiento sobre este tema como pocas veces se ha visto. Todos los asesores y asesoras de los distintos senadores y senadoras han estado horas, días y fines de semana trabajando sobre esta cuestión. Creo que hoy es uno de los días en que ellos merecen figurar en la sanción de esta ley

mucho más que nosotros. No quiero dejar de señalarlo porque fueron los que más nos llevaron a los senadores a asumir el compromiso de sancionar hoy una ley para ponernos en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, con la que la Argentina estaba en deuda desde hace muchos años.

Dicho esto, creo que el consenso al que hemos llegado es valioso; no sólo posible sino valioso, y entiendo que va a permitir avanzar en la implementación de esta cuestión.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra la señora senadora Leguizamón.

Sra. Leguizamón. – Señor presidente: como coautora del proyecto de ley, quiero manifestar que en muchas de las expresiones de la senadora Liliana Negre de Alonso está sintetizado mi pensamiento.

Quiero dejar claro, sin embargo, que esta ley no va a solucionar los problemas que hoy existen en la realidad sino que es un inicio para un profundo cambio necesitado por esta especialidad de la temática de la niñez y la adolescencia. Va a requerir un enorme esfuerzo conceptual de carácter institucional en las distintas jurisdicciones para que se implemente el traspaso de nuestra vieja doctrina de la situación irregular a la nueva doctrina de la protección integral.

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.

Sra. Leguizamón. – Este refuerzo es para acordarnos de que éste es un inicio. Esta ley es el puntapié inicial –tardío y debido desde 1994– para que las jurisdicciones hagan las reformas que requiere poner en marcha y en práctica la desjudicialización excesiva que existía en estas áreas.

El bienestar de algunos no puede estar dado por la vulnerabilidad de otros, y esta norma busca consensuar ese equilibrio.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero sumarme a este consenso positivo y coincidir con las manifestaciones de los senadores preopinantes. Creo que es exagerado decir que estamos ante una posibilidad histórica por la derogación de la ley de patronato.

Coincido también con lo expresado por la senadora Ibarra en cuanto a que el contexto en el que se aprueba esta ley es el del avance en el reconocimiento de los derechos humanos que se ha dado en el país en los últimos tiempos y que constituye un hecho muy positivo.

Y en ese sentido, debemos saludar que ese avance se dé en un tema tan sensible, importante y tan caro a todos como es el de las niñas, los niños y los adolescentes. Existen doce millones y medio de menores de dieciocho años en la República Argentina, el 70 por ciento de los cuales son pobres, es decir, ocho millones y medio. A su vez, siete de cada diez chicos no cubren sus necesidades básicas. Es decir que más de la mitad se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y cuatro millones y medio de ellos, en la indigencia.

Creo, entonces, que esta sanción es muy importante dado que la ley que estamos derogando contenía el espíritu y la filosofía de empirismo positivista de fin del siglo XIX. Ese empirismo positivista ha llevado justamente al control social por parte del Estado. Ese empirismo positivista dio a luz leyes como aquellas de las que estamos hablando, la ley de Agote, leyes como la 4.144, la ley de residencia, llamada por Alfredo Palacios como “la ley maldita”, porque generaba la persecución por parte del Estado por portación de cara a los inmigrantes, que eran los “peligrosos” en aquel momento.

Esta ley que estamos derogando discrimina dos veces. En efecto, discrimina a los niños por ser niños y discrimina a los niños que son pobres. Por eso es positivo que haya una sintonía con lo que el derecho internacional ha asumido a través de la reforma constitucional de 1994. El plexo normativo jurídico argentino incorpora la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que fue sancionada en 1989.

Bienvenida esta ley. Comparto las modificaciones que se han hecho con respecto a la sanción de la Cámara de Diputados.

Primero, porque la sanción de Diputados en el capítulo referido a la protección integral realizaba una enumeración acotada y parcial de algunos derechos, teniendo como eje las políticas focalizadas en la pobreza. Este dictamen avanza en el sistemático reconocimiento de los derechos con carácter universal e integral.

Segundo, el dictamen del Senado elimina por completo la posibilidad de judicializar los problemas sociales.

Tercero, el dictamen que estamos tratando establece garantías mínimas para las niñas, niños y adolescentes, que deben respetarse en cualquier procedimiento administrativo, que estaba ausente en la sanción de la Cámara de Diputados.

Cuarto, la posibilidad de la institucionalización, que era una de las grandes falencias de la sanción de Diputados.

Quinto, porque el dictamen del Senado reemplaza al actual Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia e incorpora el Consejo Federal, la Secretaría Nacional, ámbitos institucionales más adecuados en un país federal y en la articulación Nación-provincias-municipios.

Sexto, porque se crea la figura del defensor de los derechos del niño, niña y adolescente.

Séptimo, porque este dictamen establece un capítulo referido a las organizaciones no gubernamentales, que tienen a la luz y al calor de los últimos años una participación en toda la vida social y política argentina.

Octavo, porque este dictamen es mucho más contundente en lo que se refiere a la asignación de recursos para la atención de la infancia.

Solicito la inserción de la exposición que tenía preparada.

Por todas estas razones, y porque creo que esta noche estamos dando un gigantesco paso adelante en la protección de los derechos de los niños, niñas y de los derechos humanos, adelanto en general mi voto positivo.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Chubut, senador Massoni.

Sr. Massoni. – Señor presidente: voy a ser lo más limitado posible en cuanto al desarrollo de este proyecto ley.

El trabajo de la señora presidenta de la Comisión de Legislación General, de los demás senadores que la integran y de ese grupo de asesores ha sido extraordinario.

Este es un marco jurídico distinto con relación a todo lo que ha ocurrido con anterioridad. Más aun, modifica totalmente el sistema de la vieja ley de 1919, que también cumplió su fun-

ción. Pero las leyes, al igual que la vida de los hombres, tienen sus ciclos y sus tiempos. Esa vieja ley dio las siguientes conclusiones estadísticas: según el CELS, en conjunto con la UBA, del total de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran institucionalizados, el 81,92 por ciento lo está por motivos asistenciales, mientras que el restante 18,08 por ciento lo está por motivos penales. Entre los 8.000 niños y adolescentes institucionalizados, sólo 800, o sea, el 10 por ciento, se encuentra alojado en instituciones oficiales y el 90 por ciento en instituciones tercerizadas.

Debe destacarse que las privaciones de la libertad por motivos asistenciales son más prolongadas que las motivadas en...

Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción la señora senadora Negre de Alonso.

Sr. Massoni. – Cómo no.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senador Massoni.

Como nos cuesta mantener el quórum que en este momento tenemos, solicito el cierre de la lista de oradores y pido que sea lea.

Sr. Presidente. – Luego del senador Massoni están anotados los senadores Cafiero, Salvatori, Lescano y tengo entendido que por el bloque Justicialista va a cerrar la senadora Perceval.

Se va a votar la moción de cierre de la lista de oradores.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobada.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Massoni.

Sr. Massoni. – Las privaciones de la libertad por motivos asistenciales son más extensas y prolongadas que las motivadas en conflictos con la ley penal. Este último dato pone en evidencia los efectos negativos del antiguo sistema.

Según las cifras del sistema penitenciario, el 75 por ciento de la población carcelaria pasó antes por institutos. Entonces, al analizar el proyecto de ley debemos tener muy en cuenta que el 75 por ciento de los que integran las cárceles del país pasaron antes por esas estructuras institucionalizadas. La vieja ley cumplió su fin y la

nueva ley, que hasta ahora tiene el acuerdo de todos los partidos políticos, puede ser un ejemplo para el futuro. Esto es democrático y republicano.

Ahora bien, yo sí entiendo que debe ponerse el acento en que si el defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es retirado de la ley se vuelve al sistema anterior. Esto no es competencia del defensor a nivel nacional, porque el control de los niños requiere de un funcionario con una personalidad determinada y con conocimientos sobre la niñez y sus problemas. En el texto de la ley deben figurar las facultades que se le otorgan al defensor, porque ése es el único modo en que los niños puedan tener garantías para el futuro.

Asimismo, destaco otro aspecto: si bien los tiempos han provocado que el 75 por ciento de los encarcelados hayan pasado por distintas instituciones, hoy la situación es más grave. Hay unidades descontroladas donde se producen violaciones, vejámenes y otro tipo de acciones inconvenientes. Pero lo más doloroso es que dentro de ese 75 por ciento no están los hijos de ricos ni de pudientes, sino que están aquellos que desde su nacimiento no han encontrado otra solución.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires Antonio Cafiero.

Sr. Cafiero. – Señor presidente: voy a pedir la inserción de las pocas líneas que he redactado con motivo del tratamiento de este proyecto de ley, no obstante lo cual no me quiero privar de manifestar brevemente dos o tres conceptos, porque quiero asumir junto con todo el cuerpo el valor histórico de esta iniciativa, no sólo por sus fundamentos o su contenido sino también por su instrumentación y por su forma.

Esto último también es importante para la vida de las instituciones. Todos hemos trabajado y lo hemos hecho bien. Es más. No sólo trabajamos los senadores sino todo el cuerpo, aun desde sus escalas menos trascendentes.

En definitiva, todos aportamos para la sanción del proyecto de ley que se votará en breve.

Quería referirme por último a que la mentada Constitución de 1853, de la que todos nos enorgullecemos regularmente, fue una norma que sólo contenía a hombres blancos, adultos y propietarios. Las mujeres, los indígenas, los po-

bres y los niños estaban excluidos de las prescripciones de la Constitución de 1853.

Sr. Mayans. – Pero se elaboró la Constitución del 49.

Sr. Cafiero. – Sí, pero la del 49 rigió solamente durante un breve lapso. Aunque es cierto que intentó corregir sin éxito aquellas faltas.

Recién ahora, con esta norma que va a sancionarse, se empezará a cerrar el circuito e incorporar en la Constitución a las mujeres, los indígenas, los negros –si es que los hay–, y seguramente es así...

Sr. Menem. – Los hay, ¿pero negros? (*Risas.*)

Sr. Cafiero. – Bueno... Pero usted le da a la palabra “negros” una acepción muy especial. Está bien, son afrodescendientes.

No vaya a ser que aparezca cuestionado en el INADI por una suerte de proceso de discriminación. Niego cualquier interpretación peyorativa de la palabra que acabo de decir. Repito: descendientes de afroasiáticos.

Al votar el proyecto de ley en consideración no sólo se cumple con un precepto constitucional sino también se abre el camino hacia la ciudadanía plena; esa que hoy, a más de ciento y pico de años de 1853, sigue siendo careciente en la práctica en la legislación y en las instituciones que conforman la sociedad actual.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Salvatori.

Sr. Salvatori. – Señor presidente: el proyecto de ley en consideración, como ya se ha manifestado, ha sido extensamente debatido, tratado y analizado, todo lo cual permitió llegar a acuerdos y consensos que destacan la eficaz labor que ha realizado la comisión.

En nombre del Interbloque Federal de Partidos Provinciales, y en aras del tiempo y del quórum, y según lo pedido por la presidenta de la comisión, solicito la inserción de las exposiciones que íbamos a realizar sobre este asunto.

Quiero destacar que durante el análisis del proyecto se sucedieron incidentes muy graves protagonizados por menores, como el de Carmen de Patagones. Esto refuerza la idea de que hay que abocarse a la sanción de una norma como la presente porque la violencia siempre es el detonante de una situación de malestar que está en la sociedad en general.

Bien se dice que el clima inseguro, las relaciones familiares con carencia de afecto y de estabilidad y el ambiente agresivo, que es lo que caracteriza a nuestro mundo globalizado, son difícilmente soportados por el sector más vulnerable, que son los niños y los adolescentes. Ello está vinculado con familias alteradas, barrios carecientes y desorganizados, adolescentes involucrados en drogas y alcohol, entre otros motivos.

Compartimos el proyecto en consideración y lo votaremos por la afirmativa, a pesar de tener algunas disidencias que entendemos pierden identidad ante la necesidad de contar con la norma.

Por estas razones, reiteramos la inserción en el Diario de Sesiones de las exposiciones de nuestro bloque.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Lescano.

Sra. Lescano. – Señor presidente: quiero expresar mi beneplácito por el tratamiento del proyecto de ley y solicitar autorización para insertar en el Diario de Sesiones dos observaciones que he acercado a la mesa.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Perceval.

Sra. Perceval. – Señor presidente: seré muy breve.

Simplemente, quiero decir que la palabra “minoridad” no siempre existió, sino que se creó para definir una realidad que se cristalizó en instituciones de minoridad a fines del siglo XIX, cuando se instituyeron dos infancias: la de los niños propiamente dichos, con posiciones de sujeto con pertenencia a una familia legítima –como se definía– y al sistema de educación pública; y la de los otros, los menores, que son aquellos sujetos objeto carentes de familia y de recursos y que están en situación de desamparo moral y, por ende, pupilos del Estado.

Creo que esto es lo que hoy estamos reconstruyendo, criticando y modificando, en función de palabras con fuertes cargas ideológicas y visiones éticas que construyeron y constituyeron realidades. Esas realidades conformaron instituciones y un modo de funcionamiento del Estado con respecto a los niños, a las niñas y a los adolescentes.

Quiero remarcar que la categoría del menor fue forjada en un circuito y con una denomina-

ción y tutela que determinó que esos sujetos sociales quedaran inhibidos en su acceso a otros territorios de la sociedad: la educación, la cultura y la familia, es decir, a los derechos ciudadanos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y lejos de pensarse en ellos como seres en desarrollo, eran vistos como excluidos de la sociedad, sea porque eran peligrosos o porque estaban en peligro, dos situaciones que terminaron neutralizándose.

Así pues, en los institutos de menores encontramos a aquellos que han estado en situación de conflicto con la ley penal como a aquellos que están internados por causas asistenciales, siendo necesario destacar que más del 90 por ciento se encuentra allí por causas asistenciales, es decir, porque es pobre.

Esta realidad, indudablemente, se incrementó a partir del complejo sistema jurídico, como señalaron algunos senadores y senadoras que me precedieron en el uso de la palabra, a través de la judicialización del menor, es decir, del otro que es niño. Y realmente, buscando una definición de esos institutos, hay que mencionar la de Donzelot, una gran estudiosa del tema de las familias, quien los definió como esos lugares de concentración de infortunados, de míseros y de desgraciados. Esa fue la visión ideológica y ética que fundó la ley de patronato.

Contradictoria y esquizofrénicamente —en términos de la salud mental de las instituciones—, pasó luego a rango constitucional a través de la Convención de los Derechos del Niño, mientras que por otra parte, para tratar a los otros —a los otros que no son niños, a los menores— regía la ley de patronato.

En ese aspecto, retomo lo expuesto por el senador Massoni, porque si no bastara mirar de otro modo la ética social, las instituciones democráticas y la “convivencialidad” que nos merecemos en el marco de los derechos humanos, podríamos analizar esto desde la lógica del éxito o del fracaso. Y al respecto, son muy importantes los datos brindados por el señor senador Massoni, porque si bien podemos decir que existen jóvenes que logran alcanzar nuevas situaciones de integración social, el alto porcentaje de adultos que ocupa las cárceles con antecedentes en establecimientos de minoridad parece desmentir los ideales institucionales con que imprimía en la huella de la subjetividad un

niño, una niña o un joven la pertenencia a la categoría de menor.

Para ello, basta mencionar las estadísticas oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de 2000. De ellas surge que 7 de cada 10 delincuentes adultos han pasado en su juventud por uno o más de los institutos de menores.

Por lo tanto, resulta atinado considerar que este pasaje a la institucionalización, más que puentes eran “tornos”, corredores circulares por los que el aislamiento y la privación afectiva y de derechos se conjugaban y se conjugan con la construcción de un destino predeterminado. Minorizar es construir un niño, una niña o un adolescente degradado.

Al respecto, en este momento se está haciendo el cierre del encuentro regional del UNICEF, del cual hemos participado. Quiero hacer llegar la expectativa, por cierto favorable, que había en dicho encuentro sobre lo que hoy estamos debatiendo en el Senado: dejar atrás la ley Agote.

En el marco de esta consulta regional sobre violencia contra niños y niñas organizada por el UNICEF, recién el 31 de mayo, el doctor Mondino, defensor general de la Nación, reconoció y explicitó que actualmente en nuestro país existen más de 16 mil niños y niñas institucionalizados.

En su momento, desde las comisiones que trabajaban plenariamente, contándose con la participación de los responsables de las áreas de niños, niñas y adolescentes de las diversas provincias, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, doctor Juan Pablo Cafiero, decía que en 2004 podían reiterarse aquellas cifras que puso en evidencia un estudio del CELS y UNICEF en diciembre de 2003. Dicho informe señalaba que al 31 de diciembre de 2000 se encontraban privados de la libertad 10.423 niños, niñas y adolescentes. Pero de ese total, 8.601 niños, niñas y adolescentes estaban en esa situación por motivos asistenciales y 1.820, por motivos penales.

Y para no quedar fuera de la responsabilidad que tengo como representante de la provincia de Mendoza, quiero decir que esta cuestión también pega en mi provincia.

En Mendoza, que cuenta con una población penitenciaria de entre 2.400 y 2.500 internos, se

da la triste situación –de constatación empírica– de que se calcula que más del 65 por ciento de esta población penitenciaria –a pesar de que mi provincia tiene la Ley de Derechos del Niño desde hace años– pasó por institutos de menores durante su infancia y adolescencia.

Por ello, constatamos que la persistencia del modelo de tutelación en términos de internación, y el consecuente desmembramiento familiar y social, resulta una característica destacable y responde a esa lógica custodial que persistía hasta hoy en los organismos estatales con la ley de patronato.

Nos hemos preguntado –recién lo comentábamos– y lo explicaba con claridad la senadora Leguizamón: ¿cambia la realidad concreta y cotidiana de los niños, las niñas y los adolescentes esta ley?

Si bien sabemos que la pobreza infantil se ha reducido en nuestro país entre la primera y la segunda mitad de 2004 en cerca de 400 mil chicos, también conocemos que la pobreza castiga a casi el 58 por ciento de los niños menores de catorce años, y al 55 por ciento de las niñas.

Por eso, creo que ni ingenuidad ni falsas expectativas. Esta ley no cambiará mágicamente la realidad. Pero sin duda, esta norma transformará la perspectiva desde donde no sólo este Congreso de la Nación, sino también el Poder Ejecutivo –que ha hecho de la defensa de los derechos humanos un eje transversal a todas las políticas públicas de Estado– tomarán las decisiones y definiciones de políticas públicas integrales para la infancia y la adolescencia.

Y no es menor mirar de otra manera. No es menor dejar de decirles “menores” a esos niños que perdieron su condición de sujetos para pasar a ser objeto de patronato.

Sr. Presidente. – Queda cerrado el debate.

En consideración los pedidos de inserción solicitados.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Sra. Caparrós. – Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la inserción solicitada por la señora senadora por Tierra del Fuego.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la inserción.

Tiene la palabra la senadora por Córdoba.

Sra. Giri. – En el mismo sentido, solicito autorización para insertar mi discurso.

Sr. Presidente. – ¿Usted, senadora Gallego?

Sra. Gallego. – También, señor presidente.

Sr. Presidente. – ¿Senadora Latorre?

Sra. Latorre. – También.

Sr. Presidente. – Entonces, si no se hace uso de la palabra, se van a votar la inserciones solicitadas por las señoras senadoras Latorre, Giri y Gallego.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las inserciones solicitadas.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el Orden del Día N° 117.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran 54 votos por la afirmativa: unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta N° 2.¹

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

En consideración en particular.

Tiene la palabra la senadora por San Luis, Negre de Alonso, presidenta de la comisión.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: dije que había un error –ya lo mencioné– en dos títulos.

Existe un error material en el artículo 31. Donde dice “decepcionar” debe figurar “repcionar” denuncias.

Quiero pedir formalmente que se vote por título, porque la comisión no acepta ningún tipo de modificación a este proyecto consensuado.

Además, solicito que aquellos que tienen disidencias en particular procedan a su inserción. Hemos distribuido todas las modificaciones, que obran en la Secretaría. Eso es lo que vamos a someter a votación.

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – ¿Usted propone que se voten cada uno de los seis títulos?

Sra. Negre de Alonso. – Exactamente, señor presidente.

Sr. Presidente. – Entonces, vamos a comenzar por el título I, artículos 1° a 7°.

Sr. Morales. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales, por la provincia de Jujuy.

Sr. Morales. – Me parece que en el debate en particular tienen que quedar claras cuáles son las diferencias que tenemos...

Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: creo que...

Sr. Morales. – Estoy yo en el uso de la palabra; estoy hablando yo.

Me parece que algunas observaciones en particular tienen que ser planteadas. No vamos a dilatar más el debate.

Por otro lado, se trata de una ley que es central; me parece que nos podemos tomar algún tiempito más. No sé quién de acá puede tener apuro por irse un poco más rápido. Podemos dejar planteadas en particular las observaciones título por título, brevemente. Después, insertaremos todo lo que haya que insertar, pero queremos dejar nuestras diferencias en claro.

Sr. Presidente. – Quedó cerrado el debate y votamos en general. Ahora, votaremos por título. Si quieren plantear diferencias, háganlo; pero ya la senadora ha aclarado que no van a aceptar ninguna modificación.

Sr. Morales. – Está bien; no hay problema.

Sr. Presidente. – Entonces, comenzamos por el título I, artículos 1° a 7°.

–Se enuncia el título I, artículos 1° a 7°.

Sr. Morales. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: en el título I tenemos dos observaciones que realizar respecto del artículo 3°. En consecuencia, queremos dejar constancia de nuestro voto negativo respecto del artículo 3° si no son acogidas las observaciones que planteamos.

Planteamos la modificación del inciso f) de la siguiente manera: en lugar de la expresión “su centro de vida” proponemos que diga “su residencia habitual”, entendiéndose por ésta el centro de vida, es decir, el lugar donde los niños, niñas y adolescentes se desarrollan en condiciones de estabilidad y permanencia. De manera tal de no modificar –quiero argumentar brevemente este planteo– lo que ya la ley 23.857 ha establecido, cuando ratifica la Convención Internacional de La Haya, que en el artículo 4° define expresamente que el convenio se aplicará a todo menor que haya tenido su residencia habitual en un Estado contratante, inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de vida.

Es decir que no nos parece conveniente la modificación de un concepto que está establecido ya en una convención internacional que ha sido ratificado por una ley, en el que nosotros, a través de un inciso, estamos modificando un criterio que está aceptado internacionalmente, como es el concepto de la residencia habitual. Por eso es que nosotros planteamos la modificación, para estar en línea con lo que ya ha aprobado una propia ley sancionada por este Congreso.

Asimismo, planteamos la eliminación del anteuúltimo párrafo, que dice: “Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada con las anteriores, cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse”. Porque no tiene nada que ver con lo que se está planteando.

Concretamente, planteamos entonces la modificación del inciso f) y la eliminación de este anteuúltimo párrafo del artículo 3°.

En el artículo 5°, si bien se ha modificado el concepto de “órganos gubernamentales del Estado” y nos parece mejor “los organismos del Estado”, sí planteamos que cuando dice “políticas sociales públicas”, se elimine la palabra “sociales”, porque se trata de políticas públicas. Para que no quedemos atrapados o que no haya ningún tipo de confusión con relación al paradigma que estamos dejando, que es el tema del control social por parte del Estado. Porque no se trata de políticas sociales sino públicas, que son mucho más abarcativas con relación a la especificidad que plantean las políticas sociales.

Luego, en el párrafo cuarto, donde dice: “políticas sociales” hay que seguir en línea con lo que plantea el segundo párrafo, que dice: “En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación”. Es decir que en el cuarto párrafo también debíamos decir. “Las políticas públicas...”. Estoy viendo que en el texto que me dejaron sobre la banca –tenemos varias redacciones diferentes–, sigue como está.

Estas son las dos modificaciones que nosotros proponemos. Nada más en el título I.

Le pido, señor presidente, que cuando vayamos título por título, nos dé tiempo para desarrollar.

Sr. Presidente. – Por supuesto; esta Presidencia da la palabra a todos.

Sr. Morales. – Ya sabemos que usted sí, señor presidente.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: seré muy breve.

La senadora Perceval y yo presentamos un proyecto. Coincidimos con las observaciones que hizo el senador Morales y lo dejamos asentado en la versión taquigráfica, con la diferencia de que pese a entender que preferiríamos esa redacción, igualmente, asumiendo el consenso que se logró, vamos a acompañar con nuestro voto. Esto, entendiendo que razonablemente hemos llegado a un consenso común en esto. Pero dejamos constancia de que era la alternativa que queríamos elegir.

Sé que lo de “políticas sociales públicas” es un error material, que va a ser aclarado por la presidenta de la comisión y que, efectivamente, debe decir “políticas públicas”.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pedí la palabra al sólo efecto de acompañar las modificaciones planteadas.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la presidenta de la comisión, senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: se acepta exclusivamente lo referente al artículo 5°. Es decir que donde dice: “las políticas sociales”, debería ir: “las políticas públicas”. Lo demás no se acepta. Ha sido un error material. Eso está en el cuarto párrafo del artículo 5°.

Iría: “las políticas públicas”, en lugar de “las políticas sociales”.

Sra. Perceval. – Primero y cuarto.

Sra. Negre de Alonso. – Primero y cuarto, tiene razón.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Entonces, dejamos planteada la salvedad de nuestro voto negativo en el artículo 3° y votamos afirmativamente todos los artículos restantes del título I.

Sr. Presidente. – Se deja constancia del voto negativo del bloque de la Unión Cívica Radical en el artículo 3°.

Sr. Losada. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. – Una cuestión de tipo práctico, pero también de información.

Me parece que lo más útil, aunque esto nos demore, es que votemos los dos primeros artículos en los que estamos de acuerdo y que el artículo 3° se vote en forma diferenciada, como están planteando, porque si no van a aparecer todos con voto afirmativo y nosotros no vamos a aprobar el artículo 3°.

Sr. Mayans. – Queda aceptada la disidencia.

Sra. Negre de Alonso. – Ha quedado constancia de lo que ha dicho el senador Morales, de la Unión Cívica Radical; se ha adherido el senador Giustiniani y la senadora Ibarra ha dicho que comparte lo expresado por el primero, pero que igualmente acompaña el proyecto. De modo que ha quedado claro quién vota por una cosa y por otra y en qué sentido.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. – Todos sabemos que la obligación es votar artículo por artículo. Esto no es tratar de postergar o demorar. En el tablero tiene que aparecer cómo se votó, si no va a quedar una cuestión confusa: que votamos todos los artículos por unanimidad y no es así. Creo que hace a una cuestión reglamentaria y, además, de conocimiento absoluto de cómo se votó.

Nosotros votamos afirmativamente por los dos primeros artículos; por el 3°, no y después, se vota por capítulo. No queremos confusión de votar el artículo 3° como parte del paquete del capítulo. De ninguna manera.

Sr. Presidente. – Hubo una propuesta de votar por título; si hay consenso en votar por artículo, votamos por artículo.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Habíamos acordado votar por título, dejando constancia de los votos negativos de cada bloque. Al final se puede poner qué votó cada bloque.

Sr. Presidente. – ¿También hay diferencias en otros artículos?

Sr. Losada. – Sí.

Sr. Presidente. – Vamos a votar el título I, dejando constancia respecto del artículo 3°.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. – No; votemos los artículos 1° y 2° y en el artículo 3°, que quede claro cómo ha votado cada senador. No es el bloque, son personas las que están votando. En los artículos 1° y 2° hay coincidencia.

Sr. Presidente. – Vamos a votar entonces los artículos 1° y 2° del título I.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registraron 52 votos por la afirmativa; unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta N° 3.¹

Sr. Presidente. – Continuamos con el artículo 3° del título I.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registraron 34 votos por la afirmativa, 18 votos por la negativa. La votación resulta afirmativa.

–El resultado de la votación surge del acta N° 4.²

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Como la próxima propuesta de modificación es aceptada por la comisión, tendríamos que votar los artículos 4° a 7° todos juntos.

Sr. Presidente. – Corresponde votar los artículos 4°, 5°, 6° y 7° del título I.

Liga cotejada.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Resultan 52 votos por la afirmativa, ninguno negativo.

–El resultado de la votación surge del acta N° 5.¹

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 4°, 5°, 6° y 7° del título I.

En consideración el título II, artículos 8° a 31.

Sr. Morales. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: en el artículo 14 del Orden del Día N° 117, hay un segundo párrafo, cuya redacción dice que toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Y a continuación dice que los médicos están obligados a brindarles la asistencia profesional necesaria, la que no podrá ser negada o evadida por ninguna razón. Este párrafo ha sido excluido y pedimos su incorporación en el artículo 14.

Luego, tenemos otra propuesta con respecto al artículo 22. En realidad, tenemos que hacer dos planteos. Uno es el siguiente. Originalmente figuraba el derecho al honor que, ahora, se ha modificado por el derecho a la dignidad, que ya figura en el artículo 9°. En todo caso, habría que hacer alguna modificación, porque el artículo 9° ya habla de derecho a la dignidad y a la integridad personal. Así tenemos una reiteración de conceptos en los artículos 22 y 9°, que nos parece que la comisión debiera verificar.

Por otro lado, queremos proponer la inclusión de un párrafo que aparecía en el Orden del Día N° 1.197, que suscribimos por unanimidad en septiembre de 2004, y que, a nuestro juicio, es ineludible. Este párrafo, que fuera eliminado

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

¹ Ver el Apéndice.

del dictamen pero que, en el Orden del Día N° 1.197 había sido incorporado por unanimidad, dice que queda expresamente prohibido exponer o divulgar por cualquier medio datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles, salvo autorización judicial en contrario. Este párrafo, repito, fue eliminado y nos parece central que figure, señor presidente. Por eso, en caso de no ser aceptada su inclusión, vamos a votar negativamente este artículo. Esto tiene que ver, justamente, con resguardar los derechos de los niños ante situaciones eventuales de violación o delitos de los que ellos sean sujeto activo o pasivo. Creo que hay que restringir a los medios de comunicación la posibilidad de que informen o publiquen la identidad de los niños, estén en una situación o en otra. Esto tiene que quedar claro en la redacción. Por eso planteamos esta observación con relación al artículo 22.

Luego, nos parece que es acertada la modificación que se ha producido en el artículo 25, que planteaba derecho al trabajo y que ahora habla del derecho al trabajo de los adolescentes. Hubiéramos preferido otra redacción pero, en verdad, en orden a la voluntad de acuerdo, no tenemos ningún problema en acompañarlo.

Con respecto al artículo 26, queremos dejar constancia de algo que está en línea con algunos proyectos que se están debatiendo. Incluso el senador Antonio Cafiero ha presentado una iniciativa y se conformado una comisión para discutir sobre la cuestión del establecimiento de un seguro social.

El Orden del Día N° 117 planteaba lo siguiente: “Los organismos del Estado deberán establecer un seguro social de inclusión para las niñas, niños y adolescentes que considere los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento”. Nos parece que ése es el piso de inclusión que garantiza el principio de la universalidad y que, justamente, ratifica un derecho para los niños como es el de un seguro social de inclusión de carácter general.

La cuestión de las políticas y programas de inclusión es inherente a los organismos del Estado, y nuestro planteo no está en contra. La cuestión de políticas y programas de inclusión

por parte de todas las jurisdicciones de todos los ministerios constituye una facultad que viene de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, y sobre lo cual tiene plenas facultades de implementación.

Esta ley debe dejar en claro cuáles son los derechos, y el tema del derecho a un seguro social de inclusión tiene carácter universal, por lo cual entendemos que esta modificación no es buena, porque nos vuelve a llevar a particularizar las medidas a través de las cuales vamos a establecer políticas para la infancia. Y éste es el piso mínimo que ya deberíamos tratar de insinuar desde la aprobación de esta norma, lo cual está en línea con las cuestiones en tratamiento en la Comisión de Población y Desarrollo Humano. En consecuencia, también hacemos una objeción al artículo 26 y reiteramos el texto contenido en el Orden del Día N° 117.

En síntesis, las observaciones se hacen a los artículos 14, 22, 25 y 26.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Ibarra, luego el señor senador Giustiniani y finalmente la presidenta de la comisión.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: respecto de los artículos 11 y 22, la senadora Perceval y quien les habla, como autoras del proyecto, vamos a pedir la inserción de la propuesta alternativa que presentáramos, sin perjuicio de acompañar los textos. Entendemos que son cuestiones de redacción que habrían mejorado el texto actual.

Respecto del artículo 14, quiero dejar constancia de que hubiésemos querido que quedara el párrafo en el cual era exigida la asistencia médica a las niñas, niños y adolescentes, que fue eliminado. Vamos a acompañar este artículo pero también vamos a insertar los fundamentos de nuestra propuesta.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Nuestra propuesta es la de incorporar dos artículos contenidos en uno de los despachos en minoría respecto a lo tratado en la Cámara de Diputados. El primero de ellos, cuya incorporación propongo, se refiere al derecho a la salud sexual y reproductiva, y dice lo siguiente: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados y educados, de acuerdo a su desarrollo, en salud sexual

y reproductiva para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos”.

El otro artículo dice lo siguiente: “El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar servicios y programas de atención de salud sexual y reproductiva a todos los niños, niñas y adolescentes. Estos servicios y programas deben ser gratuitos, confidenciales, resguardar el derecho a la vida privada de los niños, niñas y adolescentes y respetar su libre consentimiento, basado en una información oportuna y veraz. Los adolescentes tienen derecho a solicitar y recibir estos servicios por sí mismos”.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cafiero.

Sr. Cafiero. – Señor presidente: con relación al artículo 26 comparto totalmente las expresiones del señor senador Morales, de la Unión Cívica Radical y, además, quiero dejar constancia de que esta preocupación es común a todos los partidos que participan en la Comisión de Población y Desarrollo Humano. En consecuencia, le solicito a la señora presidenta de la comisión que atienda esta sugerencia que está en total línea con lo que se ha venido tratando y acordando en materia de seguro social infantil.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la presidenta de la comisión.

Sra. Negre de Alonso. – La comisión no acepta las modificaciones.

Sr. Presidente. – ¿Se va a votar artículo por artículo o todos juntos?

Sr. Mayans. – Por separado los artículos en los que haya disidencia.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – En caso de no haber sido aceptadas las modificaciones que propusimos, nosotros votamos en contra los artículos 14, 22 y 26. Pido que se voten en forma separada esos artículos y los otros en forma conjunta.

Sr. Presidente. – Esos artículos se van a votar en forma separada.

Se van a votar primero los artículos 8º al 13 del título II.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51 votos afirmativos: unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta N° 6.¹

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
Se van a votar el artículo 14 del título II.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 31 votos afirmativos y 20 votos negativos.

–El resultado de la votación surge del acta N° 7.²

Sr. Presidente. – Aprobados.
Se van a votar en conjunto los artículos 15 a 21 del título II.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51 votos afirmativos: unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta N° 8.³

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
Se va a votar el artículo 22 del título II.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 31 votos afirmativos y 20 votos negativos.

–El resultado de la votación surge del acta N° 9.⁴

Sr. Presidente. – Aprobados.
Se van a votar los artículos 23, 24 y 25.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Señora senadora Mazza: ¿podría manifestar su voto de viva voz?

Sra. Mazza. – Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 50 votos afirmativos y 1 negativo, entonces.

–El resultado de la votación surge del acta N° 10.⁵

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

⁴ Ver el Apéndice.

⁵ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo 26.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 30 votos afirmativos y 21 negativos.

–El resultado de la votación surge del acta N° 11.¹

Sr. Presidente. – Se van a votar los artículos 27 a 31.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Señora senadora Curletti: ¿podría manifestar su voto de viva voz?

Sra. Curletti. – Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 51 votos afirmativos: unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta N° 12.²

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el título III, artículos 32 a 41.

Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros tenemos una observación con relación al artículo 37, porque observo que el artículo 40 ya ha sido modificado.

Ahora bien, me parece que la cuestión del artículo 37 es central, conforme a lo que hemos dicho en la exposición en general. El texto del Orden del Día N° 117 plantea lo siguiente en las medidas de protección: “Comprobada la amenaza o violación de derechos deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas...”. Pero después apareció un texto en el que se hablaba de “...podrán adoptarse...”. Ahora el texto que tenemos sobre nuestras bancas dice lo siguiente: “...deberán adoptarse de acuerdo a criterios ciertos y objetivos...”, que es más o menos lo mismo que decir “podrán”. Porque al decir “...deberán adoptarse de acuerdo a criterios ciertos y objetivos...” se vuelve a otorgar la facultad discrecional y ahí está la línea que no podemos trasvasar porque, de lo contrario, se habilita a un juez a que inmediatamente aplique las medidas excepcionales y judicialice la cuestión.

Entonces, entiendo que debe volverse a la redacción del Orden del Día N° 117 y dejar “...deben [lisa y llanamente] adoptarse, entre otras, las siguientes medidas...”.

Me parece que es la médula de la cuestión.

Sra. Negre de Alonso. – La comisión va a aceptar la propuesta del señor senador Morales.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: en el artículo 40, segundo párrafo, donde dice “... al juez competente en materia de familia...” debe decir “... a la autoridad judicial competente...” porque hay algunos distritos que tienen fiscales y no jueces.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – La comisión aceptará la modificación propuesta por la señora senadora Ibarra.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el título III, artículos 32 a 41.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49 votos afirmativos: unanimidad. Se han superado los dos tercios.

–El resultado de la votación surge del acta N° 13.¹

Sr. Presidente. – Queda aprobado el título III.

En consideración el título IV, artículos 42 a 68.

Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: sin perjuicio de que hay un error de redacción, que está claro, porque en el capítulo I del título IV donde debe decir “Secretaría Nacional” dice “Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia”, lo que quiero puntualizar es que la estructura del Orden del Día N° 117, con el objetivo de evitar la centralidad del esquema de patronato y de la actual definición de política en materia de infancia, es la correcta y la que debería tenerse en cuenta. Habíamos planteado la creación del Consejo Federal, que es la primera instancia en la definición de política. Si bien en la redacción original se preveía que el Consejo

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

¹ Ver el Apéndice.

debería estar integrado por un representante de cada uno de los ministerios con competencia en la materia y por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, cuyo orden se ha modificado porque se pone en primer lugar a la Secretaría y luego al Consejo, hay otro cambio sustancial en cuanto a que es la Secretaría la que garantizará la interjurisdiccionalidad, cuando en realidad, el ámbito donde debe garantizarse la interjurisdiccionalidad y el debate interdisciplinario es del Consejo Federal, que es el encargado de definir políticas.

La Secretaría pasa a ser, en representación del Poder Ejecutivo nacional, el organismo de aplicación de política definida por el Consejo Federal, así como las jurisdicciones provinciales, en cumplimiento de los programas, deben llevar adelante las políticas definidas por el Consejo Federal.

En consecuencia, hay dos modificaciones. Una de orden, donde se establece un rango de prioridad a la Secretaría, no compartido por nosotros; y otra sustantiva, vinculada con la facultad que debe poseer el Consejo sobre la interjurisdiccionalidad y el trabajo interdisciplinario.

Estas son nuestras observaciones y de ahí que sugerimos respetar el esquema previsto en el Orden del Día N° 117. Si esta sugerencia no es aceptada, votaremos negativamente el capítulo porque se aparta de la lógica que hemos debatido en la comisión y desdibuja el principio de la federalidad. Esto no solamente debe ser planteado por los organismos nacionales, sino fundamentalmente por los actores, por los ejecutores de las políticas: el gobierno nacional, las provincias y también, en alguna medida, las autoridades locales que adhieran o acuerden con las autoridades provinciales.

Por esa razón, si no se aceptara la redacción que proponemos al respecto, vamos a votar en contra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: seré muy breve.

Efectivamente, hemos trabajado mucho para llegar al texto que se encuentra en consideración. En la Secretaría existe un ámbito interministerial, que es lo que corresponde en el ámbito del Poder Ejecutivo; y en el Consejo Federal es interjurisdiccional. No tendría sentido que se

agregara, además, el ámbito interministerial, que por otra parte existe en el Consejo Social. Creo que hemos llegado a un punto en el cual las jurisdicciones trabajarán bien, en coordinación con el Poder Ejecutivo, que va a tener su ámbito interministerial. Esto va a permitir la implementación de las políticas que estamos buscando.

Hemos avanzado en este proceso y es posible la aplicación de esta ley. Estamos ante un consenso valioso y en este sentido creo que corresponde dejar la redacción tal como ha sido propuesta.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – La comisión no acepta modificaciones.

Sr. Presidente. – En consecuencia, se va a votar el título IV, artículo 42. Antes de ello, pido a la señora senadora Giri que consigne su voto en la votación anterior, a viva voz...

Sra. Giri. – Afirmativo.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: pido que pasemos a un breve cuarto intermedio, con permanencia en las bancas.

Sr. Presidente. – En consideración el pedido de pase a cuarto intermedio.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se pasa a un breve cuarto intermedio.

–Son las 19 y 37.

–A las 19 y 39:

Sr. Presidente. – Se reanuda la sesión.

Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: pido que pasemos a la votación.

Sr. Presidente. – En consideración el título IV, artículo 42.

Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: como este título es central en lo que respecta al proyecto, más allá de mantener nuestras diferencias con la redacción propuesta, no vamos a poner en riesgo los dos tercios que se necesitan (*Aplausos*) para confirmar este debate en la Cámara de Diputados.

En consecuencia, sin perjuicio de mantener nuestras observaciones, retiramos nuestra decisión de votar en contra ante la negativa manifestada a aceptar nuestras modificaciones. Hacemos esto en una muestra más de la actitud democrática del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora por Salta, Sonia Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: en virtud de la actitud del bloque de la Unión Cívica Radical, solicito que se vote en bloque el resto del articulado del proyecto de ley.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: también compartimos la modificación relacionada con el patrimonio y la transferencia del artículo 70.

Por lo tanto, estaríamos en condiciones de votar desde el artículo 42 hasta el final.

Sr. Presidente. – Pasamos a votar entonces del artículo 42 al 77.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se obtuvieron 48 votos por la afirmativa, unanimidad. Se superaron los dos tercios.

Sr. Presidente. – El artículo 78 es de forma.

–El resultado de la votación surge del acta N° 14.¹

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría deja consignado para que conste en el Diario de Sesiones y en la comunicación a la Cámara de Diputados que en los artículos 3°, 14, 22 y 26 no se alcanzaron los dos tercios requeridos por la Constitución Nacional.

¹ Ver el Apéndice.

Votación Nominal

123° Período Legislativo - Ordinario - 9° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)

VOTACION EN GENERAL

Observaciones: Art. 81 Constitución Nacional

Acta N°: 2

Fecha: 1-06-2005

Hora:18:58:01

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los
miembros del cuerpoMayoría Requerida: mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI, Daniel O.

Desempate: NO

Presentes Identificados: 54

Presentes No Identificados: -

Total Presentes: 54

Ausentes: 18

Votos Afirmativos Necesarios: 28

Votos afirmativos: 54

Votos Negativos: -

Abstenciones: -

**RESULTADO de la
VOTACIÓN****AFIRMATIVA**

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)

VOTACION EN GENERAL

Observaciones: Art. 81 Constitución Nacional

Acta N°: 2

Fecha: 1-06-2005

Hora: 18:58:01

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI, Daniel O.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AFIRMATIVO	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AUSENTE	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, Maria Elisa	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AUSENTE	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AUSENTE	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIDEO, Mercedes Margarita	AUSENTE
FALCO, Luis Alberto	AFIRMATIVO	PAZ, Elva Azucena	AUSENTE
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AFIRMATIVO	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, Maria Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz Maria	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AUSENTE
M. PASS de CRESTO, Laura	AUSENTE		AUSENTE

Votación Nominal

123° Período Legislativo - Ordinario - 9° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título I - Artículos 1º Y 2ºObservaciones: con modificaciones.
Art. 81 Constitucion Nacional

Acta N°: 3	Fecha: 1-06-2005	Hora:19:09:53
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI, Daniel O.	Desempate: NO	

Presentes Identificados: 52

Presentes No Identificados: -

Total Presentes: 52

Ausentes: 20

Votos Afirmativos Necesarios: 27

Votos afirmativos: 52

Votos Negativos: -

Abstenciones: -

RESULTADO de la
VOTACIÓN **AFIRMATIVA**

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Titulo I - Artículos 1º Y 2º

Observaciones: con modificaciones.

Art. 81 Constitucion Nacional

Acta N°: 3

Fecha: 1-06-2005

Hora: 19:09:53

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI, Daniel O.

Desempeate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AUSENTE	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, Maria Elisa	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AUSENTE	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AUSENTE
FALCO, Luis Alberto	AFIRMATIVO	PAZ, Elva Azucena	AUSENTE
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AFIRMATIVO	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AFIRMATIVO	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, Maria Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz Maria	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, Maria Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALLIA, José Luis	AUSENTE
M. PASS de CRESTO, Laura	AUSENTE		AUSENTE

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESORDEN DEL DIA 117(CD-65/04)

VOTACIÓN EN PARTICULAR

Título I - Artículo 3º

Observaciones: Art. 81 Constitución Nacional

Acta Nº: 4

Fecha: 1-06-2005

Hora:19:10:50

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los
miembros del cuerpoMayoría Requerida: mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI, Daniel O.

Desempate: NO

Presentes Identificados: 52

Presentes No Identificados: -

Total Presentes: 52

Ausentes: 20

Votos Afirmativos Necesarios: 27

Votos afirmativos: 34

Votos Negativos: 18

Abstenciones: -

**RESULTADO de la
VOTACIÓN****AFIRMATIVA**

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACIÓN EN PARTICULAR
Título I - Artículo 3º

Observaciones: Art. 81 Constitución Nacional

Acta Nº: 4

Fecha: 1-06-2005

Hora: 19:10:50

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI, Daniel O.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	NEGATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	NEGATIVO	MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AUSENTE	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	NEGATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	NEGATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	NEGATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	NEGATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	NEGATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	NEGATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AUSENTE	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIDEO, Mercedes Margarita	AUSENTE
FALCO, Luis Alberto	AFIRMATIVO	PAZ, Elva Azucena	AUSENTE
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AFIRMATIVO	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AFIRMATIVO	PRADES, Carlos Alfonso	NEGATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	NEGATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	NEGATIVO	SANCHEZ, Maria Dora	NEGATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	NEGATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	NEGATIVO
LEGUIZAMON, Maria Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	NEGATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	NEGATIVO	ZAVALIA, José Luis	AUSENTE
M. PASS de CRESTO, Laura	AUSENTE		AUSENTE

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESORDEN DEL DIA 117(CD-65/04)

VOTACION EN PARTICULAR

Título I - Artículos 4º a 7º

Observaciones: con modificaciones.

Art. 81 Constitución Nacional

Acta Nº: 5

Fecha: 1-06-2005

Hora:19:11:32

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los
miembros del cuerpoMayoría Requerida: mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI, Daniel O.

Desempate: NO

Presentes Identificados: 52

Votos afirmativos: 52

Presentes No Identificados: -

Votos Negativos: -

Total Presentes: 52

Abstenciones: -

Ausentes: 20

Votos Afirmativos Necesarios: 27

**RESULTADO de la
VOTACIÓN AFIRMATIVA**

Votación Nominal

123° Período Legislativo - Ordinario - 9ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título I - Artículos 4º a 7º

Observaciones: con modificaciones.

Art. 81 Constitución Nacional

Acta Nº: 5

Fecha: 1-06-2005

Hora: 19:11:32

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI, Daniel O.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AUSENTE	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, Maria Elisa	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AUSENTE	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIDEO, Mercedes Margarita	AUSENTE
FALCO, Luis Alberto	AFIRMATIVO	PAZ, Elva Azucena	AUSENTE
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AFIRMATIVO	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AFIRMATIVO	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, Maria Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz Maria	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, Maria Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AUSENTE
M. PASS de CRESTO, Laura	AUSENTE		AUSENTE

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título II - Artículos 8º a 13ºObservaciones: con modificaciones.
Art. 81 Constitucion Nacional

Acta N°: 6	Fecha: 1-06-2005	Hora:19:22:43
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI, Daniel O.	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	51	Votos afirmativos:	51
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	51	Abstenciones:	-
Ausentes:	21		
Votos Afirmativos Necesarios:	26	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título II - Artículos 8º a 13º

Observaciones: con modificaciones.

Art. 81 Constitución Nacional

Acta Nº: 6

Fecha: 1-06-2005

Hora: 19:22:43

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI, Daniel O.

Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AUSENTE	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, Maria Elisa	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Minam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AUSENTE	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AUSENTE
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AUSENTE
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AFIRMATIVO	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, Maria Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz Maria	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, Maria Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AUSENTE		AUSENTE

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título II – Artículo 14ºObservaciones: con modificaciones.
Art. 81 Constitución Nacional

Acta N°: 7	Fecha: 1-06-2005	Hora:19:23:36
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI, Daniel O.	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	51	Votos afirmativos:	31
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	20
Total Presentes:	51	Abstenciones:	-
Ausentes:	21		
Votos Afirmativos Necesarios:	26	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

123° Período Legislativo - Ordinario - 9° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título II – Artículo 14ºObservaciones: con modificaciones.
Art. 81 Constitución Nacional

Acta Nº: 7

Fecha: 1-06-2005

Hora:19:23:36

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI, Daniel O.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	NEGATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	NEGATIVO	MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AUSENTE	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	NEGATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	NEGATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	NEGATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, Maria Elisa	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	NEGATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	NEGATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Minam Belén	NEGATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AUSENTE	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AUSENTE
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AUSENTE
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AFIRMATIVO	PRADES, Carlos Alfonso	NEGATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	NEGATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	NEGATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	NEGATIVO	SANCHEZ, Maria Dora	NEGATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	NEGATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	NEGATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	NEGATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	NEGATIVO	ZAVALIA, José Luis	NEGATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AUSENTE		AUSENTE

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título II - Artículos 15º a 21ºObservaciones: con modificaciones.
Art. 81 Constitucion Nacional

Acta N°: 8	Fecha: 1-06-2005	Hora:19:24:21
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI, Daniel O.	Desempate: NO	

Presentes Identificados: 51

Presentes No Identificados: -

Total Presentes: 51

Ausentes: 21

Votos Afirmativos Necesarios: 26

Votos afirmativos: 51

Votos Negativos: -

Abstenciones: -

RESULTADO de la
VOTACIÓN **AFIRMATIVA**

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título II - Artículos 15º a 21º

Observaciones: con modificaciones.

Art. 81 Constitución Nacional

Acta N°: 8

Fecha: 1-06-2005

Hora: 19:24:21

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI, Daniel O.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AUSENTE	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AUSENTE	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AUSENTE
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AUSENTE
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AFIRMATIVO	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AUSENTE		AUSENTE

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título II - Artículo 22ºObservaciones: con modificaciones.
Art. 81 Constitución Nacional

Acta N°: 9	Fecha: 1-06-2005	Hora:19:25:15
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI, Daniel O.	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	51	Votos afirmativos:	31
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	20
Total Presentes:	51	Abstenciones:	-
Ausentes:	21		
Votos Afirmativos Necesarios:	26	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título II - Artículo 22º

Observaciones: con modificaciones.

Art. 81 Constitución Nacional

Acta Nº: 9

Fecha: 1-06-2005

Hora:19:25:15

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI, Daniel O.

Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	NEGATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	NEGATIVO	MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AUSENTE	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	NEGATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	NEGATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	NEGATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, Maria Elisa	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	NEGATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	NEGATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	NEGATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AUSENTE	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDEIRO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AUSENTE
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AUSENTE
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AFIRMATIVO	PRADES, Carlos Alfonso	NEGATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	NEGATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	NEGATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	NEGATIVO	SANCHEZ, María Dora	NEGATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	NEGATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	NEGATIVO
LEGUIZAMON, Maria Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	NEGATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	NEGATIVO	ZAVALIA, José Luis	NEGATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AUSENTE		AUSENTE

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Titulo II - Artículos 23º a 25º

Observaciones: con modificaciones.

Art. 81 Constitución Nacional

Acta N°: 10

Fecha: 1-06-2005

Hora:19:26:27

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los
miembros del cuerpoMayoría Requerida: mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI, Daniel O.

Desempate: NO

Presentes Identificados:	50
Presentes No Identificados:	-
Total Presentes:	50
Ausentes:	22
Votos Afirmativos Necesarios:	26

Votos afirmativos:	49
Votos Negativos:	1
Abstenciones:	-

**RESULTADO de la
VOTACIÓN AFIRMATIVA***Informe de auditoria de modificaciones*

	Versión Original	Actual
MAZA, Ada Mercedes	AUSENTE	AFIRMATIVO

Observaciones:

La Senadora Maza manifiesta a viva voz su voto afirmativo.

Modificaciones realizadas el 1/06/05

Presentes Identificados:	50
Presentes No Identificados:	1
Total Presentes:	51
Ausentes:	21
Votos Afirmativos Necesarios:	26

Votos afirmativos:	50
Votos Negativos:	1
Abstenciones:	

**RESULTADO de la
VOTACIÓN AFIRMATIVA**

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título II - Artículos 23º a 25ºObservaciones: con modificaciones.
Art. 81 Constitución Nacional

Acta Nº: 10

Fecha: 1-06-2005

Hora: 19:26:27

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI, Daniel O.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AUSENTE	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	LEV.VOT
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, Maria Elisa	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AUSENTE	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUADERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AUSENTE
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AUSENTE
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AFIRMATIVO	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	NEGATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, Maria Dora	AFIRMATIVO
JAUQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz Maria	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, Maria Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALLIA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AUSENTE		AUSENTE

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título II – Artículo 26ºObservaciones: con modificaciones.
Art. 81 Constitución Nacional

Acta Nº: 11	Fecha: 1-06-2005	Hora: 19:27:38
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI, Daniel O.	Desempate: NO	

Presentes Identificados: 51

Presentes No Identificados: -

Total Presentes: 51

Ausentes: 21

Votos Afirmativos Necesarios: 26

Votos afirmativos: 30

Votos Negativos: 21

Abstenciones: -

RESULTADO de la
VOTACIÓN **AFIRMATIVA**

Votación Nominal

123° Período Legislativo - Ordinario - 9° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título II – Artículo 26º

Observaciones: con modificaciones.

Art. 81 Constitución Nacional

Acta Nº: 11

Fecha: 1-06-2005

Hora: 19:27:38

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIONI, Daniel O.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	NEGATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	NEGATIVO	MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AUSENTE	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	NEGATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	NEGATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	NEGATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	NEGATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, Maria Elisa	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	NEGATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	NEGATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	NEGATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AUSENTE	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIDO, Mercedes Margarita	AUSENTE
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AUSENTE
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AFIRMATIVO	PRADES, Carlos Alfonso	NEGATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	NEGATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	NEGATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	NEGATIVO	SANCHEZ, Maria Dora	NEGATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	NEGATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz Maria	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	NEGATIVO
LEGUIZAMON, Maria Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	NEGATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	NEGATIVO	ZAVALLIA, José Luis	NEGATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AUSENTE		AUSENTE

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título II - Artículos 27º a 31ºObservaciones: con modificaciones.
Art. 81 Constitución Nacional

Acta N°: 12	Fecha: 1-06-2005	Hora: 19:28:25
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI, Daniel O.	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	50	Votos afirmativos:	50
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	50	Abstenciones:	-
Ausentes:	22		
Votos Afirmativos Necesarios:	26	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones

	Versión Original	Actual
CURLETTI, Miriam Belén	AUSENTE	AFIRMATIVO

Observaciones:

La Senadora Curletti manifiesta a viva voz su voto afirmativo.

Modificaciones realizadas el 1/06/05

Presentes Identificados:	50	Votos afirmativos:	51
Presentes No Identificados:	1	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	51	Abstenciones:	-
Ausentes:	21		
Votos Afirmativos Necesarios:	26	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título II - Artículos 27º a 31º

Observaciones: con modificaciones.

Art. 81 Constitución Nacional

Acta Nº: 12

Fecha: 1-06-2005

Hora: 19:28:25

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI, Daniel O.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AUSENTE	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSE, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, Maria Elisa	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	LEV.VOT	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AUSENTE	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIDO, Mercedes Margarita	AUSENTE
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AUSENTE
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AFIRMATIVO	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, Maria Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz Maria	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, Maria Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AUSENTE		AUSENTE

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título III - Artículos 32º a 41ºObservaciones: con modificaciones.
Art. 81 Constitución Nacional

Acta Nº: 13	Fecha: 1-06-2005	Hora: 19:33:13
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI, Daniel O.	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	49	Votos afirmativos:	49
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	49	Abstenciones:	-
Ausentes:	23		
Votos Afirmativos Necesarios:	25	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones

	Versión Original	Actual
GIRI, Haide	AUSENTE	AFIRMATIVO

Observaciones:

La Senadora Giri manifiesta a viva voz su voto afirmativo

Modificaciones realizadas el 1/06/05

Presentes Identificados:	49	Votos afirmativos:	50
Presentes No Identificados:	1	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	50	Abstenciones:	-
Ausentes:	22		
Votos Afirmativos Necesarios:	26	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Título III - Artículos 32º a 41ºObservaciones: con modificaciones.
Art. 81 Constitución Nacional

Acta Nº: 13

Fecha: 1-06-2005

Hora: 19:33:13

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI, Daniel O.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AUSENTE	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AUSENTE	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AUSENTE
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AUSENTE
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PICHETTO, Miguel Angel	AUSENTE
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AFIRMATIVO	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	LEV.VOT	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFEZ, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AUSENTE		AUSENTE

Votación Nominal

123° Período Legislativo - Ordinario - 9ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)VOTACION EN PARTICULAR
Títulos IV, V, VI - Artículos 42º a 77ºObservaciones: con modificaciones.
Art. 81 Constitucion Nacional

Acta N°: 14	Fecha: 1-06-2005	Hora:19:43:23
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI, Daniel O.	Desempate: NO	

Presentes Identificados: 48

Presentes No Identificados: -

Total Presentes: 48

Ausentes: 24

Votos Afirmativos Necesarios: 25

Votos afirmativos: 48

Votos Negativos: -

Abstenciones: -

RESULTADO de la
VOTACIÓN **AFIRMATIVA**

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 9º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ORDEN DEL DIA 117
(CD-65/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Títulos IV, V, VI - Artículos 42º a 77º

Observaciones: con modificaciones.

Art. 81 Constitución Nacional

Acta N°: 14

Fecha: 1-06-2005

Hora: 19:43:23

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI, Daniel O.

Desempeate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AUSENTE	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, Maria Elisa	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AUSENTE	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AUSENTE
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AUSENTE
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AUSENTE	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AUSENTE
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, Maria Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz Maria	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, Maria Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AUSENTE	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALLA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AUSENTE		AUSENTE

44

Exposición pyme EPSAM 2005

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 78.

45

Repatriación de los restos mortales de Andrés Guacururí

–El texto del proyecto de comunicación aprobado es el que figura en la pág. 79.

46

Inclusión de la Argentina en una empresa de televisión sudamericana

–El texto del proyecto de comunicación aprobado es el que figura en la pág. 80.

47

Habilitación de dos pasos fronterizos en Neuquén

–El texto del proyecto de comunicación aprobado es el que figura en la pág. 81.

48

Ejecución de las recomendaciones del Comité Interamericano contra el Terrorismo

–El texto del proyecto de comunicación aprobado es el que figura en la pág. 82.

49

Proyecto Flor del Desierto

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 83.

50

Retiro de tropas sirias del territorio libanés

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 85.

51

Cumbre del Milenio

–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la pág. 86.

52

Aporte del Parlamento Latinoamericano

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 87.

53

Año Internacional de la Mujer Latinoamericana y Caribeña

–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la pág. 89.

54

Adopción de medidas para evitar la venta de stockpile de tanino por parte del Departamento de Defensa de los EE.UU. de América

–El texto del proyecto de comunicación aprobado es el que figura en la pág. 90.

55

Abstención argentina de votar la Declaración Universal sobre la Clonación Humana

–El texto del proyecto de comunicación aprobado es el que figura en la pág. 92.

56

Proyecto de Reforma de la Educación Superior

–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la pág. 93.

57

Sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:

Buenos Aires, 12 de junio de 2005.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:

El Senado y Cámara de Diputados, ...

**LEY DE PROTECCION INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES**

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º – *Objeto.* Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territo-

rio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.

La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.

Art. 2º – *Aplicación obligatoria*. La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos.

Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.

Art. 3º – *Interés superior*. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

Debiéndose respetar:

- a) Su condición de sujeto de derecho;
- b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta;
- c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;
- d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;
- e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común;
- f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse.

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

Art. 4º – *Políticas públicas*. Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas:

- a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
- b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia;
- c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;
- d) Promoción de redes intersectoriales locales;
- e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Art. 5º – *Responsabilidad gubernamental*. Los organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal.

En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.

Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.

Las políticas públicas de los organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La prioridad absoluta implica:

1. Protección y auxilio en cualquier circunstancia.
2. Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas.
3. Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas.
4. Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice;
5. Preferencia de atención en los servicios esenciales.

Art. 6º – *Participación comunitaria*. La comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes.

Art. 7º – *Responsabilidad familiar*. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.

Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones.

TITULO II

Principios, derechos y garantías

Art. 8º – *Derecho a la vida*. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida.

Art. 9º – *Derecho a la dignidad y a la integridad personal*. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral.

La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley.

Los organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y adolescentes.

Art. 10. – *Derecho a la vida privada e intimidad familiar*. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar.

Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.

Art. 11. – *Derecho a la identidad*. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a

una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil.

Los organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aún cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley.

En toda situación de institucionalización de los padres, los organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquéllos, siempre que no contraríe el interés superior del niño.

Sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley.

Art. 12. – *Garantía estatal de identificación. Inscripción en el Registro del Estado y Capacidad de las Personas*. Los organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en la ley 24.540.

Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, los organismos del Estado deberán arbitrar los medios necesarios para la obtención de la identificación obligatoria consignada en el párrafo anterior, circunstancia que deberá ser tenida especialmente en cuenta por la reglamentación de esta ley.

Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro del Estado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos adolescentes y madres, que no hayan sido oportunamente.

Art. 13. – *Derecho a la documentación*. Las niñas, niños, adolescentes y madres indocumentadas, tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la normativa vigente y en los términos que establece el procedimiento previsto en la ley 24.540.

Art. 14. – *Derecho a la salud.* Los organismos del Estado deben garantizar:

- a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad;
- b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración;
- c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia;
- d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social.

Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.

Art. 15. – *Derecho a la educación.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.

Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia. En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los organismos del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente de este documento.

Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo entregar la certificación o diploma correspondiente.

Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su condición específica.

Los organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna.

Art. 16. – *Gratuidad de la educación.* La educación pública será gratuita en todos los servicios es-

tatales, niveles y regímenes especiales, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

Art. 17. – *Prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad.* Prohíbese a las instituciones educativas públicas y privadas imponer por causa de embarazo, maternidad o paternidad, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños y adolescentes.

Los organismos del Estado deben desarrollar un sistema conducente a permitir la continuidad y la finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes.

La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su integración a ella.

Art. 18. – *Medidas de protección de la maternidad y paternidad.* Las medidas que conforman la protección integral se extenderán a la madre y al padre durante el embarazo, el parto y al período de lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo y la crianza de su hijo.

Art. 19. – *Derecho a la libertad.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad.

Este derecho comprende:

- a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos;
- b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela;
- c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos.

Las personas sujetos de esta ley tienen derecho a su libertad personal, sin más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente.

La privación de libertad personal, entendida como ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformidad con la normativa vigente.

Art. 20. – *Derecho al deporte y juego recreativo.* Los organismos del Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer progra-

mas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y, deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquéllos con capacidades especiales.

Art. 21. – *Derecho al medio ambiente.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje.

Art. 22. – *Derecho a la dignidad.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen.

Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.

Art. 23. – *Derecho de libre asociación.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad a la legislación vigente. Este derecho comprende, especialmente, el derecho a:

- a) Formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos;
- b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños, adolescentes o ambos, de conformidad con la ley.

Art. 24. – *Derecho a opinar y a ser oído.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:

- a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés;
- b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo.

Art. 25. – *Derecho al trabajo de los adolescentes.* Los organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes.

Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes.

Los organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impidan, o afecten su proceso evolutivo.

Art. 26. – *Derecho a la seguridad social.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.

Los organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento.

Art. 27. – *Garantías mínimas de procedimiento.* *Garantías en los procedimientos judiciales o administrativos.* Los organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia, se dicten, los siguientes derechos y garantías:

- a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente;
- b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte;
- c) A ser, asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento, judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;
- d) A participar activamente en todo el procedimiento;
- e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.

Art. 28. – *Principio de igualdad y no discriminación.* Las disposiciones de esta ley se aplicarán por igual a todos las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus representantes legales.

Art. 29. – *Principio de efectividad.* Los organismos del Estado deberán adoptar todas las medidas

administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

Art. 30. – *Deber de comunicar.* Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.

Art. 31. – *Deber del funcionario de recepcionar denuncias.* El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los deberes del funcionario público.

TITULO III

Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Art. 32. – *Conformación.* El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.

La política de protección integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe contar con los siguientes medios:

- a) Políticas, planes y programas de protección de derechos;
- b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos;
- c) Recursos económicos;
- d) Procedimientos;

e) Medidas de protección de derechos;

f) Medidas de protección excepcional de derechos.

Art. 33. – *Medidas de protección integral de derechos.* Son aquellas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varios niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias.

La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, los padres, la familia, representantes legales, o responsables, o de la propia conducta de la niña, niño o adolescente.

La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización.

Art. 34. – *Finalidad.* Las medidas de protección de derechos tienen como finalidad la preservación o restitución a las niñas, niños o adolescentes, del disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

Art. 35. – *Aplicación.* Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a las niñas, niños y adolescentes.

Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.

Art. 36. – *Prohibición.* En ningún caso las medidas a que se refiere el artículo 33 de esta ley podrán consistir en privación de la libertad conforme lo establecido en el artículo 19.

Art. 37. – *Medidas de protección.* Comprobada la amenaza o violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:

- a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo familiar;
- b) Solicitud de becas de estudio o para jardines maternos o de infantes, e inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar;
- c) Asistencia integral a la embarazada;
- d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar;

- e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente a través de un programa;
- f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus padres, responsables legales o representantes;
- g) Asistencia económica.

La presente enunciación no es taxativa.

Art. 38. – *Extinción*. Las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento por acto de la autoridad competente que las haya dispuesto y cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen.

Art. 39. – *Medidas excepcionales*. Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio.

Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras persistan las causas que les dieron origen.

Art. 40. – *Procedencia de las medidas excepcionales*. Sólo serán procedentes cuando, previamente, se hayan cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en el artículo 33.

Declarada procedente esta excepción, será la autoridad local de aplicación quien decida y establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar jurídicamente fundado, debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, la medida adoptada a la autoridad judicial competente en materia de familia de cada jurisdicción.

El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de las sanciones previstas en el capítulo IV del Código Penal de la Nación.

La autoridad competente de cada jurisdicción, en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes dentro del plazo de setenta y dos (72) horas de notificado, con citación y audiencia de los representantes legales, deberá resolver la legalidad de la medida; resuelta ésta, la autoridad judicial competente deberá derivar el caso a la autoridad local competente de aplicación para que ésta implemente las medidas pertinentes.

Art. 41. – *Aplicación*. Las medidas establecidas en el artículo 39, se aplicarán conforme a los siguientes criterios:

- a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las medidas consisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas a ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes;
- b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al considerar las soluciones se prestará especial atención a la continuidad en la educación de las niñas, niños y adolescentes, y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser supervisadas por el organismo administrativo local competente y judicial interviniente;
- c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo familiar de origen, con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes;
- d) Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos de hermanos deben preservar la convivencia de los mismos;
- e) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir en privación de la libertad;
- f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo.

TITULO IV

Organos administrativos de protección de derechos

Art. 42. – *Sistema de protección integral. Niveles*. El sistema de protección integral se conforma por los siguientes niveles:

- a) Nacional: es el organismo especializado en materia de derechos de infancia y, adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional;
- b) Federal: es el órgano de articulación y concertación, para el diseño, planificación y efectivización de políticas públicas en todo el ámbito del territorio de la República Argentina;

- c) Provincial: es el órgano de planificación y ejecución de las políticas de la niñez, cuya forma y jerarquía, determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando las respectivas autonomías así como las instituciones preexistentes.

Las provincias podrán celebrar convenios dentro del marco jurídico vigente para municipios y comunas en las jurisdicciones provinciales, como asimismo implementar un organismo de seguimiento de programas de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en coordinación articulada con las organizaciones no gubernamentales de niñez, adolescencia y familia.

CAPÍTULO I

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

Art. 43. – *Secretaría Nacional.* Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia, la que funcionará con representación interministerial y de las organizaciones de la sociedad civil.

La misma será presidida por un secretario de Estado designado por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 44. – *Funciones.* Son funciones de la Secretaría:

- a) Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y establecer en forma conjunta, la modalidad de coordinación entre ambos organismos con el fin de establecer y articular políticas públicas integrales;
- b) Elaborar con la participación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un Plan Nacional de Acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en esta ley;
- c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de asesoramiento y contralor en materia de medios de comunicación;
- d) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su competencia;
- e) Participar en forma conjunta con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a la materia de su competencia;
- f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se efectúen;
- g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y familia;
- h) Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos de los sujetos de esta ley;
- i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la prevención de su institucionalización;
- j) Promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;
- k) Coordinar acciones consensuadas con los poderes del Estado, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación activa de las niñas, niños y adolescentes;
- l) Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos provinciales y municipales y agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o en el desarrollo de los procesos de transformación institucional;
- m) Gestionar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;
- n) Efectivizar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los estados provinciales para la financiación de dichas políticas;
- o) Organizar un sistema de información único y descentralizado que incluya indicadores para el monitoreo, evaluación y control de las políticas y programas de niñez, adolescencia y familia;
- p) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos;
- q) Impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;
- r) Asignar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los recursos públicos para la formulación y ejecución

de las políticas previstas en el Plan Nacional de Acción;

- s) Establecer en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

CAPÍTULO II

Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia

Art. 45. – Créase el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el que estará integrado por quien ejerza la titularidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien lo presidirá, y por los representantes de los órganos de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia existentes o a crearse en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia dictará su propio reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado en la primera reunión.

Art. 46. – *Funciones.* El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá funciones deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas y de políticas de concertación, cuyo alcance y contenido se fijará en el acta constitutiva.

Tendrá las siguientes funciones:

- a) Concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;
- b) Participar en la elaboración en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de un plan nacional de acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley;
- c) Proponer e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la concreción de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño;
- d) Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad civil de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su especialidad e idoneidad en la materia, favoreciendo su conformación en redes comunitarias;
- e) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y protección de derechos;
- f) Gestionar en forma conjunta y coordinada con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;

g) Efectivizar juntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los estados provinciales para la financiación de dichas políticas;

h) Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación y ejecución de las políticas previstas en el plan nacional de acción;

i) Promover en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

CAPÍTULO III

Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Art. 47. – *Creación.* Créase la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.

Art. 48. – *Control.* La defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del sistema de protección integral se realizará en dos niveles:

- a) Nacional: a través del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
- b) Provincial: respetando la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las instituciones preexistentes. Las Legislaturas podrán designar defensores en cada una de las jurisdicciones, cuya financiación y funciones serán determinadas por los respectivos cuerpos legislativos.

Art. 49. – *Designación.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Las decisiones de esta comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

El defensor deberá ser designado dentro de los noventa (90) días de sancionada esta ley y asumirá sus funciones ante el Honorable Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.

Art. 50. – *Requisitos para su elección.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) Ser argentino;
- b) Haber cumplido treinta (30) años de edad;
- c) Acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y familia.

Art. 51. – *Duración en el cargo.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes durará en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.

Art. 52. – *Incompatibilidad.* El cargo de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional a excepción de la docencia, estándole vedada, asimismo, la actividad política partidaria.

Dentro de los diez (10) días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el defensor debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, bajo apercibimiento de remoción del cargo.

Son de aplicación al defensor, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 53. – *De la remuneración.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes percibirá la remuneración que establezca el Congreso de la Nación, por resolución de los presidentes de ambas Cámaras.

Art. 54. – *Presupuesto.* El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida presupuestaria para solventar los gastos del funcionamiento administrativo del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Art. 55. – *Funciones.*

Son sus funciones:

- a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a las niñas, niños y adolescentes;
- b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal;
- c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso. Para ello puede tomar las declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los servicios públicos y privados de atención de las niñas, niños y adolescentes, determi-

nando un plazo razonable para su perfecta adecuación;

- d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por infracciones cometidas contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando correspondiera;
- e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las niñas, niños y adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente, sea desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos de todas las niñas, los niños o los adolescentes;
- f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de los servicios médicos asistenciales y educativos, sean públicos o privados;
- g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias, a través de una organización adecuada;
- h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de su problemática;
- i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación;
- j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o cualquier denuncia que se efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes, ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.

Art. 56. – *Informe anual.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta anualmente al Congreso de la Nación, de la labor realizada en un informe que presentará antes del 31 de mayo de cada año.

Dentro de los sesenta (60) días de iniciadas las sesiones ordinarias de cada año, el defensor deberá rendir dicho informe en forma verbal ante la comisión bicameral a que se refiere el artículo 49.

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe especial. Los informes anuales y especiales serán publicados en el Boletín Oficial, en los Diarios de Sesiones y en Internet.

El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en forma personal, deberá concurrir trimestralmente en forma alternativa a las comisiones permanentes especializadas en la materia de

cada una de las Cámaras del Congreso Nacional a brindar los informes que se le requieran, o en cualquier momento cuando la comisión así lo requiera.

Art. 57. – *Contenido del informe.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta en su informe anual de las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones. En el informe no deberán constar los datos personales que permitan la pública identificación de los denunciantes, así como tampoco de las niñas, niños y adolescentes involucrados.

El informe contendrá un anexo en el que se hará constar la rendición de cuentas del presupuesto del organismo en el período que corresponda.

Art. 58. – *Gratuidad.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes determinará en forma exclusiva los casos a que dará curso; las presentaciones serán gratuitas, quedando prohibida la participación de gestores e intermediarios.

Art. 59. – *Cese. Causales.* El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes cesa en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

- a) Por renuncia;
- b) Por vencimiento del plazo de su mandato;
- c) Por incapacidad sobreviniente o muerte;
- d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;
- e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

Art. 60. – *Cese y formas.* En los supuestos previstos por los incisos a), c) y d) del artículo anterior, el cese será dispuesto por los presidentes de ambas Cámaras. En el caso del inciso c), la incapacidad sobreviniente deberá acreditarse de modo fehaciente. En los supuestos previstos por el inciso e) del mismo artículo, el cese se decidirá por el voto de los dos tercios de los miembros presentes de la comisión, previo debate y audiencia del interesado.

En caso de muerte del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se procederá a reemplazarlo en forma provisoria según el procedimiento establecido en el artículo siguiente, promoviendo en el más breve plazo la designación del titular en la forma establecida en el artículo 56.

Art. 61. – *Adjuntos.* A propuesta del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y conforme el procedimiento establecido en el artículo 56 podrán designarse dos adjuntos que auxiliarán a aquél en el ejercicio de sus funciones, pudiendo, además, reemplazarlo en caso de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal, en el orden en que fuesen designados.

Art. 62. – *Obligación de colaborar.* Todas las entidades, organismos y personas jurídicas, ya sean

públicas o privadas, y las personas físicas están obligadas a prestar colaboración a los requerimientos del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con carácter preferente y expedito.

Art. 63. – *Obstaculización.* Todo aquel que desobedezca u obstaculice el ejercicio de las funciones previstas en los artículos precedentes incurrirá en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.

El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes.

Puede requerir la intervención de la justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiera sido negada por cualquier organismo, ente, persona o sus agentes.

Art. 64. – *Deberes.* Comprobada la veracidad de la denuncia o reclamo, el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá:

- a) Promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas competentes, a fin de garantizar el goce y el ejercicio de los mismos;
- b) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes quienes tienen la obligación de comunicar al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el resultado de las investigaciones realizadas;
- c) Formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos o privados respecto de cuestiones objeto de su requerimiento;
- d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones y acciones realizadas. A tal efecto deberá establecerse un espacio en los medios masivos de comunicación.

CAPÍTULO IV

De las organizaciones no gubernamentales

Art. 65. – *Objeto.* A los fines de la presente ley se consideran organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia a aquellas que, con personería jurídica y que en cumplimiento de su misión institucional desarrollen programas o servicios de promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Art. 66. – *Obligaciones.* Las organizaciones no gubernamentales mencionadas en esta ley deben cumplir con los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados internacionales so-

bre los derechos humanos en los que la República Argentina sea parte, y observar los siguientes principios y obligaciones:

- a) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente de respeto, dignidad y no discriminación;
- b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de las niñas, niños y adolescentes y velar por su permanencia en el seno familiar;
- c) No separar grupos de hermanos;
- d) No limitar ningún derecho que no haya sido o limitado por una decisión judicial;
- e) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernan como sujetos de derechos;
- f) Mantener constantemente informado a la niña, niño o adolescente sobre su situación legal, en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte sus intereses, y notificarle, en forma personal y a través de su representante legal, toda novedad que se produzca en forma comprensible cada vez que la niña, el niño o el adolescente lo requiera;
- g) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en pequeños grupos;
- h) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de aplicación respecto de las condiciones edilicias, salubridad, higiene, seguridad y confort;
- i) Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad de aplicación, de los gastos realizados clasificados según su naturaleza; de las actividades desarrolladas descritas en detalle; de las actividades programadas para el siguiente ejercicio descritas en detalle, su presupuesto, los gastos administrativos y los recursos con que serán cubiertas. Se dará cuenta también de las actividades programadas para el ejercicio vencido que no hubieran sido cumplidas, y las causas que motivaron este incumplimiento.

Art. 67. – *Incumplimiento.* En caso de incumplimiento de las obligaciones a que se hallan sujetas las organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia mencionadas por esta ley, la autoridad local de aplicación promoverá ante los organismos competentes, la implementación de las medidas que correspondan.

Art. 68. – *Registro de las organizaciones.* Créase en el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el registro racional de or-

ganizaciones de las sociedad civil con personería jurídica que desarrollen programas o servicios de asistencia, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán implementar, un sistema de registro de las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica con el objeto de controlar y velar en cada jurisdicción por el fiel cumplimiento de los principios que establece esta ley, con comunicación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con miras a la creación del registro racional de estas organizaciones.

TITULO V

Financiamiento

Art. 69. – La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia deberán en forma conjunta y coordinada garantizar la distribución justa y equitativa de las partidas presupuestarias y de todos los recursos nacionales o internacionales destinados a la efectivización de los objetivos de esta ley.

Art. 70. – *Transferencias.* El gobierno nacional acordará con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la transferencia necesaria de los servicios de atención directa y sus recursos, a las respectivas jurisdicciones en las que actualmente estén prestando servicios y se estén ejecutando.

Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.

Art. 71. – *Transitoriedad.* En un plazo máximo de ciento ochenta (180) días corridos prorrogables por igual plazo y por única vez, el Poder Ejecutivo nacional arbitrará las medidas necesarias incluidas las afectaciones presupuestarias y edilicias, que garanticen la contención y protección de las niñas, niños y adolescentes, comprendidos dentro del marco de la ley 10.903 que se deroga.

Art. 72. – *Fondos.* El Presupuesto General de la Nación proveerá las partidas necesarias para el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y todas las que correspondan para el cumplimiento de la presente ley, atendiendo lo previsto en el artículo 70.

La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional.

Para el ejercicio presupuestario del corriente año, el jefe de Gabinete reasignará las partidas correspondientes.

TITULO VI

Disposiciones complementarias

Art. 73. – Sustitúyese el artículo 310 del Código Civil, por el siguiente:

Artículo 310: Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el ejercicio de la patria potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela de las personas menores de edad.

Art. 74. – Modifíquese el artículo 234 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 234: Podrá decretarse la guarda:

- 1) De incapaces mayores de dieciocho (18) años de edad abandonados o sin representantes legales o cuando éstos estuvie-ren impedidos de ejercer sus funciones.
- 2) De los incapaces mayores de dieciocho (18) años de edad que están en pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta su curatela.

Art. 75. – Modifíquese el artículo 236 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 236: En los casos previstos en el artículo 234, la petición podrá ser deducida por cualquier persona, y formulada verbalmente ante el asesor de menores e incapaces, en cuyo caso se labrará acta con las menciones pertinentes, la que será remitida al juzgado que corresponda.

Art. 76. – Derógase la ley 10.903, los decretos nacionales: 1.606/90 y sus modificatorias, 1.631/96 y 295/01.

Art. 77. – Esta ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días, contados a partir de la sanción de la presente.

Art. 78. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue aprobado en general y en particular por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, con excepción de los artículos 3º, 14, 22 y 26 (artículo 81 de la Constitución Nacional).

Saludo a usted muy atentamente.

MARCELO A. H. GUINLE.

Juan Estrada.

III

Inserciones

1

Solicitada por el señor senador Cafiero

“Que no exista ningún otro privilegio que el de los niños”

Evita, mensaje de Navidad, 1951

La Constitución de 1853, primer pacto fundamental de nuestra nación, contenía a hombres, blancos, adultos y propietarios. Es decir, que excluía a las mujeres, a los indígenas, a los negros, a los pobres y a los niños. Estos últimos, no eran ciudadanos.

La Constitución de 1949 redefine a la nación, se inscribe un nuevo pacto, donde son parte aquellos excluidos de otrora. Todos sabemos lo que sucedió con la reforma del 49. ¿Es tal vez, como algunos analistas opinan, que nuestra sociedad no estaba preparada para incluir a todos sus hijos, o es que aquellas oligarquías y aquellos privilegios, contra los que Evita batalló hasta el final de sus días, lograron imponerse a las grandes mayorías populares?

Lo cierto es que, luego de décadas, en la reforma constitucional de 1994, en la provincia de Santa Fe, el pueblo argentino, y los que allí estábamos en su representación, volvimos a pelear por aquella idea de nación, donde todos fueran parte, y donde to-

dos fueran iguales. Y es así como logramos dar un paso importantísimo, incorporamos once tratados de derechos humanos a la Carta Magna, y les dimos rango constitucional. Entre ellos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención por la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.

El artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional nos impuso adecuar las normas internas a los nuevos paradigmas establecidos en esos tratados. Y debemos confesar que, a pesar de los 10 años transcurridos no hemos podido, en el ámbito nacional, imponer estos nuevos regímenes. Es cierto que tuvimos muchos problemas los argentinos en esta década, pero también es cierto que no quisimos o no supimos llegar a acuerdos, y también es cierto que muchas corporaciones, atadas a lo viejo, se resisten a cambiar.

La Convención sobre los Derechos del Niño introduce una ruptura filosófico-jurídica con respecto a las políticas tradicionales dirigidas a la infancia, modifica el derecho interno de nuestro país y constituye un nuevo punto de partida para pensar y desarrollar un nuevo enfoque de la protección integral de derechos.

La modificación más importante que introduce es la concepción de la niñez, en primer lugar, como un todo, sin distinción entre “niños y menores”, refiriéndose con este último a los pobres, a los más vulnerables, a los diferentes, a los “problemáticos”, a aquellos que han ingresado al sistema judicial del patronato; en definitiva, por una artimaña del lenguaje, pasan de ser víctimas a victimarios.

En segundo lugar, la consideración del niño no ya como objeto de tutela y protección, sino como sujeto pleno de derechos que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar.

Es cierto que existe un sentimiento generalizado de amor hacia los niños, todos pregonamos el amor hacia los niños, pero muchas veces es un sentimiento hipócrita. En nombre del amor, de la protección, se han cometido, y aún se cometen, las más flagrantes violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque no hay amor sin justicia. Y la justicia es dar a cada uno lo suyo. Como decía Eva Perón: “Primero la justicia, que es algo así como el pedestal para el amor”.

En cumplimiento de esta normativa constitucional, hoy las políticas dirigidas a la protección de los derechos de la infancia no se centran en la figura aislada del niño, sino que se dirigen al fortalecimiento del núcleo familiar, para que éste sea el ámbito privilegiado de crianza y desarrollo. En efecto, el lugar del niño es la familia, la escuela, el barrio.

Nuestro país, sufrió un grave deterioro socioeconómico que provocó que muchos de los chicos y adolescentes se encuentren en graves situaciones de vulnerabilidad social, que se traducen en cuestiones tales como falta de documentación, rezago y abandono escolar, deficiencias nutricionales, falta de controles de salud, consumo y abuso de drogas legales e ilegales, violencia familiar, social e institucional desmembramiento del grupo familiar, trabajo infantil, abuso y explotación sexual, entre otras, que atentan contra su bienestar y desarrollo adecuado.

Aquella frase, que hace décadas escuchábamos repetir en otros países tanto de Latinoamérica como del resto del mundo: “La mayoría de los pobres son niños, y la mayoría de los niños son pobres”, en nuestro país, es hoy una realidad lacerante.

Esta realidad es la que nos obliga a no seguir mirando para el costado, a dar la cara frente a nuestros niños, y dar fin a un sistema que lejos de resolver algunas de estas patologías sociales no ha hecho más que agudizarlas, judicializando la pobreza y robándoles la infancia a miles y miles de nuestros pibes.

Diseñar e implementar una nueva propuesta, en el marco de la doctrina de la protección integral, importa revertir esta situación de vulneración de derechos fundamentales.

No somos ingenuos y sabemos que una ley no es mágica y que no revertirá, por el solo hecho de su sanción, todos los padecimientos de nuestros hijos y sus familias, pero sí estamos seguros que derogar el patronato, o lo que se ha dado en llamar la doctrina de la situación irregular, y sancionar esta nueva ley, es condición sine qua non para comenzar a transitar este camino. Camino que, respetando las identidades de cada pequeño ciudadano, le garantice el acceso a la educación, la salud, el deporte, la cultura, y los prepare para una vida independiente y responsable en sociedad.

Nosotros, que tuvimos la suerte de vivir aquellos años privilegiados y que pudimos educar a nuestros hijos pensando en que ellos eran los protagonistas de esa patria más justa y más libre, tenemos que cumplir con este imperativo ético, y también político, de volver a nuestras más viejas y firmes convicciones: “Que no exista ningún otro privilegio que el de los niños”.

2

Solicitada por la señora senadora Caparrós

INSERCIÓN DE LA SENADORA CAPARROS AL PROYECTO DE LEY C.D.-65/04 SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención por los Derechos del Niño.

Este documento constituye un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante, por el cual los Estados nacionales que lo acepten mediante su firma, quedan comprometidos a dar cumplimiento a sus disposiciones. Esta característica marca una diferencia fundamental con las declaraciones que la precedieron. Este tratado, que ya ha sido ratificado por todos los países del mundo con dos excepciones, explica los derechos de todos los niños a la salud, la educación, condiciones de vida adecuadas, el esparcimiento y el juego, la protección de la pobreza, la libre expresión de sus opiniones, a la protección durante los conflictos armados, a la libertad de conciencia, a la protección contra el descuido o trato negligente, a la protección contra el trabajo infantil, contra la explotación y el abuso sexual, el derecho a un hogar, a la protección contra el uso ilícito de estupefacientes, a la libertad, al debido proceso, derecho a un nombre y una nacionalidad, a la alimentación y la nutrición, a recibir cuidados de ambos progenitores, derecho a adquirir conocimientos sobre el medio ambiente natural, el derecho a una educación que respete los valores propios de su cultura, y a vivir libres de cualquier discriminación.

El primer antecedente de la convención fue la Declaración de Ginebra del año 1924, impulsada por la disuelta Sociedad de las Naciones. En ella por primera vez se conceptualiza a la niñez en su conjunto como un grupo que debe ser objeto de medidas especiales de protección para garantizar su normal desarrollo material y espiritual.

La aprobación de ese documento debe entenderse en el clima de sensibilización por los derechos humanos que generó la experiencia de la Primera Guerra Mundial y, en particular, expresa la preocupación por la situación de los niños huérfanos a raíz del conflicto. Sus contenidos —muy generales y vagos— nunca se llevaron a la práctica y más tarde, la humanidad vivió otra guerra, aun más brutal que la anterior, donde los derechos de las personas y de los niños en particular sufrieron vulneraciones sin precedentes en el orden político moderno.

Recién en 1959, las Naciones Unidas retoma el tema y aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, cuyos 10 principios han sido ampliamente difundidos. En su preámbulo se insta a los gobiernos nacionales para que se reconozcan esos derechos y luchan porque sean observados promulgando medidas legislativas. Sin embargo, su aceptación por parte de las naciones implica sólo una obligación moral y no están previstas las medidas operativas para su implementación. En la Declaración de los Derechos del Niño, llamada Declaración de Ginebra, los hombres y las mujeres de todas las naciones, reconociendo que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma, declaran y aceptan como deber, por encima de toda consideración de raza, nacionalidad, o creencia que:

1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual.
2. El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser radicado, el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y ayudados.
3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad.
4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación.
5. El niño debe ser educado inculcándose el sentido del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo.

Veinte años más tarde —en 1979, Año Internacional del Niño— por iniciativa del gobierno polaco, los representantes de 43 países iniciaron el trabajo de redacción de la convención, cuya culminación demandó 10 años más.

La convención constituye un hito en la historia de la humanidad ya que en ella por primera vez los niños y las niñas de todo el mundo son considera-

dos —en tanto grupo vulnerable— no sólo objeto de protección especial por parte de los adultos y del Estado, sino sujetos titulares de un conjunto de derechos civiles y políticos que los equiparan a la condición de ciudadanos.

Su cumplimiento pleno implica para los Estados firmantes, el compromiso de adoptar medidas concretas tendientes a satisfacer las necesidades básicas de salud, vivienda, educación y recreación y de protección contra toda forma de maltrato, abuso o explotación, garantizando el desarrollo armónico e integral de todos los niños y niñas sin discriminación alguna. Así como también, la obligación de iniciar campañas de difusión y acción educativa que apunten a producir las profundas modificaciones culturales, indispensables para que la sociedad en su conjunto acepte la nueva concepción de niñez propuesta por la convención.

Nuestro país refrendó la Convención Internacional por los Derechos del Niño mediante la sanción de la ley nacional 23.849, que fue promulgada de hecho en octubre de 1990. En los considerandos de dicha ley, se realizan algunas salvedades y especificaciones al texto original de la convención.

Estas reservas se refieren a la definición de niñez que en nuestro país se extiende desde el momento de la concepción hasta los dieciocho años de edad a las disposiciones relativas a la adopción internacional, a la planificación familiar y a la utilización de los niños en los conflictos bélicos.

En el momento de la firma la República Argentina hace reserva de los incisos *b)*, *c)*, *d)* y *e)* del artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño y manifiesta que esos incisos no regirán en las zonas de su jurisdicción por entender que, para aplicarlos, debe contarse plenamente con un riguroso mecanismo de protección legal del niño en materia de adopción internacional, a fin de impedir su tráfico y venta.

Con relación al artículo 1º de la convención, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido de que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad.

Con relación al artículo 38 de la convención, la República Argentina declara que es su deseo que la convención hubiese prohibido terminantemente la utilización de niños en los conflictos armados, tal como lo estipula su derecho interno.

En el momento de la ratificación legislativa la República Argentina hace semejantes reservas y declaraciones que al momento de la firma de la convención y con relación al inciso *f)* del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina, considerando que las cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable de acuerdo con principios éticos y morales, interpreta que

es obligación de los Estados, en el marco de este artículo, adoptar las medidas apropiadas para la orientación a los padres y la educación para la paternidad responsable.

La Primera Cumbre Mundial a favor de la Infancia en Nueva York en 1990 comprometió a los países firmantes, entre ellos nuestro país, a cumplir un plan de acción de 7 metas en el transcurso de los años 90.

1. Reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años en una tercera parte.

2. Reducir la tasa de mortalidad materna en un 50 %.

3. Reducir la tasa de malnutrición grave y moderada entre los niños menores de 5 años en un 50 %.

4. Dar acceso a todos al agua apta para el consumo y los servicios sanitarios de eliminación de excrementos.

5. Lograr que por lo menos el 80 % de los niños en edad de asistir a la escuela primaria tenga acceso a la educación básica y terminen la enseñanza primaria.

6. Reducir la tasa de analfabetismo de los adultos a por lo menos la mitad del nivel registrado en 1990, otorgando particular importancia a la alfabetización de las mujeres.

7. Dar protección a los niños en circunstancias especialmente difíciles, sobre todo en situaciones de conflictos armados.

Gran parte de la población infantil y juvenil de nuestras grandes ciudades subsiste sin condiciones mínimas de bienestar y de dignidad, víctimas de omisiones y transgresiones sistemáticas de sus derechos básicos.

La doctrina de la situación irregular, base de casi todas las legislaciones de menores de nuestra región, tiene como consecuencia práctica el abordaje indiscriminado de los niños y adolescentes carentes, abandonados e infractores, a través de los mecanismos de control social de los Estados, y no de mecanismos de desarrollo social.

Las medidas –o falta de medidas– de los gobiernos tienen mayores repercusiones sobre los niños que sobre cualquier otro grupo de la sociedad.

Los puntos de vista de los niños se escuchan y se toman en cuenta muy pocas veces en el proceso político. Por lo general, los niños no votan y no participan de otro modo en el proceso político. Aunque muchos Estados han comenzado a escuchar seriamente los puntos de vista de los niños en muchas cuestiones importantes el proceso de cambio se encuentra todavía en sus primeras etapas.

Los costos para una sociedad que no es capaz de atender adecuadamente a sus niños son enormes. Los gobiernos son conscientes de los resultados de las investigaciones sociales que indican que las experiencias más tempranas de los niños –en el

marco de la familia y las que obtienen con otras personas encargadas de la atención– influyen de manera notable en el futuro de su desarrollo.

Es posible observar ya grandes conquistas en la esfera de los derechos de la infancia: en todos los lugares del mundo han surgido instituciones, estructuras, programas y medidas destinadas a promover los derechos de la infancia. Las ONG y otros organismos de la sociedad civil han aparecido en la escena con opiniones innovadoras y muy firmes sobre la defensa de los derechos de la infancia.

La realización de una reforma legislativa en favor de los derechos de la infancia ha sido con frecuencia el resultado del examen exhaustivo y obligatorio de la legislación nacional que se lleva a cabo en el marco del proceso de presentación de informes sobre la convención.

Los Estados han comenzado a reaccionar ante la violencia y la explotación extremas, así como el maltrato y el abandono, que forman parte de la realidad de millones de niños. Los principios que exigen que los niños sean protegidos de “toda forma de violencia física y mental” han abierto la esperanza de que muy pronto se puedan reducir las muchas formas de violencia de los adultos contra los niños.

A pesar de los notables progresos alcanzados en el avance de los derechos de la infancia, todavía queda mucho por hacer. Los progresos han sido desiguales, y muchos países se encuentran a la zaga con respecto a otros en la tarea de conceder a los derechos de la infancia la importancia que merecen en los temarios nacionales.

Todos los años, unos 12 millones de niños menores de cinco años mueren en todo mundo, la mayoría por causas que pueden prevenirse fácilmente.

Unos 130 millones de niños en los países en desarrollo no reciben enseñanza primaria, y la mayoría de ellos son niñas.

Unos 160 millones de niños padecen de desnutrición grave o moderada.

Unos 1.400 millones de niños no tienen acceso al agua potable y 2.700 millones carecen de un saneamiento adecuado.

Los sistemas de justicia juvenil de algunos Estados son cada vez más punitivos.

Muchos niños languidecen en orfanatos y otras instituciones, sin recibir una enseñanza y una atención de la salud adecuadas. Estos niños reciben muy a menudo maltratos físicos.

Unos 250 millones de niños participan en alguna forma de trabajo. Hay muy pocas medidas sistemáticas para eliminar la explotación infantil que tomen en cuenta las necesidades de los niños.

A finales del siglo XX, hay cada vez más una mayor toma de conciencia en todo el mundo sobre los problemas que afectan a los niños y el compromiso

para resolverlos. Pero nuevos problemas como por ejemplo el VIH/sida, que ha dejado ya huérfanos a millones de niños y afecta diariamente a miles más amenazan con anular en numerosos países varias conquistas sanitarias y sociales que costaron grandes esfuerzos. Pero los niños y las niñas del mundo han recibido una promesa que todavía está en pie. Las vidas de millones de niños y de niñas sufrirán si esta promesa no se cumple. El proyecto que nos disponemos a aprobar es un paso importante para cumplir esas promesas que el Estado argentino ha asumido al ratificar legislativamente las convenciones internacionales sobre el tema.

Debe destacarse del proyecto que se aprueba:

La habilitación expresa de una vía judicial y/o administrativa directa para solicitar medidas rápidas y expeditas en caso de omisión por parte de los órganos del Estado de aquellos deberes que esta ley les imponga. (Artículo 1º, último párrafo.)

La confirmación legislativa de la edad de 18 años como límite para que una persona sea considerada menor de edad y beneficiaria de la legislación especial de menores. (Artículo 2º.)

La expresa imposición del principio de interés superior del niño en el artículo 3º del proyecto y entendiendo como tal a la satisfacción integral y simultánea de sus derechos y garantías.

El establecimiento por ley de las pautas que deben regir a las políticas públicas que se elaboren (artículo 4º) y que son:

- Fortalecer el rol de la familia.
- Promover la descentralización de los organismos y programas para garantizar la agilidad y eficacia.
- La capacitación y fiscalización permanente.
- La creación de lazos con la sociedad civil (ONG).

Debe destacarse la asignación privilegiada de recursos públicos destinados a políticas que protejan a los menores (artículo 5º) que hace el presente proyecto de ley, asegurar políticas para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad (artículo 7º).

De los derechos y garantías previstos en los artículos 8º al 31 se destaca:

- El derecho a conocer a sus padres biológicos.
- El derecho a tener DNI gratuito los recién nacidos, adolescentes y madres no inscritas oportunamente.
- El derecho a la educación pública y gratuita.
- La prohibición de discriminar al adolescente por embarazo o paternidad.
- Erradicar el trabajo infantil (artículo 25).
- Las garantías mínimas en los procedimientos judiciales (artículo 27) a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta al momento de resolver, a ser asistido por un letrado especialista en niñez.

El presente proyecto establece el principio de efectividad: que todos los órganos del Estado adopten las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos y garantías que se reconocen en la ley (artículo 29).

Deber de comunicar que implica que los miembros de los establecimientos educativos y salud tanto públicos como privados además de todo funcionario público tienen el deber de comunicar toda vulneración de derechos de niños a la autoridad administrativa que proteja dichos derechos a nivel local bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión (artículo 30). El deber del funcionario de recepcionar denuncias (artículo 31) bajo apercibimiento de considerarlo incurso en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Título III. Del sistema de protección integral

El sistema está compuesto por todos los organismos públicos y privados que diseñen o supervisen políticas sobre los menores, en el ámbito nacional, provincial y municipal, y que funcionará a través de acciones intersectoriales desarrolladas por entes del sector público central o descentralizados y por entes del sector privado (artículo 32).

El sistema tiene tres niveles (artículo 42): federal, ámbito donde se diseñan y planifican las políticas; nacional: dentro del Poder Ejecutivo nacional, y provincial. Y se crea el Consejo Federal de la Niñez.

Se crea la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas... (artículo 47 y siguientes), propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional mediante una comisión bicameral y durando 5 años en su cargo. Su remuneración será establecida por el mismo Congreso. Al respecto es útil mencionar que la creación de una figura especializada es la tendencia mundial para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como recomienda la UNICEF.

Consideraciones respecto a la creación de un órgano independiente establecido para promover y proteger los derechos del niño y supervisar su realización. Este ente es denominado defensor o comisionado de los derechos del niño en Chile. (Resumen preparado en base a documento de UNICEF sobre el trabajo del Defensor de los Niños)

Antecedentes: Chile firmó y suscribió la Convención Internacional de los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990.

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas examinó el informe de Chile en el mes de abril de 1994 aprobando diversas observaciones, nos referiremos a tres de ellas que nos parecen de sumo interés por su vigencia.

El comité recomienda que se establezca un mecanismo nacional general con el mandato de garantizar la supervisión y evaluación constante en todo el país de la aplicación de la convención, lo que reviste especial importancia en el contexto de la ejecución por el gobierno del programa de descentralización.

Creación del cargo de Defensor de los Niños en Chile

La falta de poder económico y político de los niños y su consecuente vulnerabilidad ante la explotación, los abusos y el abandono exige la creación de un organismo independiente autorizado para actuar en defensa de los niños y centrado exclusivamente en sus intereses, dicho lo anterior, proponemos la creación del cargo de Defensor de los Niños.

Diseño del cargo

El cargo de Defensor de los Niños debe constituirse mediante una legislación específicamente elaborada y aprobada que le otorgue poderes formales y autoridad. Debe tener independencia frente al gobierno. Su financiación, funciones y posición los debe determinar el Parlamento, ante el cual es responsable. No debe estar sujeto a interferencias o influencias políticas y será libre para criticar la legislación y las políticas del gobierno.

Un Defensor de los Niños debe desempeñar un papel significativo no sólo asegurando una aplicación efectiva de los derechos que reconoce la ley sino también tratando de difundir y promover el respeto de todos los derechos fundamentales de los niños, promoviendo el reconocimiento de estos derechos que aún no forman parte de la legislación, la cultura o la práctica diaria de la vida de los niños.

El defensor debe tener:

- Poder para efectuar investigaciones sobre la realidad de la situación de la infancia en el país y difundirlos.

- Poder para investigar las violaciones de los Derechos del Niño, el derecho a acceder a documentos y el poder para solicitar testimonios a personas y para acceder a inspeccionar instituciones u organismos implicados.

- Poder para apoyar una acción legal o para promoverla cuando no es posible o apropiado para el niño hacerlo por sí mismo.

- Poder para publicar informes y estadísticas, utilizando todos los medios apropiados para su difusión y publicidad.

- El defensor debe ser consultado por el gobierno y otros organismos cuando se estén considerando propuestas para cambiar o revocar una legislación o introducir una nueva que pueda afectar la vida de los niños.

La oficina debe difundir la información sobre los derechos del niño como un aspecto fundamental para sensibilizar a la opinión pública.

El defensor puede ofrecer asesoramiento legal, informar acerca de las violaciones de derecho, proporcionar testimonios de expertos y asistir en la preparación de las demandas, con la excepción de asuntos relacionados con conflictos familiares que ya son materia de procedimiento judicial.

En Venezuela la Ley Orgánica de Protección de Derechos de Niños prevé en el artículo 201 y siguientes la figura especializada de Defensoría del Niño y del Adolescente como un servicio de interés público para prestar a éstos y a sus familias orientación y apoyo interdisciplinario, su intervención como defensor del menor ante las instancias administrativas, asistencia jurídica al menor, difusión de los derechos, etcétera.

Además, se elaboraron tanto en el seno del Poder Ejecutivo en materia de reforma judicial como en la Cámara de Diputados, como es el caso del proyecto de la diputada Barbagelata, iniciativas que tenían como único fin la creación del Defensor de los Niños y Adolescentes, por lo que la inclusión en este sistema integral de protección de una figura especializada con cierta independencia y estabilidad en el cargo que dependa del Poder Legislativo, se propone en consonancia con iniciativas ya existentes sobre la materia, tanto a nivel nacional como extranjero. Y sus funciones especializadas no se contraponen en absoluto con las funciones del Defensor del Pueblo previstas en la ley 24.284, cuya función es la de proteger los derechos de todos los particulares contra violaciones perpetradas exclusivamente por organismos públicos, y no por particulares, como puede darse en la problemática con el menor, cuya exposición y vulnerabilidad se observa no sólo frente a las instituciones públicas sino también ante sus padres, o familiares, como es el caso del tan lamentablemente usual caso del abuso sexual o del tráfico de niños.

Por los motivos expuestos, acompaño con mi voto el presente proyecto de ley.

3

Solicitada por el señor senador Giustiniani

LEY DE CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (O.D. N° 117)

Señor presidente: voy a adelantar mi voto afirmativo al dictamen por el cual el Senado introduce modificaciones a la media sanción de Diputados referida a la Ley de Protección Integral de la Infancia, en el entendimiento de que se trata de un texto am-

pliamente superador del de Diputados, que dejaba en pie muchos de los pilares de la institución del patronato que se decía se quería desterrar.

En nuestro país hay 12.5 millones de menores de 18 años. El 70 % de ellos son pobres (8.6 millones). Es decir, 7 de cada 10 chicos no cubren sus necesidades básicas. Más de la mitad de los chicos que se encuentran debajo de la línea de la pobreza es indigente (4.4 millones). Asimismo, según el último censo nacional un millón de niños con edades comprendidas entre 5 y 19 años no accedían a los sistemas de educación formal. Concomitantemente con estos indicadores, el gasto público consolidado dirigido a la niñez, en pesos constantes, registró una caída del 29,5 % en la variación interanual 2001/2002, y del 8 % en relación con el PBI. Esta es la verdadera catástrofe de la niñez en nuestro país.

Por ello, una de las principales deudas que tiene la democracia argentina en materia de los derechos humanos es la falta de adecuación de nuestra legislación interna a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que desde 1994 tiene jerarquía constitucional. Indudablemente existe entonces una colisión entre la cultura del patronato a la que da lugar la legislación vigente y la obligación de ajustarnos no sólo a lo que establece la convención sino a nuestra propia Constitución Nacional.

La condición jurídica de niños, niñas y adolescentes está regulada actualmente por la ley 10.903 (Ley Agote, inspirada por la institución del patronato), que concede al Estado un poder absoluto e incuestionable sobre la vida de adolescentes de hasta 16 años, y el régimen penal de minoridad (leyes 22.278 y 22.803) de la última dictadura. Y la aplicación de estas normas plantea una doble discriminación: por un lado, se discrimina a los niños y, por el otro, por ser pobres. De esta forma, por ser niños se los trata como objetos de protección, y por ser pobres se les aplica la ley con el fundamento de una supuesta protección. Además, no se contempla ninguna de las garantías constitucionales, a saber: principio de oralidad y publicidad; principio de defensa; principio de inocencia; principio de culpabilidad, derecho a recurrir; principio de legalidad; principio de racionalidad y proporcionalidad de la pena, principio de igualdad ante la ley; etcétera.

El sistema actual es así sumamente ambiguo, y permite que los jueces tengan un poder discrecional sobre los menores de 18 años, pudiendo "institucionalizarlos" si consideran que están bajo riesgo "físico o moral". Los institutos de menores y el proceso de institucionalización terminan entonces por avalar un proceso que viene a afianzar situaciones de exclusión social. Por ello, la criminalización de la pobreza es el verdadero eje de la discusión.

Según el trabajo del CELS "Situación de niños, niñas y adolescentes privados de la libertad en la provincia de Buenos Aires", de los 8.628 menores

de edad detenidos al 2001 en organismos supervisados por el Consejo Provincial del Menor, el 82 % lo estaba por razones asistenciales, contra el 18 % restante detenido por causas penales. Lejos de ser algo excepcional, la privación de la libertad para los niños y niñas, en este caso de la provincia de Buenos Aires, es una medida extendida.

Este plexo normativo tuvo consecuencias gravísimas para nuestro país. La institución del patronato está así muy inserta en la cultura de la sociedad misma, en la del Poder Ejecutivo, en la del Poder Judicial y también en la cultura de este Parlamento, que hasta el momento no ha podido superar estas normas.

De esta forma, la Argentina tiene un importante déficit en materia de los derechos de la infancia, lo que nos ha convertido en uno de los países de la región más atrasados y más brutales en materia de legislación de infancia. Prueba de ello es que a partir de 1997, y hasta el 2003, según consta en el libro de UNICEF "Sentencias de reclusión perpetua y prisión perpetua a personas menores de 18 años de edad en la República Argentina", al menos 12 menores fueron condenados a sentencias perpetuas, situación que no tiene parangón en América Latina. Así se verifica una práctica jurídica flagrantemente violatoria de los tratados de derechos humanos con rango constitucional como la Convención de los Derechos del Niño.

Por ello consideramos que el Congreso de la Nación está hoy ante la posibilidad histórica de derogar la Ley de Patronato. El sistema tutelar, inspirado en el empirismo positivista, tiene su origen en los Estados Unidos a fines del siglo XIX y se propaga por el mundo a comienzos del siglo XX. En un período de veinte años, que se inicia en 1919 con la legislación argentina, todos los países de América Latina adoptaron el nuevo modelo. Debemos señalar que el derecho tutelar de menores carece de una estructura dogmática sólida que asegure una aplicación igualitaria, ya que se basa en principios orientadores vagos como el "interés del menor", la "peligrosidad". La ley se utiliza entonces para establecer los poderes o facultades del juez y de la administración, en lugar que para limitarlos. Como el menor se considera incapaz, su reconocimiento de derechos subjetivos es prácticamente nulo, y los jueces gozan de una amplia discrecionalidad.

Asimismo debemos señalar que se trata de una norma de la misma época y matriz conceptual de las leyes de residencia y defensa social. Normas todas que responden al control social. En el caso particular de la ley de patronato, se procuraba disponer los pasos a seguir con la niñez, fundamentalmente con la que tenía problemas, que eran los hijos de aquellos sujetos a los que se pretendía controlar mediante la Ley de Residencia, es decir, los inmigrantes anarquistas y socialistas que debían ser ob-

jeto de una disciplina y control. Este es el origen histórico de la ley de patronato que hoy vamos a derogar.

Pero en la segunda mitad del siglo XX comienza a surgir una nueva concepción jurídica de la infancia y adolescencia que busca abrirse a una consideración plural del sujeto de derecho y desarrollar una teoría jurídica no excluyente, integradora e igualitaria en que tengan lugar las personas menores de edad con respeto de su igualdad, dignidad y de sus diferencias. Estas ideas encuentran su reconocimiento al aprobarse por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989 la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN).

En este sentido, la CIDN ha marcado un hito en el mundo con relación a los derechos, políticas y prácticas referidas a la infancia, transformando una concepción basada en la consideración de los niños y adolescentes como objetos de protección, en una concepción que respeta a la persona del niño y niña como sujetos de derechos y que concibe su interés como superior a todos los demás intereses de una sociedad determinada. Emerge así la doctrina de la protección integral. La doctrina de la protección integral, sostenida por la ONU en base a la Declaración Universal de los Derechos del Niño y plasmadas en las Reglas y Directrices de Beijing y Riad, afirma el valor intrínseco del niño como ser humano; la necesidad de un respeto especial a su condición de persona en desarrollo, y el reconocimiento de su vulnerabilidad, lo que los hace merecedores de una protección integral.

La CIDN es una declaración inequívoca de que los derechos de las personas menores de 18 años limitan la potestad punitiva del Estado. Es decir, se les reconoce a los niños, como un derecho subjetivo, el derecho a limitar el *ius punendi* y se les dota de garantías específicas, materiales y procesales, para ejercer este derecho. Pero la convención, además de reafirmar la vigencia de todos los derechos humanos para todas las personas (más allá de su edad), incorporará derechos que conforman un plus de protección específico para los menores de 18 años de edad. La niñez y adolescencia, históricamente objetivo de acciones de compasión-represión por parte del Estado y el mundo adulto, adquiere, a partir de la convención, el reconocimiento indiscutible de su calidad de sujetos de derecho.

La convención impone asimismo obligaciones significativas a los Estados parte, quienes deben disponer lo necesario para adecuar su ordenamiento jurídico y la organización, prácticas y procedimientos de todas las instituciones de acuerdo a los compromisos asumidos al suscribir y ratificar ese tratado internacional.

Por ello, a raíz de la convención los países iniciaron el proceso de adecuación de su legislación a la luz de la doctrina de la protección integral, consi-

derando al niño como persona en desarrollo y sujeto pleno de derechos. Sin embargo, si bien la Argentina ratificó la convención en el año 1990, que a partir de 1994 tiene jerarquía constitucional, nuestro país no ha realizado aún ningún tipo de movimiento significativo en pro de la adecuación de la legislación nacional a los principios y al texto de la convención.

¿Por qué es mejor el dictamen del Senado?

1. La media sanción de Diputados, en el capítulo referido a la protección integral, realizaba una enumeración acotada y parcial de algunos derechos teniendo como eje las políticas focalizadas en la pobreza. El dictamen del Senado, en cambio, efectúa un sistemático reconocimiento de los derechos con carácter universal e integral. El dictamen expresa reconocimiento por los derechos a la salud y la educación ausentes en la media sanción, que muy lejos se encuentran de estar garantizados en un país donde aumentan los índices de mortalidad infantil, de deserción y repitencia escolar. Se trata de derechos que no pueden ni deben estar ausentes en una ley de protección que se dice "integral".

2. El dictamen del Senado elimina por completo la posibilidad de judicializar problemas sociales, algo que en la media sanción de Diputados no estaba muy claro. Por ello sosteníamos que el proyecto de Diputados no reforma en lo sustancial la ley de patronato, manteniendo en el Ministerio Público especializado y en la justicia de menores la competencia en las causas donde los chicos son pobres.

3. En el dictamen del Senado se establecen garantías mínimas para los niños/as y adolescentes que deben respetarse en cualquier procedimiento administrativo y/o judicial, algo que estaba ausente en la media sanción de Diputados.

4. La posibilidad de la institucionalización era una de las grandes falencias de la media sanción. Esta posibilidad no estaba prevista ni como medida de excepción ni como ultima ratio. Frente a ello, entendemos que las medidas de protección integral no pueden consistir en privación de la libertad, algo que está correctamente planteado en el dictamen del Senado.

5. El dictamen del Senado reemplaza el actual Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene un presupuesto aproximado de 114 millones de pesos, y que ha trabajado casi exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense.

6. El Sistema Nacional de Protección Integral —con sus órganos: consejo federal y secretaría nacional— es más adecuado. Hay una mayor articulación Nación-provincias-municipios.

7. En el dictamen del Senado se crea la figura del Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

8. Se establece en el dictamen un capítulo referido a las organizaciones no gubernamentales – que tienen una amplia participación en la temática–, estableciéndose para las mismas una serie de obligaciones con sanciones en caso de incumplimiento, y un registro para transparentar la actividad.

9. El dictamen del Senado es mucho más contundente que la media sanción de Diputados en lo que se refiere a la asignación de recursos para la atención de la infancia.

Conclusiones

Necesitamos una ley que no sólo derogue formalmente la nefasta ley de patronato, sino que elimine fundamentalmente el paradigma tutelar. Si esto no se hace, los derechos de los niños, niñas y adolescentes quedarán reducidos sólo a meras intenciones.

Y creemos que las modificaciones introducidas por el Senado nos permiten avanzar en un sentido positivo, dejando atrás el texto de una media sanción en el que indudablemente se filtraban medidas propias del régimen de patronato que se decía se quería desterrar.

Entendemos que para seguir avanzando deben establecerse metas concretas para las políticas públicas donde el objetivo prioritario sea la erradicación de la pobreza, de la exclusión, de la desnutrición y la morbilidad materno-infantil, de la deserción y repitencia escolar, y la atención integral de los niños y adolescentes en situación de calle. Y creemos además que en la elaboración de estas políticas deben participar no sólo los gobiernos provinciales y locales, sino también la comunidad y los propios niños y adolescentes. La ley que sancionaremos hoy es un buen marco para avanzar en ese sentido.

En materia de asignaturas aún pendientes, sostenemos que hubiera sido importante incluirse en esta ley un derecho crucial para la infancia que desde hace años venimos reclamando junto a otros sectores: una asignación mínima garantizada para todo niño y adolescente, entendiéndose por ello el derecho universal a percibir por parte del Estado un ingreso monetario que le permita satisfacer sus necesidades básicas.

Además, en la consideración en particular, vamos a proponer la incorporación de dos nuevos artículos en los que quedaría plasmado un derecho que está ausente en la enumeración que hace el dictamen: el derecho a la salud sexual y reproductiva.

Por todo lo expuesto, señor presidente, voy a acompañar el dictamen en consideración, entendiendo que es éste un aporte importante a la lucha concreta para garantizar los derechos de los niños.

4

Solicitada por la señora senadora Gallego

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SENADORA SILVIA ESTER GALLEGO EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1º DE JUNIO DE 2005 RESPECTO DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL DEL SENADO DE LA NACION SOBRE RÉGIMEN DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

(Orden del Día N° 117/05)

Señor presidente, señores senadores:

Siempre he tenido la impresión de que cuando se trata el tema infanto-juvenil, se ha dado un enfoque pensando en la prevención de la delincuencia con un discurso dirigido más hacia la defensa de la sociedad que a lo que debió ser: “los derechos que la Convención Internacional le asigna a las niñas y adolescentes”.

Desde hace casi 100 años se mantiene la idea de que el Estado era quien debía intervenir y tomar medidas, no sólo cuando se hubiera cometido delito, sino cuando el problema fuese social, económico, etcétera.

No podíamos salir de lo que se conoce como la doctrina “de la situación irregular”, cuando el paradigma de la convención es absolutamente diferente, no obstante haber sido ratificada por ley 23.849, sancionada en 1990 y además, a partir de 1994, adquirió rango constitucional... sin embargo fue necesario que transcurrieran casi quince años para que nos encontremos hoy en este recinto... en un debate trascendente, donde la propuesta es pasar a la doctrina de la “protección integral”.

No quiero extenderme en la deuda mayor que es haber seguido aplicando, por parte de la mayoría de la justicia, la ley 10.903 - Ley del Patronato, que todos sabemos es de 1919 y estamos en el 2005.

Cabe remarcar la facultad de “disposición” que tenían los jueces sobre “el menor”, facultad de disposición sobre los chicos... fueran autores o víctimas, en caso de encontrarse “material o moralmente abandonado” o en “peligro material o moral”.

Así es como quedaban a disposición del juez, sin defensa, sin derecho de apelación y muchas veces hasta la mayoría de edad permanecían institucionalizados, con sistemas de verdadera pérdida de libertad.

Esto es la penalización de los problemas sociales... a veces mendicidad, fuga de hogar, oficios callejeros, etcétera... muchas historias nos cuentan de ello. En realidad, no ha sido otra cosa que la penalización de la pobreza.

En esa falta de garantías frente al proceso, es evidente que los chicos no son considerados sujetos

de derecho, sino objeto de tratamiento y segregación, y esto es lo que venimos a modificar.

El eje cambia fundamentalmente: los derechos de la niñez y la adolescencia no deben enfocarse a través de los niños menores de edad en conflicto con la ley sino que va dirigido a todas las niñas, niños y adolescentes.

También cambia el concepto de prevención. Ya no se trata de prevención de la delincuencia, en el lenguaje de las directrices, sino en la formulación de programas y políticas con la participación de la comunidad toda y fundamentalmente de los jóvenes.

Los niños y adolescentes, con la sanción del proyecto en tratamiento, serán sujetos de derechos y no objetos de control.

Como ha dicho Emilio García Menéndez “el derecho del menor como derecho mayor”. Ello hace que sea imperiosa la sanción de esta ley, para terminar con la cultura de la protección-represión.

Por medio de este nuevo texto legal creemos, sin temor de equivocarnos, que nos aseguramos la efectividad de los derechos que contienen los tratados internacionales de los derechos humanos, íntimamente vinculados a la convención sobre la infancia.

No vamos a dar fundamentos históricos ni a fatigar los debates doctrinarios que se vienen dando sobre la materia desde 1989 a la fecha, tampoco haremos referencias sobre las consecuencias de la realidad que nos ha demostrado la aplicación de la ley 10.903 omitiendo el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Pasando al texto propiamente dicho, haré algunas consideraciones específicas por la importancia que revisten:

El precepto “interés superior del niño” si bien no es nuevo en el análisis científico del derecho de familia a nivel internacional, su inclusión explícita en la convención adquiere reconocida relevancia, pero si bien es cierto que dicho principio ocupa un lugar central dentro del marco de la convención, no es menos cierto que a la hora de hablar de su significación, interpretación o aplicación, no sólo no es sencilla, sino que originó profundos debates. Por eso apoyamos la inclusión, en el artículo 3° del proyecto en tratamiento, que en el sancionado por Diputados no existía y sí en el dictamen del Senado.

Lo rescatamos fundamentalmente, primero, porque es un concepto que no sólo se limita al ámbito de la tutela sino que es mucho más amplio, pero por sobre todo es un principio que se hace efectivo atendiendo a las distintas culturas, es un concepto facilitador para la reflexión sobre los valores culturales en el proceso de toma de decisiones relacionados con la convención.

El punteo del artículo 3° apunta precisamente a acotar esa idea, que es un principio que plantea más preguntas que respuestas o que es tan abierto e in-

determinado que su ambigüedad resulta contraproducente.

En otro orden de cosas, adherimos a la postura de que todo lo relacionado a las políticas públicas infanto-juveniles, es una responsabilidad indelegable del Estado, como se consigna en el artículo 5°.

Remarcamos que el proyecto también incluye la participación comunitaria, artículo 6°, dado que el tema nos compromete a todos y, por supuesto, da a la familia una responsabilidad prioritaria, como se consigna en el artículo 7°.

El título II puntualiza principios, derechos y garantías que consagra la convención,... que podrá decirse que no hacía falta, pero lo que abunda no daña... sobre todo porque como ha dicho alguna vez el profesor Baratta, al que aprovecho a rendirle un homenaje, “a la hora de producir cambios en las relaciones entre derechos y hechos, ya que generalmente la implementación de normas jurídicas refleja una tensión entre ser y deber ser (sobre todo) en la percepción de los actores implicados en el proceso de la realidad social”.

Los cambios culturales en los operadores de esta ley seguramente no serán fáciles, por eso la redacción que le damos a su texto, toda vez que la distancia entre la situación real y la situación ideal de la niñez dibujada por la convención es enorme.

Seguramente no existen todavía las condiciones sociales, institucionales y estructurales pero sobre todo lo que no existe son las condiciones culturales para un acercamiento.

Después de la vigencia de la convención a nivel internacional lo más importante fue la declaración y el plan de acción adoptado por 72 jefes de Estado y de gobierno reunidos el 29 y 30 de septiembre de 1990 en New York en la Cumbre de la Infancia, con el objetivo de promocionar nuevas iniciativas a favor de ella. Sin embargo, seguimos viviendo en este presente a quince años de la convención y a pesar de la trágica coyuntura mundial de la situación de la niñez donde mueren miles y miles de niños por pobreza y enfermedad (la Argentina no está fuera de ello) aún estamos en falta, de allí es que pensamos que lo que hoy estamos haciendo en este recinto es una estupenda inversión para el futuro de nuestro país.

El Estado tiene que poner lo suyo pero la participación de las comunidades, la descentralización de los servicios, la coordinación interinstitucional son principios de la práctica a los que no estamos acostumbrados, pero ya es un imperativo de la hora.

No bastarán los cambios legislativos, serán necesarios cambios institucionales, transformaciones en las relaciones sociales y sobre todo en la participación de la sociedad civil, por eso a modo de conclusión creemos que los derechos de la niñez y adolescencia deben ser prioridad absoluta en el empeño del Estado y la sociedad civil.

Nuestro compromiso también está en el derecho que tienen los chicos a ser escuchados como portadores de una visión de la realidad y con un mensaje que les sea propio.

Esta es una ley de amor y de esperanza, tal vez debamos pedir perdón por la demora en dar respuesta. Todos tenemos una deuda de solidaridad con nuestros chicos.

Somos totalmente conscientes de la realidad y el dramatismo –el tema supera la ficción–, también sabemos que esto no empieza ni termina con las normas ... somos responsables por los chicos en el centro de Buenos Aires, en la Puna, en Tierra del Fuego o en La Pampa.

Recordando un dicho de Sarmiento hoy podemos decir, al igual que entonces, que hay más sociedades protectoras de animales que protectoras de los niños.

Sería necio y arrogante afirmar que el texto que estamos tratando no puede ser sujeto a mejoras, pero es lo que pudimos elaborar juntamente con Diputados.

En este siglo XXI necesitamos utopías positivas concretas, para diseñar un futuro mejor. Estamos totalmente persuadidos de que, votando afirmativamente, transitamos este camino...

Nada más, muchas gracias.

5

Solicitada por el señor senador Salvatori

DISCURSO DEL SENADOR PEDRO SALVATORI PARA SER INCORPORADO EN LA VERSION TAQUIGRAFICA DE LA SESION DEL DIA 1º DE JUNIO SOBRE SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(C.D.-65/99). Expedientes de Senado: S.-114/04, S.-1.010/04, S.-1.117/04, S.-1.253/04, S.-1.530/04, S.-2.523/04, S.-2.701/04 y S.-2.072/04.

Señor presidente:

Este tema ha producido un profundo debate en la Comisión de Legislación General y en virtud de los acuerdos y consensos alcanzados, comprometemos, en nombre del Interbloque de Partidos Provinciales, nuestro apoyo al proyecto, a pesar de las disidencias sobre aspectos particulares.

Debemos mencionar que durante su tratamiento ocurrieron penosos hechos de violencia que involucraron a menores, entre ellos, el triste episodio de Carmen de Patagones, hecho que debe llamarnos a la reflexión acerca de la situación de la infancia, porque a nadie se le escapa que la violencia es siempre el detonante de una situación de malestar que está en la sociedad en general, citamos una reflexión

que compartimos del diario "La Nación": "El clima social anómico e inseguro, las relaciones familiares con carencia de afecto y estabilidad y el ambiente agresivo que caracterizan a nuestro mundo globalizado son difícilmente soportados en la adolescencia, el punto más vulnerable de nuestro desarrollo humano, la causa de la violencia está vinculada con familias alteradas, barrios carecientes y desorganizados, con adolescentes involucrados con drogas y alcohol, entre otros motivos. Este dictamen, se vincula directamente con los hechos descritos, creemos que de niños felices van a surgir buenas personas, esto es indudable, las estadísticas criminales demuestran que un alto porcentaje de los mayores que delinquen provienen de institutos de la niñez, ¿cuál es la responsabilidad del Estado en esta situación? y ¿cuál es la nuestra en la complacencia de las mismas? Sin duda que este proyecto de convertirse en ley va a procurar un cambio en el viejo esquema de una ley que ha demostrado un fracaso que hoy lamentamos.

Este tema que hoy estamos debatiendo, ha tenido un largo tratamiento en esta Cámara, con la participación –como ya se dijo– de numerosos especialistas, finalmente nos disponemos a dar media sanción a un dictamen unificado proveniente de diversas iniciativas parlamentarias. Hemos participado como integrantes de la Comisión de Presupuesto en este debate, y asimismo nos ha interesado esta temática como representantes de una provincia que tiene una legislación análoga al proyecto que estamos tratando, es más, muchos de sus artículos son un calco de nuestra ley provincial aprobada en el año 1999.

Es así que compartimos el contenido del dictamen, que se compone de varios ejes fundamentales, uno es el referido a la Declaración de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; el otro es el referido al Sistema de Protección Integral de los Derechos de los Niños, y el tercero se refiere al aspecto presupuestario. Estos aspectos son trascendentes y han sido debidamente regulados en el proyecto, pero me animo a decir que a este esquema le faltan dos elementos normativos más, uno el referido a los menores que cometen infracciones a la ley penal, y el otro el referido a la aplicación práctica de esta ley, es decir, el diagrama institucional que está contemplado va a requerir de un enorme esfuerzo por parte del órgano administrador, que esperamos que se pueda llevar a cabo, porque sin duda la eficacia de este sistema va a redundar positivamente en el otro aspecto, más difícil, que es el referido a la infracción penal realizada por los menores. Queremos que sea posible esta reforma integral que se propicia, nos alarma un poco la amplitud de la ley, hubiera sido más factible no abarcar todos los aspectos, sino propiciar una reforma paulatina y concreta.

En este sentido, también queremos destacar que debe cumplirse estrictamente con el artículo 70. La transferencia a las provincias de los servicios de atención directa de los menores debe ser conjunta con la transferencia de los recursos presupuestarios en las respectivas jurisdicciones.

Tampoco puedo dejar de señalar que algunos de los artículos declarativos pecan por exceso, proclaman derechos que están contenidos en la Constitución, pero no existe paralelamente un correlato concreto de cómo llevarlos a cabo, por ejemplo el caso de la obligación del Estado (en general) de proveer de recursos a las familias de los menores carenciados, se trata sin duda de una expresión de deseos que respetamos y acompañamos pero hubiera sido más eficaz, si se quiere, en adoptar algunas pocas medidas concretas y posibles que seguramente a quienes han trabajado en este tema no le debe resultar ajena imaginar, y que hubieran dado otra impronta a este proyecto, un poco más real y menos declamativa.

En algunos países la conciencia pública sobre las causas y posibles soluciones de la situación de la niñez —reflejada en la cobertura de los medios— ha evolucionado de manera considerable. La concepción formal de los derechos del niño en cuanto a familia, educación, salud, seguridad, aspectos afines se ha fortalecido. Gracias en gran medida a los esfuerzos de los defensores de los niños durante los últimos 20 años, casi todos los gobiernos de la región, a excepción de Estados Unidos, ratificaron la Convención de los Derechos de la Infancia adoptada por Naciones Unidas en 1995.

Ella supone un compromiso de los gobiernos, en cooperación con los actores de la sociedad civil, para asegurar el cumplimiento de una amplia gama de derechos infantiles, incluyendo los de supervivencia, protección, desarrollo y participación.

En la actualidad los derechos infantiles se reconocen ampliamente en todo el mundo. Pero, pasar de la teoría a la práctica sigue siendo aún un gran desafío, uno de los más importantes. La convención aún no ha sido ejecutada plenamente y los objetivos establecidos todavía están lejos de ser cumplidos. Producto de esto, millones de niños sufren a diario abandono, explotación y abuso inconcebibles.

Es oportuno recordar el cambio paradigmático que significó la adhesión a la Convención de los Derechos del Niño junto con las resoluciones que le siguieron, especialmente las reglas de Beijing, las directivas de RIAD y la resolución 45/113 de las Naciones Unidas y que motivaron la sanción de varias leyes en concordancia como la que rige en la provincia del Neuquén.

Desde la antigua Ley del Patronato, basada fundamentalmente en la Doctrina de la Situación Irregular, donde el menor era considerado objeto de tutela, se produjo un salto cualitativo que permitió plasmar en leyes y acciones lo que proclaman dichas normas

internacionales: el niño y adolescente es un sujeto de derechos y obligaciones, y como tal incorporado plenamente a la vida de la comunidad. De este modo, se impuso una concepción de protección integral. La Convención Internacional de los Derechos del Niño transformó necesidades en derechos, y éste es el punto fundamental. Antes, el niño tenía necesidad de educación y salud. Después de la convención tiene derecho a la educación y a la salud. La diferencia reside en la exigibilidad de esos derechos, es decir, la convención reformuló de manera definitiva las relaciones entre la infancia y la ley.

En los nuevos derechos consagrados emerge como prioridad absoluta debido a su valor intrínseco, puesto que es una persona humana en condiciones peculiares de desarrollo, lo cual hace de él un ser humano completo en cada fase de su crecimiento, porque cada niño es la continuidad de su familia, de su pueblo y de la especie humana.

En todos los foros jurídicos internacionales referidos a este tema, se ha dado un constante debate del que se desprende la necesidad, expresada claramente, de no “judicializar la pobreza”, principio al que adherimos y reafirmamos. Pero al mismo tiempo, las deficiencias de la ley actual no hacen otra cosa que “pauperizar la justicia”, al no poner en juego los mecanismos necesarios para la protección integral de los menores.

La sociedad tiene una obligación ineludible de proteger la sociabilización de los menores, a la vez que le provee la dirección normativa esencial, para que ese ser humano en desarrollo (el niño o el joven) logre su condición óptima como ciudadano responsable, obediente de la ley y pueda contribuir al bienestar de su comunidad.

Ahí está la ley, ahora hay que aplicarla. Alguien comentó con cierta ironía que por lo menos “se ha logrado poner en el marco legal todos los derechos que están siendo violados”.

Voy a concluir con una frase que he leído que dice: “La imaginación vuela de la mano de la inocencia. Y el futuro asienta sus raíces en la imaginación, porque sólo el que se puede imaginar el futuro puede poner los medios para construirlo. Sólo el niño tiene intacta esa capacidad de soñar, por eso es tan importante mantenerla y cuidarla, para que el futuro sea mejor e inocente de tantas injusticias. Para conseguirlo hacen falta medios y esfuerzos, hace falta un presente responsable que piense en el largo plazo, en cambiar el mundo no sólo a favor de los niños, sino con ellos, porque uno nunca se cura de su infancia...”.

Por este motivo vamos a acompañar este proyecto, dando nuestro voto positivo, manteniendo nuestros disensos, en nombre del Interbloque Federal de Partidos Provinciales, con relación a la redacción de algunos artículos en particular.

Gracias, señor presidente.

Solicitada por la señora senadora Lescano**FUNDAMENTO DE LA DISIDENCIA PARCIAL
DE LA SEÑORA SENADORA NACIONAL
FABIANA LESCANO, EN EL DICTAMEN
EN DISTINTOS PROYECTOS DE LEY
SOBRE SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**

Señor presidente:

El dictamen de las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda sobre el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados y tenidos a la vista los proyectos de ley presentados por varios senadores sobre Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, merece objeciones con respecto al tratamiento del principio “interés superior del niño”, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, y del derecho al honor que tienen las personas menores de edad. Es por eso que he firmado el dictamen de comisión en disidencia parcial, y desde ya señalo que coincido plenamente con el fin que persigue el proyecto.

En tal sentido, y fundando mi disidencia parcial, paso a detallar los aspectos que merecen observaciones y proponer la modificación de los siguientes artículos:

Artículo 3°. Interés superior, inciso f) su centro de vida.

La Convención sobre los Derechos del Niño, con rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, establece en su artículo 3° que:

“1. En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

“Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

“Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios e instalaciones responsables del cuidado o la protección de los niños se ajusten a las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, así como número de su personal, en relación con la existencia de una supervisión adecuada.”

Por lo que podemos interpretar que el interés superior del niño debe prevalecer por encima de toda

medida que adopten las instituciones y organismos tanto públicas como privadas en las que se involucre a una persona menor de edad.

En cambio, el presente dictamen al abordar el interés superior del niño, condiciona este principio a que deba respetarse entre otros “su centro de vida”. La redacción del inciso f) del artículo 3° del dictamen referido lleva a confusión, porque:

a) “Su centro de vida”, como “...el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia”, no es por sí mismo una garantía para que se respeten las condiciones elementales que conforman lo que para la convención es el interés superior del niño, debido a que en muchos casos podemos estar hablando de niños institucionalizados o bajo el mal trato o abuso por parte de quienes son los responsables de su cuidado. Con lo cual el inciso f) estaría en contradicción con lo enunciado tanto en la convención como en el resto de los incisos del artículo 3° del dictamen en tratamiento.

b) Si bien el párrafo siguiente al inciso f) del mismo artículo 3° establece para qué casos rige el principio “centro de vida”, pareciera que se estuviera refiriendo al juez natural que deba entender en los casos donde se involucre a una persona menor de edad. Pero los asuntos mencionados en ese párrafo ya son materia de nuestro derecho civil y del derecho internacional privado, para este último entre sus instrumentos se encuentran la Convención Interamericana sobre Restitución de Menores –Uruguay 1989–, cuyo objeto es asegurar la pronta restitución de menores que hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente –ratificada por ley 25.358–, considerando menor a toda persona que no haya cumplido dieciséis años de edad; el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores –La Haya, 1980, ratificada por ley 23.857–, cuya finalidad es garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado parte y velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados parte se respeten en los demás Estados Parte, dejándose de aplicar este convenio cuando el menor alcance la edad de 16 años. Herramientas, a las que debemos agregar la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores –México 1994, ratificada por ley 25.179–, siendo su objeto “...con miras a la protección de los derechos fundamentales y el interés superior del menor, es la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales del mismo”, siendo para esta norma un “menor” todo ser humano cuya edad sea inferior a dieciocho años.

c) Aunque el último párrafo del artículo 3º procure poner luz sobre la importancia que tiene para los derechos y garantías de las personas menores de edad que siempre prevalezca el interés superior del niño por encima de todas otras cuestiones que se relacionen con ellos, el objetivo, y la buena intencionalidad de ese párrafo se pierde dentro del contexto del inciso f).

d) Además, si la intención es resguardar de alguna manera la buena relación y buen clima que pudiere existir entre las personas menores de edad y sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley en un ámbito familiar, la redacción propuesta en el inciso f) no es la apropiada. A lo que debemos agregar que los derechos y deberes de los mayores y de los menores en ese contexto están contemplados en el artículo 3º de la convención al desarrollar el concepto de interés superior del niño.

Por lo expuesto es que solicito se elimine del artículo 3º el inciso f).

Artículo 22. Derecho al honor.

El artículo del dictamen en tratamiento prohíbe toda acción que pueda afectar el honor, reputación e imagen de las personas menores de edad, resguardando de esta manera la integridad de quienes son considerados por el mismo proyecto como sujetos de derecho.

Sin embargo, la prohibición de "...exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables...", expresada en la primera parte del segundo párrafo del artículo 22 del dictamen pareciera estar condicionada a que "...cuando se lesionen el honor o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar", según se desprende del texto de la segunda parte del mismo párrafo del artículo en cuestión. Con lo que se interpreta que la acción que perjudica la integridad de la persona menor de edad será prohibida en la medida que provoque un daño en la persona, lo que despierta preocupación, ya que habría que determinar primero si hay o no un perjuicio para dar lugar a la prohibición de aquellas acciones que puedan dañar el honor, reputación e imagen del sujeto.

Me pregunto, si en estos casos, donde la integridad de las niñas, niños y adolescentes puede llegar a estar en situación de riesgo, no sería mejor prohibir toda acción que atente contra los derechos y garantías que el presente proyecto de ley pretende proteger.

Es razonable entonces que se elimine del segundo párrafo del artículo 22 del dictamen la frase "...cuando se lesionen el honor o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar".

Por todo lo expuesto, pido al Honorable Senado tenga por fundada mi disidencia parcial y se acepten las modificaciones que propongo con el fin de mejorar el presente dictamen.

7

Solicitada por el señor senador Gallia

**PALABRAS DEL SENADOR NACIONAL
DR. SERGIO ADRIAN GALLIA
PARA ASENTAR EN EL DIARIO DE SESIONES**

Orden del Día N° 117: Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Señor presidente:

El presente proyecto que estamos tratando, y que tiene ya media sanción de la Cámara de Diputados, ha transitado un largo camino en busca de los consensos necesarios que, debido a la seriedad y trascendencia del tema, aseguren a los destinatarios lo mejor que esta sociedad debe brindarles. A las niñas, niños y adolescentes, si me permiten, los denominaré actores, pues ellos son los principales protagonistas de este tema. El Estado con sus diversos organismos, las ONG y otros son meros participantes obligados a cuidar de ellos.

En esencia este proyecto trata, por una parte, de ratificar lo que nuestro país convalidó con su firma hace ya quince años, que es ni más ni menos que reconocer, estructurar, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hoy, nadie en su sano juicio, puede desconocer que estos actores son el futuro de cualquier organización social que se precie de tal.

Es notable que recién ahora la sociedad en su conjunto deba hacer lo que nosotros mismos en forma individual, como progenitores, hacemos en nuestra propia casa.

La consecuencia inmediata es la derogación del tan mentado Patronato de la Infancia de 1898. Si bien es cierto que en su momento histórico, social y económico, debe de haber sido pionero en la protección de los actores.

También es cierto que la decadencia de las instituciones referidas al tema, la desactualización y falta de recursos, la falta de renovación del personal y profesionales abiertos a las nuevas conductas y vicisitudes de la familia, de la sociedad, en donde en la práctica se mezclaron actores faltos de cariños y de ventura con verdaderos delincuentes, que tampoco se supo reconciliar con

la sociedad, todo esto sustituyó a la familia y comunidad con instituciones tutelares a veces dignas de horror.

Estos actores, a los cuales los adultos les imponemos obligaciones, también tienen derechos: derecho a calidad de vida, a la dignidad e integridad física, a la intimidad familiar, a la identidad, a la educación y la salud, a la protección misma desde el momento del embarazo, al deporte, a opinar y ser escuchado, a no ser discriminado por ningún motivo o condición socioeconómica, de ser atendido por los funcionarios públicos.

Para todo esto es necesario contar con un sistema de protección integral que articule el accionar contando con la participación del Estado nacional, las provincias y los municipios, mediante una coordinación de acciones que optimicen los recursos económicos y humanos, habiendo de estos últimos suficientes en cantidad y calidad, tras el objetivo de hacer lo más correcto para la salud física y emocional de los actores, para que éstos se conviertan en la base de nuestro futuro como sociedad, fortaleciendo los vínculos familiares, apoyando sus estudios, entre otros, motivo de la creación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.

Se crea la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que funcionará con representación interministerial y organizaciones de la sociedad, con el objetivo de establecer y articular políticas públicas integrales.

Los derechos de los usuarios tienen su defensor, también la población en general. Y ahora también lo tendrán estos actores a través del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tanto a nivel nacional como provincial con acuerdo de los respectivos Poderes Legislativos. El candidato elegido por la comisión bicameral creada al efecto en el Poder Legislativo de la Nación deberá informar anualmente sobre su gestión asegurando así dinamismo y conocimiento público de sus acciones.

Es importante también el rol que le cabe a las ONG, que pasan a ser activos participantes en la protección de los actores y de sus derechos.

Ya no es necesario disertar sobre los datos que la realidad nos brinda. Simplemente quiero agregar que considero que la correcta aplicación de esta ley, cuando sea sancionada, dejando de lado celos y competencias, con sabiduría y seriedad, asegura su éxito, que no veremos tal vez en lo inmediato pero que creo va a resultar en beneficio de las generaciones futuras y del futuro de nuestra sociedad y país.

Señor presidente, señoras y señores senadores, mi voto afirmativo para la sanción de esta ley es simplemente una cuestión de humanidad.

8

Solicitada por la señora senadora Giri

INSERCIÓN DE FUNDAMENTOS SENADORA HAIDE GIRI

Expediente 1.253/04. Proyecto de Ley. Tema: Leguizamón y otros: Proyecto de ley sobre sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Como no podía ser de otra manera, nuestros país participó e integró la voluntad común de la mayoría de las naciones del mundo ratificando la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, poniendo fin así a una absurda situación de inequidad de la mayoría de los niños, niñas y adolescentes.

El inmenso valor de esta convención instó a nuestros constituyentes para que le sea otorgada una importancia aún mayor que a nuestras propias leyes internas.

Los niños, niñas y adolescentes que lo fueron antes de la ratificación de la convención, vivieron una vida sin contención y amparo, y fueron librados a su propia suerte. Hoy, esos niños, son adultos que cargan con las consecuencias de un sistema que los excluyó.

Llamo a la conciencia de los legisladores para que la necesidad de los más necesitados se priorice frente a la voluntad política y las disputas partidarias.

La aprobación de este proyecto significa un verdadero y profundo avance contra el abandono, las desigualdades y los abusos contra la niñez y la adolescencia.

Estábamos en deuda para adecuar la normativa local vigente con los principios enunciados en la CIDN, persiguiendo que las niñas, niños y adolescentes fueran percibidos como personas desde un punto de vista integral, y no como propiedad de sus progenitores, de los institutos que los tienen en guarda en algunas situaciones, o como objetos de preocupación, mirados pero no escuchados.

Diez años nos ha llevado acordar criterios, lo que es lamentable desde una mirada retrospectiva si tenemos en cuenta a los millones de niñas, niños y adolescentes a los que no les tendimos nuestra mano de adultos “vaya a saberse por qué cuestiones”... Pero cualquiera que hayan sido, demuestran una absoluta insensibilidad. Por fin, y mediante un gran esfuerzo y dedicación de ambas Cámaras legislativas, fue posible que hoy estemos tratando en el Senado este proyecto de ley.

En este trabajo se hace un reconocimiento explícito al carácter prioritario que tiene la familia para el

desarrollo y el bienestar de los niños, garantizando que el derecho del niño a vivir con ella se transforme en un eje orientador de decisiones legislativas, judiciales, administrativas y de política pública en general.

A su vez, al avanzar en la consideración de los derechos civiles de la infancia y adolescencia, el presente proyecto ofrece las bases necesarias para que los intercambios en el interior del núcleo familiar se desarrollen en el marco de relaciones de equidad y de respeto mutuo entre adultos y niños, promoviendo que desde pequeños vayan aprendiendo la convivencia en democracia. El derecho de todos los niños y adolescentes a ser oídos en todos los aspectos que los afectan y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta, también ha sido considerado, así como también el derecho a recibir guía y orientación para ejercer sus derechos. El derecho a buscar y recibir información, a no ser discriminados, a estudiar y a la salud, conforman, entre otros, un grupo de normas cuyo cumplimiento puede contribuir a la democratización de los espacios por los que van transitando niñas, niños y adolescentes a lo largo de su desarrollo, imprimiendo así nuevas orientaciones a las relaciones intergeneracionales.

Este dictamen que hoy tratamos, constituyó un desafío a la capacidad de aunar criterios, tal como lo fuera en su momento la aprobación de la CIDN, y a la vez, una ocasión decisiva para reafirmar el valor de las relaciones basadas en el respeto, como la más pequeña de las democracias instaladas en el corazón de la sociedad, a la luz de los derechos y libertades de sus miembros como individualidades.

Creo importante subrayar que será necesario promover cambios también en la cultura y la sociedad, que se reflejarán en la vida cotidiana de los niños y en la vigencia de sus derechos.

Por su parte, distintos actores y operadores que intervienen en los sistemas judiciales deberán comenzar, los que no lo han hecho aún, a adoptar estrategias, decisiones y opciones que respeten las obligaciones para con los niños, plasmadas en este proyecto. Del mismo modo, la transformación del Consejo Nacional en Consejo Federal con la participación de las provincias, algo que le debíamos a un sistema federal de gobierno y la derogación de la Ley de Patronato, que en lugar de resolver los innumerables problemas de la infancia desde el amor y la justicia, castigaba la pobreza y a sus víctimas, son responsabilidades que asumo con alegría y placer.

Resulta imprescindible entonces, que la sociedad toda comience a considerar que las niñas, los niños y los adolescentes son personas en desarrollo, pero con opinión, con personalidad, creencias y valores, a los que hoy dotamos de derechos especiales y de las herramientas instrumentales que van a

garantizarles un marco de libertades. Todo esto implica implementar procedimientos y mecanismos efectivos que respeten y fortalezcan fundamentalmente su dignidad personal.

Quiero elogiar la inmensa tarea de quienes más trabajaron en este proyecto, y yo, como coautora de uno de los anteproyectos presentados, me enorgullezco de que hoy se trate en un marco de absoluto consenso, en virtud de la unificación de criterios que posibilitó un solo dictamen. No puedo dejar de mencionar y agradecer a los asesores que durante tantos meses trabajaron duramente en la concreción de un deseo que hoy va a plasmarse en realidad.

Coincidiendo en un todo con los conceptos e ideas de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, reitero mi satisfacción por este logro y adelanto mi voto positivo.

Muchas gracias, señor presidente.

9

**Solicitada por la señora senadora
Negre de Alonso**

**DISCURSO DE LA SENADORA NEGRE
DE ALONSO SOBRE LEY DE PROTECCION
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES**

Señor presidente:

En el mes de septiembre de 1990, nuestra Nación ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño mediante la ley 23.849. En agosto de 1994 fue elevada junto con otros instrumentos de derechos humanos a la máxima jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico.

A partir de dicha instancia, el compromiso de la Argentina ha sido siempre adecuar la legislación a los principios de esta convención, así como también a los demás instrumentos internacionales relativos a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Pero, a pesar del tiempo transcurrido, este compromiso se encuentra pendiente y estos documentos internacionales todavía no han logrado constituirse en un instrumento de reforma de políticas sociales y jurídicas destinadas a mejorar la situación de niños, niñas y adolescentes.

Adecuar la legislación interna a los preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es una asignatura pendiente de urgente realización, a los efectos de que los derechos fundamentales de todos los niños y adolescentes sean definitivamente protegidos a través de una efectiva legislación.

Asimismo, es de destacar que la ausencia de una legislación adecuada y coherente con los principios de la convención, permitió en muchas ocasiones

una “irregular” acción del Estado, quien en nombre de un “asistencialismo” privó de dicha protección a numerosos niños y adolescentes.

La protección integral unificará y definirá las garantías y nuevas definiciones del Estado en tanto garante de los derechos humanos, condiciones inseparables del verdadero desarrollo del sujeto, ciudadano del siglo XXI. Igualmente, la aprobación del presente proyecto de ley, conlleva hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos y garantías reconocidos a todos los niños, niñas y adolescentes que habitan nuestro suelo; importándonos como personas que deben alcanzar su total desarrollo y ser el presente y futuro de nuestra sociedad como verdaderos sujetos de derechos.

La problemática de los niños, niñas y adolescentes, no sólo ocurre en países subdesarrollados, sino que también en los países más ricos uno de cada seis niños vive bajo la línea de pobreza.

La brecha entre ricos y pobres se ensancha cada vez más. El treinta por ciento de los niños de menos de cinco años sufre hambre o está mal nutrido. El interés superior del niño no debe ser una mera declaración, sino, muy por el contrario, una efectiva y concreta protección del mismo desde el momento de su concepción.

Nunca olvidemos, por ello, que el primer derecho de una persona es su vida. La vida tiene seguro otros bienes, algunos más preciosos, pero aquel es el fundamental y condición para todos los demás. Por esto, la vida debe ser protegida más que ningún otro derecho. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública, cualquiera que sea, reconocer este derecho a unos y no reconocerlo a otros. No es el reconocimiento por parte de otros lo que constituye el derecho a la vida, sino que la vida es algo anterior, que exige ser reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.

Cabe señalar al respecto que tradicionalmente la legislación argentina protegió a las personas por nacer otorgándoles derechos, tanto en el ordenamiento civil como en el criminal; criterio que lejos de ser modificado fue posteriormente ratificado por la ley 23.849 que incorpora a nuestro plexo normativo la Convención sobre los Derechos del Niño. En dicha oportunidad, la Nación Argentina, expresamente, declaró que el artículo 1º de la misma debe interpretarse en el sentido de que niño “es todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los dieciocho años de edad”.

De este modo, atento a que la mencionada convención goza de rango constitucional, en función de lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Carta Magna, toda disposición legal relacionada con los niños, niñas y adolescentes debe inexorablemente guardar consonancia con aquella.

En el mundo, 250 millones de niños menores de 15 años trabajan, de los cuales entre 50 y 60 millones lo hacen en condiciones de peligro.

Según la Organización Mundial del Trabajo, 120 millones de niños y niñas entre los 5 y 14 años trabajan a tiempo completo, muchos de ellos seis días a la semana y algunos hasta siete.

En nuestra legislación laboral y conforme a convenios internacional celebrados ante la Organización Internacional del Trabajo, se protege a la niña, niño y adolescente procurando la eliminación del trabajo infantil.

Hoy, muchos niños, niñas y adolescentes están abandonados a sí mismos, sin contención alguna.

Como consecuencia de ello, se ha extendido el comercio sexual, la violencia en las escuelas, los crímenes, los secuestros, la mendicidad, etcétera.

El espíritu de esta norma es lograr una mejora de las condiciones de vida, comenzando por los menos favorecidos.

Esta ley establece un principio fundamental resaltando elemental rol que debe tener la familia como célula fundamental de la sociedad. En la realidad actual, por distintas circunstancias, muchas familias han postergado su deber educativo. Tanto el padre como la madre trabajan restando tiempo para sus hijos, sin otorgarles la contención afectuosa, económica y familiar.

Ante la situación preocupante del ambiente que rodea al niño, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone algunas directivas muy apropiadas.

En efecto, se debe dar prioridad a la salud materno-infantil, prevenir las enfermedades contagiosas infantiles, evitar los accidentes, mejorar el ambiente físico, en especial con relación al agua, a la higiene y sanitarios, a la polución ambiental, a los transmisores de enfermedades, a los peligros que ofrecen los componentes químicos, a golpes y accidentes, a la conducta de los niños y adolescentes, a su desarrollo psicosocial, y a la atención a niños en especial situación de riesgo como son los “niños de la calle”.

En el presente proyecto de ley, a través de los artículos del mismo, se trata de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el acceso a los servicios de salud, el derecho a la integridad personal, el derecho a ser protegidos contra toda forma de abuso y explotación, etcétera.

Siguiendo las pautas de las recomendaciones sugeridas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen temas urgentes que deben ser abordados para crear el ambiente propicio para el niño. Uno de ellos es combatir la pobreza con medios adecuados dentro de la presente economía globalizada.

Es tiempo de tomar en serio la exigencia del bien común público. La inequidad existente entre países centrales y países periféricos no puede seguir sosteniéndose.

En el presente proyecto de ley, sus artículos expresan la firme voluntad para mitigar en todo lo posible la falta de equidad social, la cual es una seria

y grave injusticia ya que afecta a seres humanos menores de edad en especial.

Al mismo tiempo, se dispone la obligación del Estado nacional de adoptar todas las medidas para dar efectividad a los derechos reconocidos en el presente proyecto de ley.

Siguiendo con nuestra fundamentación, consideramos que el niño como ser humano, es un ser muy complejo. Se entrelazan sus aspectos físicos, sexuales, psíquicos, mentales, económicos, sociales, políticos, espirituales; estos aspectos son una suerte de vasos comunicantes y exigen un tratamiento holístico y no sectorializado. Se desarrolla la persona completa y no sólo uno de sus aspectos. Es necesario que el niño, la niña y el adolescente lleven adelante su propio proyecto vital; para ello debe saber quién es, qué desea, qué lo construye y qué lo destruye; y en esta complejidad necesita de una educación adecuada.

El principal ambiente para su autocomprensión es el afecto y el amor y la contención segura a partir de sus padres y de toda su familia. Cuando esto falta, se dificulta, y muchas veces se vuelve nocivo, el desarrollo de los demás aspectos.

Esto nos obliga a considerar que el ámbito a privilegiar y fortalecer es el del ambiente familiar, que tiene por función equilibrar todos los aspectos del crecimiento de la persona.

Dentro del marco del presente proyecto hemos considerado oportuno derogar la ley 10.903 (de patronato de Menores), tal como lo dejamos establecido. Esto genera una suerte de consecuencias con respecto a los niños, niñas y adolescentes que tratamos de reparar mediante la creación de un sistema de protección integral para niñas, niños y adolescentes. Este sistema, no sólo busca brindar una solución para los niños, niñas y adolescentes comprendidos dentro de la ley 10.903, sino también para todos aquellos niños que se encuentren en situación de violación de sus derechos humanos o de abandono.

Consideramos que es necesario que la autoridad de aplicación ponga en conocimiento de los jueces competentes toda situación que determine la violación de los derechos humanos protegidos en la legislación vigente en relación a niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, dejamos expresado que el objeto del presente proyecto de ley es que todos los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer y disfrutar de la totalidad de los derechos y garantías reconocidos en el orden jurídico nacional y en los tratados internacionales incorporados por ley a nuestra Constitución Nacional. Creemos que de esta forma cada generación de seres humanos tendrá la posibilidad de disfrutar de una convivencia más armónica y pacífica, que permita la plena realización de la persona.

Quiero destacar y agradecer especialmente la colaboración de los señores y señoras senadoras para que hoy este proyecto sea el fruto de un consenso entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que acompañen la aprobación del presente proyecto de ley.

Liliana T. Negre de Alonso.

10

Solicitada por la señora senadora Ibarra

INSERCIÓN DEL DISCURSO DE LA SENADORA VILMA L. IBARRA EN VERSION TAQUIGRAFICA - SESIÓN DEL 1º DE JUNIO DE 2005

Sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. (Orden del Día N° 117.)

Señor presidente:

En relación al tratamiento en particular del proyecto, en el título II, artículos 8º a 31, queremos plantear nuestra disidencia con los artículos 11 y 22 por cuestiones que entendemos como errores de redacción, pero que desvirtúan el sentido de los artículos.

En el caso del artículo 11, el texto del mismo corresponde a la unificación de los artículos 24 y 25 de la O.D. N° 1.197 que acordáramos el año pasado. Dicha orden del día receptaba el contenido de nuestro proyecto, y de otros senadores, en cuanto al derecho de las niñas, niños y adolescentes tanto a ser criados por sus padres como a mantener el vínculo y contacto personal con ellos. Pero como decía, al unificarse el texto de ambos artículos, el último párrafo del artículo 11 de la O.D. N° 117 que debiera referirse a los casos en que excepcionalmente y por ser imposible, los niños no crecen y se desarrollan con su familia de origen, sino en un grupo familiar alternativo, de conformidad con la ley, es decir, al segundo párrafo del artículo, esta excepción queda referida al derecho de los niños al vínculo y contacto permanente con sus padres, estando éstos en situación de institucionalización, lo cual no tiene sentido.

Por lo tanto, debería eliminarse el último párrafo, que no se refiere al anterior a él, y el segundo párrafo debería quedar redactado de la siguiente forma, conteniendo el párrafo eliminado: "Los organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen. *Sólo en los casos en que ello sea impo-*

sible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley. Asimismo, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aún cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia; salvo que dicho vínculo amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley". (La cursiva es lo incorporado que contiene al último párrafo actual que proponemos eliminar.)

Por otra parte, en cuanto al artículo 22, resulta fundamental volver a la redacción del artículo 39 de la O.D. N° 1.197, del cual surge. El texto del segundo párrafo del artículo 22 es confuso y dicho párrafo debiera redactarse de la siguiente forma: "Se prohíbe exponer, difundir o divulgar, a través de cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a niñas, niños y adolescentes, contra la voluntad de estos o la de sus padres, representantes legales o responsables. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, imágenes o informaciones, a través de cualquier medio, que lesionen la dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes, o constituyan ingerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar". Asimismo, es necesario agregar como último párrafo al artículo 22: "Queda expresamente prohibido exponer, difundir o divulgar por cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los niños, niñas y adolescentes que hubieran sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles; salvo autorización judicial en contrario". Este párrafo era parte, asimismo, del artículo 39 de la O.D. N° 1.197.

Por último, dejamos planteada nuestra oposición a que se elimine del artículo 14 de la O.D. N° 117, sobre derecho a la salud, la obligatoriedad de los médicos a brindar la atención profesional necesaria a las niñas, niños y adolescentes. Consideramos trascendental la accesibilidad a los servicios de salud, y la garantía de que la institución de salud a la que accedan los sujetos de esta ley, sus profesionales, deben asegurar la prestación profesional necesaria, no pudiendo negarla por ningún motivo, tratándose del interés superior del niño y del acceso a servicios de salud médica y legalmente reconocidos.

En cuanto al título III, artículos 32 a 41, creemos necesaria la adecuación del artículo 40 a lo convenido en la última reunión plenaria de comisiones. Allí se debatió sobre la intervención de la autoridad judicial como garantía de legalidad de las medidas administrativas dispuestas por la autoridad administrativa local y sobre los diferentes procedimientos y autoridades jurisdiccionales intervinientes, en vi-

gencia en diversos distritos. En este sentido, si bien el párrafo 4° se ha modificado de acuerdo a lo consensuado en esa reunión, el segundo párrafo mantiene la referencia al juez competente en materia de familia". Por esta razón es que se solicita que en el segundo párrafo, al igual que en el cuarto, lugar en el "juez competente en materia de familia", diga "autoridad judicial competente".

Vilma L. Ibarra.

11

Solicitada por la señora senadora Perceval

INSERCIÓN DE LA SENADORA NACIONAL MARIA CRISTINA PERCEVAL

(Orden del Día N° 117/05)

Protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente

Sesión del día 1° de junio de 2005

Desde la promulgación en la Argentina de la ley 10.903 de patronato de menores (1919), en toda América Latina se establecieron leyes que buscaban reconocer la especial situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, y las obligaciones del Estado, la familia y la sociedad en general, respecto de ellos/as.

La doctrina que inspiró estas leyes se caracteriza por considerar al sector más vulnerable de los niños, niñas y adolescentes como objetos de la protección, el control y la represión por parte de los adultos y del Estado, planteando su protección a través de la regulación de organismos judiciales y administrativos centralizados. Las leyes inspiradas en este modelo se estructuran a partir de una radical separación de dos tipos de infancia: la que tiene sus derechos satisfechos, y aquella que no los tiene. Las leyes se aplican sobre el segundo grupo para compensar las "debilidades" del sistema social y familiar.

Estas leyes confunden y brindan el mismo tratamiento a la infancia que se ve amenazada o dañada en su desarrollo y a los niños, niñas y adolescentes que infringen las leyes penales, e incluso a estos últimos y a quienes estaban en riesgo de hacerlo. Esta legislación aplica métodos propios del sistema punitivo, que se administran en el marco de una jurisdicción centrada en la autoridad del juez y la aplicación discrecional del criterio de peligrosidad social.

En torno de estos principios se construyó un complejo sistema jurídico-institucional, y un conjunto de establecimientos correccionales y organizaciones filantrópicas para controlar-reprimir a los "menores peligrosos" y asistir a los "menores en peligro", con un marcado predominio de las competencias judiciales.

De esta manera, los institutos de menores “se convierten en espacios de judicialización de las desigualdades sociales, y tal como los describe Donzelot, en “lugares de concentración de infortunados, de míseros y de desgraciados”.

No fue sino hasta la última década del siglo XX cuando la Doctrina de la Protección Integral surgió y se fue consolidando a la par que era firmada y ratificada la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Desde ese momento, la visión sobre los derechos de la infancia se modificó sustancialmente. A partir de entonces, la gran mayoría de los países iniciaron un proceso de revisión de la normativa referida a la protección de sus niños, niñas y adolescentes.

El paso de un modelo a otro significa el fin de una visión de niños, niñas y adolescentes como “menores objeto de tutela por parte del Estado”, a ser considerados sujetos activos de derechos, con capacidades y con los mismos derechos que todas las demás personas, más los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que les corresponden por su condición de personas “en desarrollo”.

También significa renunciar a establecer con ellos relaciones verticales basadas en el ejercicio autoritario de la tutela, una de cuyas principales consecuencias ha sido la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes ya sea, institucionalización “asistencial” indiscriminada ante casos de “abandono material y/o moral”, como institucionalización “penal” sin derecho al debido proceso, producto del vínculo automático entre pobreza y criminalidad.

Hace 15 años la Argentina asumió el compromiso de garantizar el respeto de los derechos de niñas y niños con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23.849 de 1990, incorporada a nuestra Constitución Nacional con la máxima jerarquía existente en el ordenamiento jurídico interno; artículo 75, inciso 22). Desde entonces, distintas iniciativas intentaron avanzar en reformas institucionales que efectivizaran sus disposiciones. No obstante, el sistema de patronato sigue vigente.

Durante las últimas décadas, la perspectiva teórica tutelar, paradójica y contradictoriamente, fue siendo superada por una resignificación de la infancia en clave de derechos humanos. Asimismo, la realidad evidencia su fracaso. El alto porcentaje de población carcelaria adulta que pasó por institutos de menores durante su infancia y adolescencia, so pretexto de tutela, desarrollo integral y resocialización, desmiente este paradigma. Más de la mitad de la población penitenciaria ha transcurrido parte de su niñez y adolescencia en institutos de menores. Según datos del año 2000 de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, 7 de cada 10 de-

lincentes adultos eran institucionalizados durante su infancia por motivos asistenciales.

Por otra parte, en Mendoza, provincia que cuenta con una población penitenciaria de entre 2.400 y 2.500 internos, se da la triste situación –constatable empíricamente– de que más del 65 por ciento de esta población penitenciaria pasó por institutos de menores durante su infancia y adolescencia.

La Convención sobre los Derechos del Niño supera las instituciones del patronato y la tutela, concibiendo a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Ello demanda la construcción de un sistema de protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia, que considere sus derechos como derechos humanos; que separe la protección de los mismos de las posibles reacciones ante los delitos penales; y que asegure –paralelamente a la reforma legislativa– una profunda reforma institucional.

Una ley de protección integral de derechos implica dejar atrás el modelo judicializador y crear una institucionalidad política, jurídica y administrativa que considere a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y personas en desarrollo, que impida el desmembramiento familiar y social y garantice políticas de inclusión plena.

Esta ley no cambiará mágicamente la realidad cotidiana de nuestros niños y niñas. Pero sin duda, transformará la arquitectura institucional y profundizará el compromiso no sólo del Estado –que ha hecho de la defensa de los derechos humanos un eje transversal a todas sus políticas públicas– sino del conjunto social en hacer realidad la meta de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria, fundamentalmente, para la infancia.

Disidencias

En relación con el tratamiento particular de los artículos correspondientes al Orden del Día N° 117 sobre Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, quiero plantear mi disidencia respecto de los artículos 3° (Interés superior del niño), 11 (Derecho a la identidad), 14 (Derecho a la salud) y 22 (Derecho a la dignidad).

Artículo 3° - Interés superior del niño

Independientemente del voto afirmativo de este artículo, creo necesario eliminar el inciso f) y el segundo párrafo del artículo 3° en relación con la consideración del “centro de vida” del niño, niña o adolescente en el respeto de su interés superior, a saber:

Artículo 3°: *Interés superior*. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar:

a) Su condición de sujeto de derecho;

- b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta;
- c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;
- d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;
- e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común.

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

El concepto de “centro de vida” es ambiguo y confuso. Por ejemplo, en el caso de las apropiaciones ilícitas de niños y niñas, es irrelevante dónde éstos/as pasaron la mayor parte de su vida. Nos encontramos ante la presencia de un delito por lo que el “centro de vida” no es un parámetro de interpretación sobre lo que resulta más apropiado para él/ella.

De la misma manera, resulta criticable determinar cuándo rige este principio, a saber:

Art. 3º, inciso f): Este principio rige en materia de patria potestad pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancias vinculadas a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse.

Si el “interés superior del niño” es interpretado como la satisfacción plena de todos los derechos reconocidos al niño, niña o adolescente, ello deberá regir en todas las acciones del Estado, la comunidad y la familia. No se encuentra razón para limitarla a las materias allí establecidas.

Otra cuestión a tener en cuenta, es que la expresión “centro de vida” colisiona con la terminología adoptada por los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Estado es parte:

– *Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores*, adoptado el 25/10/80 por la 14ª. Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. Aprobado por ley 23.857 de 1990.

Son fines del convenio:

- a) Garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante; y
- b) Velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes.

Establece que el traslado o la retención de un niño o niña se considerarán ilícitos “cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención” (artículo 3º, inciso a).

Asimismo, establece que “cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de menores tenga dos o más sistemas de derecho aplicables en unidades territoriales diferentes:

- a) Toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se interpretará que se refiere a la residencia habitual en una unidad territorial de ese Estado;
- b) Toda referencia a la ley del Estado de residencia habitual se interpretará que se refiere a la ley de la unidad territorial del Estado donde resida habitualmente el menor (artículo 31).

– *Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores*, adoptada en México el 18/3/94. Aprobada por ley 25.179 de 1999.

Tiene por objeto la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como la regulación de sus aspectos civiles y penales. En tal sentido, los Estados Parte “se obligan a:

- a) Asegurar la protección del menor en consideración de su interés superior;
- b) Instaurar un sistema de cooperación jurídica entre los Estados Parte que consagre la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como adoptar las disposiciones legales y administrativas en la materia con ese propósito; y
- c) Asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacional al Estado de su residencia habitual, teniendo en cuenta el interés superior del menor (artículo 1º).

Asimismo, se señala que “respecto a un Estado que tenga en cuestiones tratadas en la presente convención dos o más sistemas jurídicos aplicables en unidades territoriales diferentes, toda mención (...) a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá referida a la residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado” (artículo 24, inciso d).

– *Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores*, adoptada en Montevi-

deo, Uruguay, el 15/7/89. Aprobada por ley 25.358 de 2000.

La convención tiene por objeto “asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado Parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente” (artículo 1º).

Asimismo, señala que “se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se produzca en violación de los derechos que ejercían, individual o conjuntamente, los padres, tutores o guardadores, o cualquier institución, inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley de la residencia habitual del menor” (artículo 4º).

Artículo 11. - Derecho a la salud

Respecto del artículo 11, sugiero una modificación en su redacción, a los fines de lograr su coherencia interna.

En el artículo 11 del O.D. N° 117 que se aprobó, la excepción que contempla el último párrafo remite al derecho de los niños, niñas y adolescentes al vínculo y contacto directo con sus padres ante situaciones de institucionalización de éstos últimos, lo cual carece de sentido.

El derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley, debe remitir al segundo párrafo del citado artículo, en el sentido de que esta excepción es para aquellos casos en que los niños y niñas no puedan ejercer su derecho a conocer a sus padres biológicos, o a crecer o desarrollarse en su familia de origen.

Por ello, proponemos la siguiente redacción:

Artículo 11: *Derecho a la identidad.* Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil.

Los organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen. Sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un

grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley. Asimismo, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aún cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley.

En toda situación de institucionalización de los padres, los organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquellos, siempre que no contraríe el interés superior del niño.

Artículo 14. - Derecho a la salud

Sugerimos sea reincorporada una última frase del artículo 14 del O.D. N° 117 al segundo párrafo del artículo 14, en relación con la obligación de los/as médicos/as de brindarles a niños, niñas y adolescentes la asistencia profesional necesaria (la que no podrá ser negada o evadida por ninguna razón).

Originalmente, esta frase sí estaba contemplada en el Orden del Día N° 117. Que la obligación de los/as médicos/as a brindar asistencia sea explicitada, fortalece el derecho de los niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas a ejercer su derecho a la salud en igualdad de oportunidades.

En este sentido, se sugiere que el artículo quede redactado de la siguiente manera:

Artículo 14: *Derecho a la salud.* Los organismos del Estado deben garantizar:

- a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad;
- b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración;
- c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia;
- d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social.

Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Los médicos están obligados a brindarles la asistencia profesional necesaria, la que no podrá ser negada o evadida por ninguna razón.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a reci-

bir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.

Artículo 22. - Derecho a la dignidad

Respecto del artículo 22, se considera necesario incorporar un último párrafo estableciendo que la prohibición de divulgar o difundir información sobre los niños, niñas y/o adolescentes que sean sujetos pasivos o activos de delitos sea absoluta, tal como lo ha establecido la legislación nacional vigente y la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

Artículo 22: Derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen.

Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.

Queda expresamente prohibido exponer o divulgar, por cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles.

María C. Perceval.